



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

### RELACIÓN DE ACUERDOS

*Órgano de gobierno*

Pleno

*Lugar*

Madrid

*Fecha*

29/01/2025

*Acuerdos adoptados*

**I-1º.-** Aprobar, por asentimiento, el acta de la sesión plenaria del día 15 de enero de 2025.

**I-2º.-** Quedar enterado del cumplimiento de los acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria.

**I-3º.-** Quedar enterado de los informes de las comisiones y vocales sobre actividades del Consejo en los términos que figuran en el acta.

**I-4º.-** Nombrar, por unanimidad, como secretario general del Consejo General del Poder Judicial a Don Miguel Hernández Serna, magistrado en situación de servicios especiales en la Carrera Judicial, situación en la que continuará durante el tiempo en que desempeñe el citado cargo.

El presente nombramiento de Don Miguel Hernández Serna como secretario general del Consejo General del Poder Judicial responde a los principios de mérito y capacidad del candidato, cuya cualificación e idoneidad para tal cargo, resulta sobradamente acreditada sobre la base de su trayectoria profesional, como ha quedado reseñado en el acta de la sesión plenaria y consta en la documentación incorporada a la propuesta sometida al Pleno. Posee una profunda formación jurídica avalada por su condición de fiscal (en excedencia), magistrado especialista en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y por su experiencia como letrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo y letrado del Tribunal Constitucional.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-5º.-** Se retira, por unanimidad, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta del nombramiento como Director/a del Centro de Documentación Judicial de este Consejo General del Poder Judicial, para su reformulación y provisión de la referida plaza por concurso de méritos.

**I-6º.-** Se retira, por unanimidad, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta del nombramiento como Director/a de la Escuela Judicial, para su reformulación y provisión por concurso de méritos.

**I-7º.-** Aprobar, por asentimiento, la renovación por un año, con efectos del día 17 de marzo de 2025, del nombramiento de Patricia Fresco Simón, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como jefa de sección en el Gabinete Técnico, de conformidad con lo establecido en el artículo 621.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

**I-8º.-** Aprobar, por asentimiento, la renovación por un año, con efectos del día 13 de marzo de 2025, del nombramiento de Pablo Catalán García, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como inspector delegado del Servicio de Inspección, de conformidad con lo establecido en el artículo 621.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

**I-9º.-** Aprobar, por asentimiento, la renovación por un año, con efectos del día 13 de marzo de 2025, del nombramiento de Cristina García Arangüena, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como letrada del Servicio de Inspección, de conformidad con lo establecido en el artículo 621.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

**I-10º.-** Aprobar, por asentimiento, la renovación por un año, con efectos del día 9 de marzo de 2025, del nombramiento de Carlos Prat Westerlindh, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como inspector delegado del Servicio de Inspección, de conformidad con lo establecido en el artículo 621.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-11º.-** Aprobar, por asentimiento, la renovación por un año, con efectos del día 13 de marzo de 2025, del nombramiento de Enrique Roldán López, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como letrado del Servicio de Inspección, de conformidad con lo establecido en el artículo 621.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

**I-12º.-** Aprobar, por asentimiento, la renovación por un año, con efectos del día 2 de febrero de 2025, del nombramiento de Miguel Pérez-Moneo Agapito, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como profesor en la Escuela Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 618.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

**I-13º.-** Aprobar, por asentimiento, la renovación por un año, con efectos del día 2 de febrero de 2025, del nombramiento de Natalia Fernández Suárez, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como profesora en la Escuela Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 618.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

**I-14º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado una plaza de Magistrado o Magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por la jubilación por razón de edad del Magistrado de la misma Sala Fernando Pignatelli Meca, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 343, 344 b), 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 a) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-15º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado una plaza de Magistrado o Magistrada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, turno jurídico militar, por la jubilación por razón de edad del Magistrado de la misma Sala Francisco Javier de Mendoza Fernández, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 343, 344 b), 599.4ª y 13ª



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 a) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-16º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por expiración del mandato de Manuel Bellido Aspas, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-17º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por expiración del mandato de María Félix Tena Aragón, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-18º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por expiración del mandato de José María Gómez y Díaz-Castroverde, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-19º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por expiración del mandato de Javier Marca Matute, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-20º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por expiración del mandato de Jesús María Chamorro González, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-21º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por expiración del mandato de Celso Rodríguez Padrón, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-22º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por expiración del mandato de Joaquín Cristóbal Galve Sauras, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-23º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por expiración del mandato de Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 336, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-24º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por expiración del mandato de Luisa María Gómez Garrido, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 333, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-25º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por expiración del mandato de Andreu Enfedaque Marco, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 333, 99.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-26º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por expiración del mandato de Luis Fernando de Castro Mejuto, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 333, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-27º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por expiración del mandato de María Aurora de la Cueva Aleu, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 333, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-28º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por expiración del mandato de Francisco Javier Lluch Corell, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 333, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-29º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, por la jubilación por edad del anteriormenete nombrado, Jesús María Martín Morillo, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 333, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 c) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-30º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Tarragona por expiración del mandato de Joan Perarnau Moya, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-31º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Toledo por expiración del mandato de Juan Ramón Brigidano Martínez, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-32º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Valencia una vez que ha expirado el mandato de la anteriormente nombrada, María Pilar Esther Rojo Beltrán, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-33º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Valladolid por expiración del mandato de Francisco Javier Carranza Cantera, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-34º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Zamora por expiración del mandato de Jesús Pérez Serna, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-35º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Zaragoza por expiración del mandato de Alfonso Ballestín Miguel, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-36º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Santa Cruz de Tenerife, vacante por jubilación del anteriormente nombrado Joaquín Luis Ástor Landete, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-37º.-** Anunciar en el Boletín Oficial del Estado la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincia de Madrid por expiración del mandato de Juan Pablo



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

González González, y aprobar las bases rectoras de la convocatoria según proyecto anexo, elaborado sobre las aprobadas por el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 9 de octubre de 2024; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326.2, 337, 599.4ª y 13ª y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 2.1 e) y 12 y siguientes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-38º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de una plaza de Magistrado o Magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por la vía del artículo 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar Magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra a Alicia Chicharro Lázaro.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata, acreditados a fecha de la presentación de la terna por el Parlamento de Navarra al Consejo General del Poder Judicial.

.- Desde una perspectiva discente, Alicia Chicharro Lázaro es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, 1994; doctora en Derecho por la Universidad Pública de Navarra, 2000 (con la tesis con el título: *"El principio de subsidiariedad y el Derecho comunitario europeo"* y la calificación de sobresaliente Cum Laude por unanimidad). Es Diploma de Práctica Jurídica por Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Navarra (1995).

.- Por su parte, desde una perspectiva docente, la candidata nombrada es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Pública de Navarra desde el año 2000 a la actualidad, impartiendo las siguientes asignaturas: Public International Law (Business & Law); International Protection of Human Rights (on-line); Derecho Internacional Público (Derecho y ADE-Derecho); Derecho de la Unión Europea (Derecho y ADE-Derecho); Derecho Social Europeo (Relaciones Laborales); Organizaciones Internacionales (Derecho), entre otros.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Ha impartido numerosas conferencias relativas a sus áreas de conocimiento, participado en diversos cursos de especialización jurídica y docente, y formado parte de Comités científicos nacionales e internacionales.

.- El Pleno ha valorado especialmente que junto a la profesión jurídica en el ámbito universitario, la candidata nombrada ha sido nombrada Jueza Sustituta de los Juzgados de Pamplona, Aoiz, Tafalla, Estella y Tudela, desde 2002. En esta línea, hay que subrayar que ha dictado más de 1.000 sentencias en distintas jurisdicciones (Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, Juzgados de lo Penal y de lo Social).

.- La Sra. Chicharro Lázaro tiene una prolífica actividad científica. En efecto es autora de 4 monografía, 15 artículos doctrinales y 14 colaboraciones en obras colectivas. Los libros publicados son los siguientes: *"El principio de subsidiariedad en la Unión Europea"*, Pamplona, Aranzadi, 2001; *"El principio de subsidiariedad y el Derecho Comunitario Europeo"*, Chadwyck-Healey, en internet, 2001, publicación de la tesis en Internet (ISBN: 0-493-11696-6); *"La responsabilidad internacional del Estado en el Derecho Internacional actual"*, Pamplona: Thomson Reuters-Aranzadi, 2020; y *"Migración y derechos humanos"*, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020. Entre sus colaboraciones a obras colectivas, algunas de las más recientes son las siguientes: *"La articulación de los tribunales internacionales como mecanismo de justicia transicional frente a las violaciones graves de los derechos humanos"*, en Roldán Jimeno (dir.), Justicia Transicional: Historia v actualidad, Pamplona: Thomson Reuters-Aranzadi, 2017; *"Las desapariciones forzadas de niños a la luz de la Convención de las Naciones Unidas de 2006"*, en Roldán Jimeno y Soledad Barber (eds.), Niños desaparecidos, mujeres silenciadas, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017; *"Medios de comunicación digital y derecho al olvido en la Unión Europea"*, en AA.VV. El fin de un modelo de política, La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social, Universidad de La Laguna, 2018; *"La responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales: la Organización Mundial de la Salud y la pandemia del COVID-19"*, en Raquel Luquin Bergareche (dir.), COVID-19: Conflictos jurídicos actuales y otros desafíos, Madrid: Wolters Kluwer-Bosch, 2020; y *"The Legal Framework of Refugee Protection in International Law"*, en Alicia Chicharro Lázaro (ed.), Migración y derechos humanos, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020.

Ha sido colaboradora externa de la editorial Aranzadi: analista de sentencias del TJUE (2001-2003) y es Evaluadora del sello de internacionalización de UNIBASQ (desde el año 2019).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La candidata nombrada es miembro del Consejo Asesor de Derecho Civil Foral de Navarra (desde 2016) y vocal del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo (desde 2019). Alega niveles medios o altos de conocimiento de los idiomas inglés, francés, italiano alemán y euskera.

La ponderación de todos estos méritos, considerados individualmente y en su conjunto, más otros que constan en su currículum, hace que la profesora de la Universidad Pública de Navarra Alicia Chicharró Lázaro, sea considerada la aspirante más idónea para el desempeño de plaza, sin desmerecer la trayectoria profesional y los méritos de las otras dos candidaturas de la terna.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-39º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de Antonio Salas Carceller), y presentada por la ponencia del procedimiento de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra desde el 07/02/2009.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Tal y como exigen las bases de la convocatoria, deben ponderarse los méritos que ponen de manifiesto o las aptitudes de excelencia jurisdiccional expresadas en la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción, valorados a partir de las resoluciones aportadas, su trayectoria profesional y en la comparecencia; en segundo lugar, el desarrollo de actividades jurídicas llevadas a cabo en desempeños gubernativos o gubernativo-jurisdiccionales; en tercer lugar, la experiencia acumulada en la Carrera Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes de excelencia jurisdiccional; y por último, deben considerarse las restantes actividades profesionales, docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las aptitudes de excelencia que sean útiles en la actividad gubernativa y el ejercicio de la jurisdicción.

Pues bien, atendiendo a los criterios de ponderación expuestos, tanto en el orden de su prelación individual como recogen las bases, como en una ponderación en conjunto, el Pleno considera que la trayectoria profesional de Manuel Almenar Belenguer acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de Magistrado del Tribunal Supremo.

.- Siguiendo el orden establecido, en la designación del candidato nombrado, el



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden civil, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. La selección de resoluciones judiciales tanto la general, como la concreta de cinco sentencias, demuestra por sí sola la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

El candidato nombrado aporta una relación de 19 de resoluciones judiciales sistematizadas por una variedad de materias (Derecho mercantil, Derecho de consumo, obligaciones y contratos, familia y filiación, sucesiones, responsabilidad extracontractual y responsabilidad horizontal), en su gran mayoría incorporadas a la base de datos del CENDOJ y valoradas como resoluciones *innovadoras* o que *desarrollan conceptos generales*.

Además de las anteriores, selecciona 5 resoluciones judiciales de especial relevancia. Profundizando en las mismas, en primer lugar destaca la SAP, Civil sección 1ª del 14 de mayo de 2014 (ROJ: SAP PO 448/2014 - ECLI:ES:APPO:2014:448) en materia de Derecho de consumo, condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas.

La resolución es relevante por dos motivos. Primero, porque se anticipa a la doctrina expuesta en las SSTs de Pleno n.º 265/2015, de 2 de abril, y n.º 705/2015, de 23 de diciembre, en relación con la nulidad de las tres últimas cláusulas. Y, segundo, porque, al examinar los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, apunta el planteamiento sobre el que la Sala Primera del Tribunal Supremo formularía la decisión prejudicial y que sería refrendado primero por la STJUE de 26 de marzo de 2019 y después por la STS de Pleno n.º 463/2019, de 11 de septiembre, en el sentido de que la Directiva 93/13 no se opone a que, expulsada la cláusula del contrato, el juez pueda aplicar una disposición supletoria del Derecho nacional, confirmando así la sentencia recurrida.

En segundo término, se resalta la SAP, Civil sección 1ª del 05 de febrero de 2015 (ROJ: SAP PO 2/2015 - ECLI:ES:APPO:2015:2), en materia de Derecho de consumo y compraventa con subrogación en préstamo hipotecario. Aborda un asunto de gran relevancia para los consumidores: Una de las fórmulas más habituales para la adquisición de la vivienda habitual, sobre todo en el caso de vivienda nueva, es la de subrogarse en el préstamo concertado por el promotor con determinada entidad bancaria, sea con novación modificativa o manteniendo las condiciones del contrato originario en sus propios términos, lo que plantea una cuestión sensible para los consumidores como es determinar el alcance de la obligación de información exigible a la entidad crediticia en estos casos, aspecto que se estudia de forma pormenorizada



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Por su parte, la SAP, Civil sección 1ª del 15 de abril de 2019 (ROJ: SAP PO 868/2019 - ECLI:ES:APPO:2019:868), aborda la cuestión del contrato de vitalicio y pacto sucesorio de mejora.

La sentencia es de gran interés; profundiza y pone el acento en el incumplimiento de deberes derivados del carácter familiar, personalísimo y de confianza del contrato de vitalicio, como causa de resolución del mencionado contrato y del posterior pacto de mejora, a través del cual los primitivos alimentantes/cesionarios habían transmitido a su vez el bien objeto de la cesión y la obligación de alimentos a su propia hija.

Es la misma idea que subyace en la interpretación correctora de las causas de desheredación de la jurisprudencia más moderna. El vitalicio, como los pactos sucesorios, entraña recíprocas contraprestaciones que deben cumplirse conforme al principio de buena fe, cuya inobservancia puede constituir causa de resolución del contrato. Todos estos aspectos se desarrollan de forma sistemática y con gran rigor en los fundamentos de la resolución.

En cuarto lugar, se aporta la SAP, Civil sección 1ª del 01 de febrero de 2017 (ROJ: SAP PO 170/2017 - ECLI:ES:APPO:2017:170) relativa a la modificación de la capacidad de las personas y la presunción de capacidad. Es una resolución importante y con trascendencia social; recoge de forma minuciosa la evolución normativa y jurisprudencial en materia de modificación de la capacidad de las personas, de la que son ejemplo la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 diciembre 2006, o, en el ámbito nacional, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de patrimonio de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y el Proyecto de Ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, actualmente en trámite.

A pesar de considerar acreditado que la demandada padecía un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno delirante, ambos de carácter crónico, la sentencia estima el recurso y rechaza la demanda de incapacidad porque entiende que no basta la simple constatación de la patología, por intensa, duradera o aguda que sea, sino que es necesario que incida en la capacidad de la persona para autogobernarse, debiendo primar la presunción del pleno ejercicio de su capacidad y de preservación al máximo del ejercicio de sus derechos y libertades. Esa misma idea lleva a descartar de plano decisión alguna sobre una hipotética revisión semestral o anual a futuro, al ir en contra de la presunción de capacidad, lo que, en su caso, debería ser objeto de otro



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

procedimiento.

Finalmente, destaca la SAP, Civil sección 1ª n.º 620/2020, de 23 de noviembre, rollo de apelación n.º 598/2020, en materia de obligaciones y contratos, hipoteca inversa y seguro de renta vitalicia.

En los últimos años, la esperanza de vida en España ha aumentado hasta alcanzar uno de los niveles más altos en los países civilizados, lo que, unido al deseo de asegurar unas condiciones de vida dignas en un momento en que se reducen los ingresos, ha motivado una creciente preocupación en las personas mayores sobre la búsqueda de fórmulas que permitan completar las pensiones y hacer frente a los gastos del cuidado en casa o en residencias.

Los dos productos financieros más demandados son la denominada hipoteca inversa y el seguro de renta vitalicia. Ambos constituyen instrumentos alternativos, préstamo hipotecario y seguro de vida-ahorro, pero en muchas ocasiones se comercializan como complementarios: en un mismo negocio se concede el préstamo, materializado en una renta mensual sobre el valor de la vivienda, y, conjuntamente, se estipula el seguro de renta vitalicia, que empezará a operar, en su caso, cuando se agote el saldo del préstamo.

No obstante, el gran desconocimiento que existe sobre estos productos, sus particulares características y los evidentes riesgos que conllevan, junto con la escasa información que se proporciona a veces, el perfil de los destinatarios (personas de avanzada edad) y la forma en que se comercializan (normalmente, el seguro es de prima única, satisfecha al concertar la operación a expensas del importe del préstamo) y los bienes jurídicos en juego (atención y cuidados básicos y vivienda), diseñan un terreno abonado a la inseguridad jurídica, como ha advertido reiteradamente el Banco de España.

La relevancia de la sentencia radica en que, a falta de jurisprudencia, es de las primeras ocasiones en que se abordan estos contratos desde la perspectiva de la legislación en materia de consumo. En efecto, con motivo del ejercicio de una acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, la sentencia expone la problemática que tales operaciones pueden llevar aparejada, razona su sujeción a la normativa protectora del consumidor y alerta sobre determinadas prácticas, como la percepción anticipada de la prima única años antes de que el contrato de seguro despliegue su eficacia, a expensas del principal del préstamo vinculado, y, por ende, minorando el saldo y devengando intereses a favor del banco.

.- Complementando las anteriores aptitudes de excelencia para la jurisdicción que han quedado plenamente acreditadas y reforzando la idoneidad del candidato nombrado para la plaza, en segundo lugar debe valorarse su intensa





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

actividad gubernativa.

Fue Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Pontevedra (1999 a 2002), presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra (2002 a 2008), miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (desde 1999 miembro de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno, en la que sería renovado sin solución de continuidad, primero como electo y después, como nato, hasta el año 2008) y Vocal del Consejo General del Poder Judicial (2008 a 2013)

Fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, coordinador para Galicia de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil, organizada por el Consejo General del Poder Judicial, entre los años 2000 y 2004. En este mismo periodo de tiempo, fue coordinador Territorial de la Escuela Judicial para la Comunidad Autónoma de Galicia, fase de adjuntía, asumiendo además las funciones de Juez tutor entre los años 2000 y 2002.

También fue miembro de la Red Judicial Española en materia civil y mercantil, en el marco de la Red Judicial Europea entre los años 2002 y 2008, y nacional en el ámbito del art. 2.1 d) de la Decisión del Consejo de la Unión Europea, por la que se crea la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, en el mismo periodo. Co-representante español en el Consejo Consultivo de Jueces del Consejo de Europa, por designación del Consejo General del Poder Judicial (años 2002 y siguientes).

Estamos ante un mérito gubernativo contemplado expresamente en las bases de la convocatoria y que concurre en el magistrado Almenar Belenguer con la particularidad de que las funciones y atribuciones de esos puestos y cargo se han proyectado de forma muy relevante en materias propias del orden jurisdiccional civil. En este último aspecto, cabe subrayar que el candidato nombrado fue Vocal delegado para el orden mercantil, funciones que desempeñaría entre 2008 y 2013; coordinador del grupo de trabajo sobre medidas de agilización procesal en el orden civil, cuyas propuestas para la reforma y agilización de los procesos civiles se presentaron al pleno del 11 de octubre de 2012, acompañando un anexo con propuestas sobre endeudamiento familiar y medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria; participó en la elaboración del Plan de Actuación para dar respuesta a la judicialización masiva derivada de la comercialización de determinados productos financieros en Galicia, con ocasión de las reclamaciones presentadas por las Plataformas de Afectados contra Novagalicia Banco en relación con los contratos sobre participaciones preferentes y deuda subordinada, asumido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y por la Xunta de Galicia.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Al margen de su actuación como vocal, fue miembro de la Comisión sobre *"El nuevo modelo del Registro Civil"*, que, previas las correspondientes reuniones, aprobó el correspondiente documento/propuesta en 2015.

.- Estas aptitudes se ven acompañadas por la experiencia acumulada por el magistrado Manuel Almenar Belenguer en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden civil y órganos mixtos, así órganos colegiados del orden civil.

El magistrado accedió a la Carrera Judicial por el turno libre el 21/06/1989 y a fecha del cierre del plazo para presentar instancias a la convocatoria, contaba con una antigüedad en la Carrera Judicial de cerca de más de 31 años y en el orden jurisdiccional civil u órganos mixtos de cerca de 23 años, de ellos unos 20 en la Audiencia Provincial de Pontevedra. En efecto, sus anteriores destinos fueron: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Sagunto (17/07/1989 a 03/12/1990); Juzgado de lo Penal nº 2 de Pontevedra. De 21/12/1990 a 13/01/1999; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Pontevedra (20/01/1999 a 11/01/2002); presidencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra y de su Sección 1ª (11/01/2002 a 15/12/2008) y Audiencia Provincial de Pontevedra (15/12/2008 a la actualidad). Como ya se ha apuntado, desde 2009 es presidente de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial.

.- El Pleno también ha valorado la prolífica actividad jurídica del candidato nombrado al margen de la actividad judicial, especialmente en su dimensión docente y doctrinal.

En la primera de las dimensiones, hay que resaltar que el magistrado Almenar Belenguer fue profesor en la UNED impartiendo las materias de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal (curso 1999/2000); fue coordinador del Área de Procesal Civil en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Pontevedra, impartiendo las materias propias de dicha área tanto en los aspectos teóricos como prácticos (1999 a 2008). Asimismo, ha sido ponente o conferenciante en más de 140 cursos, seminarios, jornadas y mesas redondas organizados por el CGPJ y otras instituciones públicas y privadas. Entre ellos conferencia sobre *"La persona jurídica como administradora de la sociedad mercantil"*, en el marco de la I Jornadas sobre Derecho Mercantil, organizadas por el Colegio de Abogados de Pontevedra, Pontevedra (2018); ponencia sobre *"La acción de cesación del art. 7.2 LPH"*, en el marco del curso en materia de "Cuestiones que suscita la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal" del plan de formación descentralizada, Santiago de Compostela (2018); conferencia sobre *"Independencia y Justicia"*, en el marco del Curso sobre "Justicia y Política: nuevos escenarios", organizado por la Fundación para la Magistratura y la Universidad Complutense de Madrid, El Escorial, Madrid (23 a 27 de julio de 2018); y conferencia sobre *"Eficacia de cosa juzgada del auto"*



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

*de despacho de ejecución y/o del auto resolviendo el incidente de nulidad por abusividad de las cláusulas del contrato. Sus límites*”, en el marco del curso sobre “Implementación de las Directivas de Crédito Inmobiliario y de prevención del blanqueo de capitales”, organizado por la Universidad Complutense (2019).

El candidato nombrado es autor de una veintena de publicaciones jurídicas, tanto en revistas y obras nacionales como internacionales. Entre estas últimas y por encargo del CGPJ estudio sobre *Las medidas cautelares de carácter personal en el Código Procesal Penal de Honduras* (1999) y el estudio sobre *El juicio de faltas en el Código Procesal Penal de Honduras* (2000), orientados a la formación de la judicatura de la República de Honduras. También destacan “*Cuestiones prácticas en materia de Derecho de Sociedades*”, en Encuentro entre Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Jueces de lo Mercantil, “Derecho Concursal”, colección “Cuadernos Digitales de Formación” (2008); “*El concurso de las personas físicas. La remisión del pasivo insatisfecho del deudor persona física y el principio de responsabilidad universal: la segunda oportunidad*”, en Revista de Derecho Mercantil, Lefebvre-El Derecho (2015); “Elegir entre lo correcto o lo fácil” en el libro “Cuarenta años de Constitución: Protagonistas de la Justicia”, coordinado por Enrique Arnaldo Alcubilla, Thomson Reuters Aranzadi, 2018; y “Tarjetas bancarias, créditos rápidos y créditos revolving”, capítulo del libro “*Jurisprudencia sobre hipotecas y contratos bancarios y financieros*”, coordinado por Carolina Castillo Martínez y José Luis Fortea Gorbe, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

El candidato nombrado cursó el Programa de Liderazgo en la Gestión de Recursos Públicos, impartido en el IESE en el curso 2012/2013.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y en concreto la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que también es objeto de ponderación, hace que se observen en Manuel Almenar Belenguer la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-40º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

turno de especialistas (vacante de José Manuel López García de la Serrana), y presentada por la ponencia del procedimiento de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Félix Vicente Azón Vilas, actualmente Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habiendo tomado posesión por nombramiento en propiedad el 15/06/1999.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Tal y como exigen las bases de la convocatoria, deben ponderarse los méritos que ponen de manifiesto o las aptitudes de excelencia jurisdiccional expresadas en la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción, valorados a partir de las resoluciones aportadas, su trayectoria profesional y en la comparecencia; en segundo lugar, el desarrollo de actividades jurídicas llevadas a cabo en desempeños gubernativos o gubernativo-jurisdiccionales; en tercer lugar, la experiencia acumulada en la Carrera Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes de excelencia jurisdiccional; y por último, deben considerarse las restantes actividades profesionales, docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las aptitudes de excelencia que sean útiles en la actividad gubernativa y el ejercicio de la jurisdicción.

Pues bien, atendiendo a los criterios de ponderación expuestos, tanto en el orden de su prelación individual como recogen las bases, como en una ponderación en conjunto, el Pleno considera que la trayectoria profesional de Félix Vicente Azón Vilas acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de Magistrado del Tribunal Supremo.

.- Siguiendo el orden establecido, en la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden social, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. La selección de resoluciones judiciales demuestra por sí sola la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

Profundizando en el análisis de las cinco resoluciones seleccionadas destacadas, en primer lugar, se reseña la STSJC, Sala de lo Social, de 14/11/2007 (r.s. 8095/2006) en materia de indemnización complementaria por riesgos derivados de accidente de trabajo. cuyo recurso fue inadmitido mediante auto de inadmisión de la Sala Cuarta del TS, de 04.02.2009. En el asunto, la parte



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

demandante no se había remitido a las tablas del baremo de accidentes de circulación, sino que propone un modelo indemnizatorio completo, elaborado en base a valoración del daño emergente y el lucro cesante. Según el Tribunal Supremo, la indemnización no queda limitada a la pérdida del empleo que podía quedar compensada con las prestaciones concedidas, sino "que debe efectuarse una valoración vertebrada del daño y compensar conceptos homogéneos, exigiendo un sistema razonable, razonado, explicado y coherente, de manera que permita conocer las bases del cálculo y el desarrollo concreto en una cuantificación posterior.

Además, se valora como excelente el carácter completo y profundo de la fundamentación jurídica en la determinación de la responsabilidad (objetiva o subjetiva; contractual o extracontractual; única o conjunta); el daño causado y su composición; daño patrimonial, daño biológico y daño moral; pretensiones, entre otros.

En segundo lugar, se destaca la STSJC, Sala de lo Social, de 12/06/2014 (r.s. 618/2014) en materia de accidente de trabajo "in itinere", cuya relevancia, tal y como indica el propio candidato nombrado, radica en que se analiza el hecho novedoso de que un trabajador ha sufrido un accidente cuando se dirigía al trabajo en patinete y se analiza si se trata de "un medio adecuado" de transporte para que sea considerado accidente de trabajo in itinere.

Además del carácter novedoso del supuesto de hecho, también se valora la argumentación relativa a la consideración del medio de transporte como idóneo para desplazarse al trabajo, aplicando la realidad social del año 2014 (artículo 3 del Código Civil), sí como los razonamientos para observar que se dan todos los requisitos jurisprudenciales para ser considerado accidente de trabajo.

En tercer término, la STSC, Sala Social, de 23/10/2014 (r.s. 3940/2014), en materia de despido de alto cargo por vulneración de la buena fe contractual. Se trata de un asunto de relevancia social. Como señala el candidato nombrado, jurídicamente tiene el interés de analizar la relación confianza y la obligación recíproca de buena fe contractual entre las partes y el juego contractual entre contrato de trabajo de relación ordinaria y contrato de trabajo de relación especial de alta dirección.

Se valoran como excelentes las consideraciones jurídicas respecto a los efectos jurídicos de la extinción de la relación mercantil; la concreción de las imputaciones en relación con los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad; entre otras.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La sentencia fue impugnada y el recurso fue inadmitido por auto del Tribunal Supremo de 16/03/2016.

Por su parte, también se aporta la STSC, Sala Social, de 13/05/2016 (r.s. 1215/2016), en materia de sobre extinción del contrato al amparo del artículo 50 ET. Se trata de un supuesto en el que una trabajadora plantea demanda en solicitud de extinción de su contrato de trabajo por acoso sexual y/o moral en el trabajo, y subsidiariamente por no haber protegido su salud como trabajadora. La relevancia de esta sentencia está plenamente motivada por la excelencia de la motivación hasta la resolución final: Se analiza si concurre o no el acoso, concluyendo que no; pero como la pretensión primera es la extinción del contrato, la sentencia entra a analizar en profundidad si la empresa cumplió con sus deberes de protección eficaz de la trabajadora en materia de seguridad y salud en el trabajo que garantizase su integridad física estimándose que hubo incumplimiento empresarial. Por ello, se extingue la relación contractual sin indemnización complementaria por daño moral.

Finalmente, el candidato nombrado aporta una quinta sentencia de gran interés – la STSC, Sala de lo Social, de 14/11/2017 (r.s. 5187/2017) sobre conflicto colectivo en materia de derecho a comedor de empresa. Se trata, en efecto, de un tema que provoca numerosos conflictos y en el presente caso se analiza una posible forma de fijación de las aportaciones económicas que tiene que hacer la empresa para reconocer plenamente el derecho a comedor de su plantilla.

La excelencia jurisdiccional del magistrado nombrado ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta, sino también en su brillante comparecencia ante la Comisión de Calificación que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

.- Complementando las anteriores aptitudes de excelencia para la jurisdicción que han quedado plenamente acreditadas y reforzando la idoneidad del candidato nombrado para la plaza, en segundo lugar debe valorarse su intensa actividad gubernativa.

El candidato ha participado en órganos de gobierno del poder judicial, siendo vocal del CGPJ desde el 23/09/2008 hasta el 04/12/2013 y colaborando con el CGPJ como jefe de la sección de Formación Continua y jefe de la sección de Formación Inicial ente el 08/05/2002 hasta el 22/03/2006. También ha colaborado activamente con el Servicio de Relaciones Internacionales en actividades de Cooperación y Formación del CGPJ y con la Unidad de Aula



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Iberoamericana y Red Europea de Formación Judicial de la Escuela Judicial. Estamos ante un mérito gubernativo contemplado expresamente en las bases de la convocatoria y que concurre en el magistrado Azón Vilas con la particularidad de que las funciones y atribuciones de esos puestos y cargo se han proyectado de forma muy relevante en materias propias del orden jurisdiccional social.

.- Estas aptitudes se ven acompañadas por la experiencia acumulada por el magistrado Félix Vicente Azón Vilas en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden social y en los órganos colegiados del mismo.

Es magistrado accedió a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocida competencia el 20/09/1994 (tercer turno). Es especialista en el orden social desde el 14/05/1999. En esta línea, hay que señalar que el candidato nombrado, a fecha del cierre del plazo para presentar instancias a la convocatoria, cuenta con una antigüedad en la Carrera Judicial de cerca de 26 años y en el orden jurisdiccional social de más de 21 años, todos ellos en órgano colegiado.

.- En cuanto a las profesiones jurídicas no jurisdiccionales de análoga relevancia, hay que destacar que el candidato nombrado fue abogado en ejercicio entre 1978 a 1994. También ha sido profesor tutor de la UNED entre los años 1995 a 1999 (materias de Derecho civil), 2002/2003 (práctica procesal laboral) y 2015/2016 (Derecho constitucional); profesor asociado de la UAB en materia de Derecho del Trabajo (1999/2000) y en la UPF impartiendo asignaturas de Derecho de Trabajo (2007/2008 y 2014 a 2018); entre otras.

El candidato nombrado también ha participado como ponente en 35 actividades docentes del CGPJ.

Desde una perspectiva discente, el magistrado Azón Vilas es *Máster of Science in Industrial Relations and Personnel Management*, realizado en la London School and Political Science en el curso académico 1990/1991. Tiene estudios de tercer ciclo (programa de doctorado) por la Universidad de Zaragoza. Por otro lado, ha participado en diversas obras y revistas especializadas en materia fundamentalmente laboral, tales como: *"La revisión de la invalidez permanente: estudio de distintos supuestos"*, en Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (1992); *"Algunos aspectos de la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral"*, en Revista de Derecho Social (2001); *"La condición de extranjero desde el derecho social: breves notas sobre la situación actual de los extranjeros no comunitarios sin*



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

*autorización administrativa para trabajar*", en "La protección de los derechos fundamentales en el orden social", Cuadernos de Derecho Judicial (2003); *"La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el procedimiento laboral"* en *"Estudios sobre la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil"*, editado por el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (Barcelona, 2003); *"La indemnización laboral por daño causado en accidente de trabajo. La valoración del daño"*, en el libro: "Prestaciones e Indemnizaciones en materia de accidentes de trabajo: aspectos penales, civiles y Laborales". Coordinador, Félix Azón, Manuales de Formación Continuada (CGPJ, 2007); *"Nociones previas: antecedentes y sistema normativo de la OIT"*, en "Normas internacionales de trabajo para jueces latinoamericanos", Cuadernos Digitales de Formación (CGPJ, 2012), entre otras.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y en concreto la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que también es objeto de ponderación, hace que se observen en Félix Vicente Azón Vilas la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-41º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno de juristas (vacante de Francisco Javier Borrego Borrego), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, se acuerda elevar a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a la abogada del Estado María Pilar Cancer Minchot.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada evaluados y ponderados a la fecha fin del plazo de presentación de las solicitudes.

Tal y como exigen las bases de la convocatoria, se tendrá especial consideración de los méritos que pongan de manifiesto las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción expresadas en la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de profesiones jurídicas y, en su caso, de la propia jurisdicción, valorados a





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

partir de los escritos jurídicos y, en su caso, resoluciones aportadas y en la comparecencia; en segundo lugar, y en la medida en que no hayan sido ya objeto de valoración como contenido de la actividad profesional principal u ordinaria, se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las aptitudes de excelencia jurídica; por último, se tendrá en consideración la experiencia acumulada en las actividades profesionales llevadas a cabo hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes de excelencia en el ejercicio de la jurisdicción. En la ponderación de conjunto de los méritos se deben tener en cuenta circunstancias de género para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Los referidos méritos deberán ser valorados y ponderados a fecha fin del periodo de presentación de solicitudes para la convocaría.

Pues bien, atendiendo a los criterios materiales y temporales de ponderación expuestos, tanto en el orden de su prelación individual como recogen las bases, como en una ponderación en conjunto, el Pleno considera que la trayectoria profesional de María Pilar Cancer Minchot acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovida a la máxima categoría de Magistrada del Tribunal Supremo.

.- Siguiendo el orden establecido, en la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la Abogacía del Estado. Tanto la selección general de escritos judiciales como la más específica, de cinco de ellos, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

Respecto a los cinco trabajos o escritos jurídicos especialmente seleccionados, destaca en primer lugar la colaboración en obra colectiva *"Impugnación de los vicios procesales de la instancia en el recurso de casación"*, 2021.

Como señala la autora, el trabajo hace un estudio de qué implica el presupuesto de admisión del interés casacional objetivo como obstáculo al conocimiento por parte del TS de los "vicios in procedendo" incurridos en la instancia. Seguidamente, explica la relación entre la casación, la nulidad de actuaciones y el complemento de sentencia según la Jurisprudencia del TS.

También se analiza de forma profunda y sistemática, siempre con abundantes citas jurisprudenciales, la posible impugnación casacional de estas infracciones, analizando los presupuestos de articulación de los arts. 88.2 y 3 LJCA más factibles, el acceso a la casación medial o instrumental, y el acceso por



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

admisión en base a otros motivos.

Como apunta la candidata nombrada, pese a haberse destacado en el momento de la entrada en vigor de la nueva casación que sería necesario, para completarla adecuadamente, una reforma de la segunda instancia que la generalizase, no se ha hecho. A su juicio ello provoca disfunciones en orden a la corrección de infracciones jurídicas que difícilmente revestirán interés casacional objetivo, siendo prototípicos los "vicios in procedendo", por lo que es de interés y resulta novedoso analizar las posibles vías de su acceso a casación y remedios alternativos. Por ello, finaliza esta publicación jurídica con un juicio crítico de la operativa de este recurso.

En segundo término, aporta otra muestra de su actividad científica, cual es "*Recurso de casación e infracción del Derecho de la Unión Europea*", en "*La incidencia del Derecho de la Unión europea en la jurisdicción contenciosa-administrativa*", coord. Ricardo Alonso, *Europeans Inklings* 2072019, IVAP, Oñati 2019. Colaboración en obra colectiva subsiguiente a impartición de curso.

Su relevancia radica en el carácter novedoso del estudio del supuesto de interés casacional del 88.2 f) LJCA, de gran importancia dada la relevancia en nuestro ordenamiento jurídico de las normas y jurisprudencia con origen en Derecho de la UE y la trascendencia constitucional e incluso de responsabilidad respecto de las instituciones UE de que no resulte respetado el principio de primacía.

El trabajo plantea que, aunque este ha sido recogido como un supuesto meramente indiciario en la LJCA, debería haberse recogido como un supuesto presuntivo. Así, pese a la aparente discrecionalidad que en la apreciación del interés casacional objetivo existe en el nuevo recurso, el Tribunal Supremo está obligado a plantear cuestión prejudicial como tribunal de último recurso (se analiza este concepto y cuándo se genera esta obligación, a la luz de la doctrina no solo del TJUE sino también de nuestro TC, entre otras, en su Sentencia sobre el bono social); y también nuestro ordenamiento jurídico impone la necesidad de revisar si se ha interpretado y aplicado con error la Jurisprudencia UE (a tal efecto, se analiza también cómo el respeto a dicha Jurisprudencia en la interpretación de las normas UE directamente aplicables o de las nacionales que transponen normas UE resulta obligatoria no solo por imposición normativa y de la Jurisprudencia del TJUE, sino de nuevo por imposición de nuestra propia Jurisprudencia constitucional).

A partir de aquí la candidata nombrada aporta escritos procesales. Así, por una parte, resalta la preparación e interposición de recurso de casación. RCA/4333/2019. Prep. 20/06/2019; interp. 11/07/2020. Se trata de una actuación procesal ante la Sala Tercera del TS, en representación y defensa de



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

la Comisión Nacional de Valores.

Como destaca la misma, el “asunto” planteado era novedoso, como referido a las OPAs de exclusión, y de gran importancia para la Comisión Nacional de Valores, pues incidía directamente en su ámbito de actuación técnica. El Auto de admisión planteó el “asunto” de un modo muy similar al solicitado por la parte de la Abogacía del Estado, y acabó acogiendo sus argumentos. La doctrina de la instancia imponía como prevalente para determinar el “valor razonable” de la acción, el valor técnico contable (con el peligro derivado de la restricción que implicaba respecto de las opciones valorativas ofrecidas a los administradores en aras a la adecuada obtención de un valor razonable); e imponía la asistencia de un “experto independiente” en la valoración, requisito legalmente no previsto.

Se consigue plantear como asunto si, en el caso de que el informe de valoración de los administradores de una sociedad, a que hace referencia el artículo 82.3, segundo párrafo, del Real Decreto Legislativo 472015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores 8TRLMV), asuma o se fundamente en el elaborado por un experto independiente, la existencia de un eventual conflicto de intereses de éste, por mantener otros vínculos profesionales con las entidades implicadas en las operaciones de oferta pública de adquisición, le impiden intervenir como tal experto; y si entre los diferentes métodos de valoración del precio ofrecido en la OPA, contenidos en el artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, debe entenderse que existe alguna prelación. Y, acogiendo el razonamiento la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo sienta la doctrina de que resulta jurídicamente irrelevante el hecho de que, eventualmente, los expertos que hubieran intervenido materialmente en la elaboración del informe justificativo del precio ofertado en la OPA, pudieran estar afectados por un “conflicto de intereses”, pues el informe es en última instancia de los administradores; mientras que, respecto de la segunda cuestión, considera que no puede dársele prevalencia a ningún método, pudiendo utilizarse aquel del que resulte, motivadamente, el valor razonable.

En cuarto lugar, se destaca una selección de escritos procesales en dos recursos directos sobre responsabilidad patrimonial por el establecimiento de la compensación del límite por copia privada a los derechos del titular de la propiedad intelectual. Rec 2/1/2014, Secc 4ª. Rec. 2/113/2018, Secc. 5ª. (2014 a 2019). Se trata de un supuesto de defensa de la Administración General del Estado ante el Tribunal Supremo.

Como se apunta, la cuestión es relevante por su complejidad (responsabilidad del Estado legislador) en un escenario que implicaba el previo dictado de una



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

STS sobre validez del RD de cobertura, una STJUE en prejudicial de interpretación del Derecho de la Unión en relación con la Directiva de aplicación, e incluso una eventual STC. Se obtienen sentencias desestimatorias, pese a que tanto la STJUE como la STS sobre el RD no eran favorables. Asimismo, y desde el punto de vista económico, habiéndose reclamado por diversas entidades de gestión de los derechos de autor ejercicio por ejercicio, de momento, y respecto de los ejercicios 2012 a 2015, están ganadas con el elevado importe económico que suponía para la Hacienda Pública (en los siguientes, aún "sub iudice", la cuestión se complica tanto por la modificación del sistema producida en 2017 como por el proceso pendiente ante el TJUE que cuestiona el art. 34 de la Ley 4072015.

Finalmente, se aportan escritos procesales en recurso directo contra Orden de Comisión Delegada (Recurso nº 1/203/2015, Secc. 3ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (2015 a 2019). Defensa de la Administración General del Estado en la Sala Tercera del TS.

La candidata nombrada ha tomado como ejemplo uno de los casi trescientos recursos cuya defensa se asumió, con un objetivo similar: las sucesivas Órdenes Ministeriales que determinaban la aportación de las empresas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Se trata de uno de los recursos más tempranos, contra la primera Orden, por haberse desarrollado en los mismos los argumentos que se reproducirían después en años sucesivos, hasta que el dictado de las primeras sentencias del Tribunal Supremo en 2019, clarificó la cuestión. Además de su envergadura económica y la eventualidad de que el Reino de España pudiera estar incumpliendo sus compromisos con la UE en la importante cuestión de la eficiencia energética, destaca la implicación del Derecho UE, con el planteamiento de cuestión prejudicial en uno de ellos procesos (afectante, como se ve en los escritos, a todos los demás); lo que abrió cuestiones como su necesidad o su relación con la cuestión de inconstitucionalidad.

Estos trabajos científicos y los escritos procesales aportados son un buen botón de muestra de la cantidad, calidad y rigor de los conocimientos y habilidades jurídicas de María Pilar Cancer Minchot en materias propias del orden contencioso-administrativo y evidencian aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción, la cual también queda patente en su brillante comparecencia ante la Comisión de Calificación que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

.- Por otro lado, la candidata nombrada presenta una notable actividad científica que se pone de manifiesto con la dirección de 7 obras colectivas, y la colaboración en 6 obras colectivas y la publicación de 10 artículos doctrinales. Así, ha sido colaboradora con *"Interés casacional objetivo y discrecionalidad en*



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

*el nuevo paradigma casacional*” en la obra colectiva *“El interés casacional objetivo en su interpretación auténtica. Pautas hermenéuticas y cuestiones procesales de la nueva casación contenciosa”*, coordinador Raúl Cancio Fernández, ed. Thompson Reuters Aranzadi, Madrid, 2018; y con *“Recurso de casación e infracción del Derecho de la Unión Europea”*, en *“La incidencia del Derecho de la Unión europea en la jurisdicción contenciosa-administrativa”*, coord. Ricardo Alonso, Europeans Inklings 2072019, IVAP, Oñati 2019. También ha sido ponente en cursos y jornadas organizadas por el CGPJ.

.- Respecto a la experiencia acumulada por la candidata nombrada, hay que resaltar que ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1994. Que ha sido abogada del Estado en Guadalajara (1994 a 1996), en la Delegación de Hacienda de Madrid (1996), en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1996 a 2001). También ha sido Subdirectora General del Gabinete de Estudios de la Abogacía General del Estado (2002 a 2012) y, desde el 2012 a la actualidad, es Abogada del Estado en el Tribunal Supremo.

Además, ha sido secretaria del JPE de Guadalajara 1994/96 y del TEAR de Madrid en 2001; secretaria del Consejo de Administración de SEIASA del Sur y Este SA. y de P4E (sociedades estatales) en el periodo 2002/12; ponente del TACRC desde 2012; y coordinadora de los convenios de asistencia jurídica de COFIDES y AENA desde 2012.

Esta experiencia acumulada de destinos y desempeños profesionales en el ejercicio de la abogacía del Estado, en la que sobresalen sus cerca de 20 años de ejercicio ante el Tribunal Supremo, alcanza el trance suficiente para aportar por sí misma aptitudes de excelencia en el ejercicio de la jurisdicción en los términos descritos en el apartado c) de la base sexta de la convocatoria.

Por lo demás, en virtud de lo establecido en el artículo 17 «in fine» del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero de 2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, se realiza una remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión de Calificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 16 de la misma Norma reglamentaria.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en sus actividades profesionales como en los ámbitos docente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad e igualdad (incluyendo su efectividad entre hombres y mujeres) hace que se observen en María Pilar Cancer Minchot la erudición, capacidad e idoneidad para ser Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-42º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno de juristas (vacante de Jorge Rodríguez-Zapata Pérez), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, se acuerda elevar a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo al letrado de las Corte Generales Manuel Delgado-Iribarren García-Campero.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado evaluados y ponderados a la fecha fin del plazo de presentación de las solicitudes.

.- Manuel Delgado-Iribarren García-Campero ingresó en 1983 por oposición en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, habiéndose mantenido desde entonces en servicio activo en el Congreso de los Diputados. Esta prolongada y extensa trayectoria profesional es enriquecida con su variada experiencia en la asistencia técnica de distintas Comisiones parlamentarias de perfiles jurídicos constitucional y europeo de primer nivel, así como en cargos propios de la Cámara baja también con una carga de Derecho parlamentario, administrativo y electoral muy consistente. Entre estos puestos se relacionan los siguientes:

- Letrado de la Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria del Congreso de los Diputados y de la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (1983 a 1987). En 1987 también fue letrado de la Junta Electoral Central; letrado encargado de la Asesoría Jurídica de la Cámara (en particular, comisionado ante el Tribunal Constitucional en los asuntos 351/87 y 404/87) y letrado de la Comisión de Presupuestos. También fue jefe del Departamento de Estudios, de la Dirección de Estudios y Documentación

- Letrado de la Comisión Constitucional (1987 a 1989).

- Letrado de la Comisión de Justicia e Interior: (1989 a 1996). En este periodo también fue director de Informática del Congreso de los Diputados (1988 a 1996), letrado de la Comisión de Investigación sobre los procesos electorales de 1989 a 1990; y director de Comisiones (1996).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

- Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados (1996 a 2000).
- Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios (2000 a 2004).
- Letrado Director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central y letrado de la Comisión Mixta para la Unión Europea (en ambos cargos desde 2004 hasta la fecha fin de presentación de solicitudes).

Esta experiencia acumulada en su desempeño como letrado de las Cortes General alcanza el trance suficiente para aportar por sí misma aptitudes de excelencia en el ejercicio de la jurisdicción en los términos descritos en el apartado c) de la base sexta de la convocatoria, y constituye un magnífico marco en el que se han desarrollado de forma intensa las actuaciones propias de su profesión, así como otras actividades de carácter jurídico.

El Pleno ha tenido en especial consideración los cinco trabajos seleccionados, así como la relación general de escritos jurídicos aportada por el candidato nombrado, que constituyen todos ellos el mejor botón de muestra de la cantidad, calidad y rigor de los conocimientos y habilidades jurídicas de Manuel Delgado-Iribarren García-Campero.

Entre los trabajos seleccionados destaca, en primer lugar, el capítulo "El impacto del sistema jurídico comunitario en el ordenamiento jurídico español tras treinta años de pertenencia a la Unión Europea", en la obra colectiva "Europa como tarea", coordinada por Eugenio Nasarre, Francisco Aldecoa y Miguel Ángel Benedicto, Marcial Pons, Madrid, 2018.

Este trabajo demuestra el profundo conocimiento del candidato nombrado en el ámbito del Derecho de la Unión. Se analizan la incorporación de las nuevas fuentes del derecho creadas autónomamente por las instituciones comunitarias y su contribución al declive de la posición hegemónica de la ley parlamentaria en el sistema de fuentes del derecho; la creación jurisprudencial europea de los principios rectores de las relaciones entre el ordenamiento comunitario y los ordenamientos nacionales; la delicada coexistencia de los principios de supremacía constitucional y de primacía del derecho europeo, con particular detenimiento en las Declaraciones del Tribunal Constitucional 1/1992 y 1/2004; la existencia de un nuevo catálogo de derechos fundamentales tras el reconocimiento de fuerza normativa a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa (2007); y la concurrencia de



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

diferentes niveles normativos de reconocimiento de los derechos fundamentales, al tener que coexistir dicha Carta con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la relación recogida en el Título I de la Constitución Española.

Así mismo, se pone de relieve el establecimiento de un nuevo orden judicial europeo más complejo en el que junto a los tribunales nacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se sitúan los órganos jurisdiccionales comunitarios (Tribunal de Justicia y Tribunal General).

En segundo lugar, también se aporta una obra colectiva: Concretamente la coordinación y redacción de los comentarios a los artículos 1 a 5, 8 a 21, 44.4, 59 a 67, 108.4 bis, 110 a 112, 114 a 120, 176, 188, 210 y 225 de la LOREG y a los artículos 11 a 15 y 19 de la Ley Orgánica de Referéndum, de la obra colectiva "Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a la Ley Orgánica de Referéndum"; ed. La Ley, Madrid, 2014.

La trascendencia de la obra reside en que se trata de una suerte de "Código electoral" (ya en su novena edición) que recoge de forma sistemática y exhaustiva el desarrollo legislativo, la doctrina de la Junta Electoral Central y la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional en materia electoral y de referéndum, actualizando de esta forma la materia tras cerca de tres décadas de aplicación de la LOREG.

Además de la coordinación general, el candidato nombrado llevó a cabo el comentario de artículos relativos al derecho de sufragio, a la Administración electoral, a la campaña electoral, al recurso contencioso-electoral y al procedimiento para la celebración del referéndum. Sobre estas cuestiones se recogen los problemas que en su aplicación práctica han dado lugar a resoluciones de la Junta Electoral Central o sentencias de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, se destacan las actuaciones realizadas en el proceso tramitado por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales con registro 2/271/2019 (expte. de la JEC 570/161) de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso forma parte de un conjunto de acciones procesales llevadas a cabo por dos candidatos al Parlamento Europeo, que tenían un orden de búsqueda y captura dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que fueron proclamados electos por la Junta Electoral Central. Al no formalizar el requisito exigido por el artículo 224.2 de la LOREG de prestación de





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

juramento o promesa ante la Junta Electoral Central, no se les pudo entregar la credencial.

Las diferentes resoluciones adoptadas por la Administración electoral dieron lugar a los procesos 243, 248, 249, 271 y 278/2019 seguidos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en los que el candidato nombrado ejerció la representación y defensa de la Junta Electoral Central. La trascendencia jurídica y sociopolítica de las actuaciones procesales son evidentes y entre ellas se subrayan la solicitud de inadmisión del recurso, las alegaciones respecto a la pretensión de la parte actora de ampliación del recurso, la contestación a la demanda, la solicitud a la Sala el planteamiento de dos cuestiones prejudiciales interpretativas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hizo en el escrito de conclusiones.

Tras la Sentencia de la Sala 722/2020, que acogió la mayor parte de la fundamentación de la representación de la Junta Electoral Central, desestimando el recurso y declarando ajustada a Derecho la actuación de dicha Junta, la parte actora planteó incidente de nulidad de actuaciones, oponiéndose la representación de la Junta Electoral Central y el Ministerio Fiscal. La Sala desestimó esa pretensión en su Auto de 15 de septiembre de 2020.

En cuarto lugar, se aportan también actuaciones en el ámbito procesal, concretamente las efectuadas en el seno del procedimiento por el recurso planteado por la Abogacía del Estado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 2-496-2008, relativo a sanción impuesta por la Junta Electoral Central el 19/06/2008 a la Ministra de Fomento por realización de campaña de logros durante el periodo electoral por entender que suponía una campaña a de logros con financiación pública contraria a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La cuestión es relevante, novedosa y pasó el filtro del Alto Tribunal. Por primera vez se imponía una sanción de esta naturaleza a un miembro del Gobierno y se hacía por la interpretación que la Junta Electoral Central llevaba realizando desde 1995, plasmada posteriormente en su Instrucción 7/1999, sobre el objeto y límites de las campañas institucionales realizadas por los poderes públicos durante el periodo electoral. La particularidad es que la prohibición de esas campañas de logros no se recogía explícitamente en la LOREG en ese momento, sino que la Administración electoral la infería de la función general que tenía de garantizar la transparencia, objetividad e igualdad de los procesos electorales (art. 8.1 de la LOREG); y del artículo 50.1, que únicamente admitía las campañas institucionales de la administración



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

convocante de un proceso electoral con la finalidad de informar sobre el procedimiento de votación. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18/11/2009 desestimó el recurso y confirmó los argumentos expuestos por la representación de la JEC, haciendo mención explícita de los mismos.

Finalmente, también es relevante el escrito de alegaciones en el recurso de amparo nº 351/1987, ante el Tribunal Constitucional interpuesto por más de 50 diputados contra la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 18 de diciembre de 1986, sobre acceso por el Congreso de los Diputados a materias clasificadas.

El recurso de amparo planteaba diferentes cuestiones de interés, de las que cabe destacar la naturaleza jurídica de las resoluciones de la Presidencia del Congreso de los Diputados y, en función de ello si el recurso resultaría o no admisible; la aplicación o no de la doctrina sobre los actos parlamentarios como "interna corporis" y la posibilidad de su exclusión de control jurisdiccional. Además, la cuestión de fondo también era novedosa pues se refería al acceso por el Congreso de los Diputados a materias declaradas secretas o reservadas. La resolución de la Presidencia limitaba de forma gradual el número de parlamentarios que podían acceder a esa información, según se tratara de materia declarada secreta o reservada.

La STC 118/1998 aceptó el planteamiento de la representación del Congreso de los Diputados, descartando previamente que pudiera tratarse de un supuesto de "interna acta corporis" pero sosteniendo que era indudable el contenido normativo de la resolución y su integración de modo permanente en el ordenamiento parlamentario siendo asimilable a efectos de su impugnación al Reglamento de la Cámara.

Los trabajos aportados revelan un profundo conocimiento del Derecho constitucional y del Derecho europeo, así como del ordenamiento parlamentario y electoral, y evidencian aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción. Estas aptitudes también se aprecian en la brillante exposición y defensa de sus méritos ante la Comisión de Calificación.

.- Finalmente, el Pleno también ha valorado la prolífica actividad de Manuel Delgado-Iribarren García-Campero en el ámbito docente y de creación científica, así como su sólida formación, considerando que incrementa indudablemente sus aptitudes de excelencia jurídica.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El candidato nombrado fue profesor del Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca (1985 a 1990); profesor del Colegio Universitario San Pablo (CEU) de Madrid (1989-1998); profesor del Máster de Derecho Comunitario Europeo organizado por la Universidad Complutense de Madrid, de 1991 a 2008; profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid (1993 a 1997); profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2006-2017); profesor del Máster de Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense de Madrid desde 2009 hasta la actualidad; profesor del Máster para el Acceso a la Abogacía del Instituto de Estudios Bursátiles, de 2014 a la actualidad; profesor del Máster de Acceso a la Abogacía del Colegio Universitario Cisneros, de 2014 a la actualidad; profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid de 2017 hasta la actualidad.

Ha participado muy activamente en actividades de docencia y consultoría en Congresos internacionales. Entre ellas, ponente de la V y VIII Conferencias Iberoamericanas de Justicia Electoral, 2013 y 2016 en Manaus; o ponente del "III Seminario sobre la aplicación de las tecnologías de la información a los procesos electorales: las competencias de los Organismos Gestores de Procesos Electorales y la gestión electoral eficiente", Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo-Uruguay, 2013.

En el ámbito de la colaboración con el CGPJ y otras instituciones, el candidato nombrado también ha sido vocal de los tribunales de oposición al Cuerpo de Abogados del Estado (2011) y al Cuerpo de Letrados del CGPJ (2022), vocal del calificador de las pruebas selectivas de especialización de Magistrado especialista en el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo (2000 y 2001) y director o coordinador y ponente de 9 cursos del CGPJ y otras instituciones y tutor de las promociones de Magistrados especialistas de lo Contencioso-Administrativo de los años 1992 y 1993.

En el Tribunal Administrativo del Deporte, ha sido Secretario suplente (2014-2016), Secretario (2016-2017) y Vocal (2017-2020).

Es miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral fundada en 2017 y ha sido Observador Electoral internacional en el referéndum celebrado en Brasil en 2005, en las elecciones presidenciales celebradas en Egipto (2012), en las elecciones locales de Ecuador (2014) y en el referéndum sobre el proceso de paz en Colombia (2016).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La actividad científica del aspirante se concreta en la publicación de decenas de obras de carácter jurídico en forma de monografías, colaboraciones en obras colectivas y artículos doctrinales, especialmente en materia de Derecho comunitario europeo, Derecho electoral y Derecho constitucional y administrativo. Por cercanas al momento del cierre de la presentación de instancias se destacan "Cuarenta años de Junta Electoral Central", en la obra colectiva "España constitucional (1978-2018)", dir. por B. Pendás, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2018, volumen IV; "Una propuesta concreta de reforma constitucional: la constitucionalización del sistema de Juntas Electorales", Foro, vol. 21, nº 2 (2018), "La redes sociales y los procesos electorales: posibilidades y retos. La experiencia de las elecciones europeas de 2019", San Sebastián, 2020; "Derecho de sufragio", Voz en la Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI, ed. por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el BOE, Madrid, 2020; "Las Comisiones en el Parlamento de Canarias", en la obra colectiva "Comentarios al Reglamento del Parlamentario de Canarias", coord. Enrique Arnaldo y Salvador Iglesias, BOE Madrid 2019.

Por lo demás, en virtud de lo establecido en el artículo 17 «in fine» del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero de 2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, se realiza una remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión de Calificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 16 de la misma Norma reglamentaria.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en sus actividades profesionales como en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad e igualdad (incluyendo su efectividad entre hombres y mujeres) hace que se observen en Manuel Delgado-Iribarren García Campero la erudición, capacidad e idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

I-43º.- Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de José Díaz Delgado), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, se acuerda elevar a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a José Luis Quesada Varea, actualmente Magistrado en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiendo tomado posesión el 02/01/2005.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, que posee una sobresaliente experiencia en el ejercicio de la jurisdicción en general y en el orden contencioso administrativo y sus órganos colegiados en particular.

.- En efecto, el magistrado Quesada Varea ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 27/06/1986, ostentando el número 321 del escalafón oficial de la categoría de magistrado. A fecha fin de presentación de instancias a la convocatoria tiene computados más de 38 años en la Carrera Judicial y en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo más de 25 años, todos ellos en órganos colegiados del mismo.

Sus destinos anteriores en el orden contencioso administrativo son los siguientes: Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid adscrito a la Sala (26/03/2004 a 01/01/2005), Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al amparo del artículo 355 bis.2 (21/07/1999 a 25/03/2004),

Además, el magistrado nombrado desempeñó una comisión de servicios con relevación de funciones como letrado en el área de lo contencioso-administrativo del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo, del 01/07/2011 hasta el 30/06/2013 y como letrado con retribución de letrado coordinador de apoyo en decisión a la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 05/09/2023 hasta la actualidad.

.- Esta prolongada y extensa trayectoria profesional se entiende suficiente como para aportar aptitudes de excelencia jurisdiccional y así es apreciado por el Pleno, en los términos de la base sexta. b) de la convocatoria. Además, esta trayectoria es el marco de una prolífica actividad jurisdiccional que destaca por su cantidad, calidad y rigor. El candidato nombrado aporta una completa y sistemática relación de 43 resoluciones judiciales de la más variada temática (medio ambiente, elaboración de disposiciones generales, partidos políticos,



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

matriculación de buques, actos impugnables, derecho sanitario, derecho a la huelga, derechos fundamentales, derecho sancionador, autonomía universitaria, responsabilidad patrimonial, ordenanzas fiscales, etcétera) y de una calidad jurídica incuestionable; 40 de ellas recurridas y confirmadas por el Alto Tribunal.

El Pleno valora este repertorio de resoluciones de forma muy elevada en atención a la calidad técnica, novedad, trascendencia, complejidad, conceptualización general y/o variedad temática de las resoluciones que contiene. Entre sus sentencias se destacan la STSJ, Contencioso sección 9ª, de 19/06/2003 (ROJ: STSJ M 9634/2003 - ECLI:ES:TSJM:2003:9634 ), en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración y la STSJ, Contencioso sección 9ª, de 21/10/2003 (ROJ: STSJ M 14393/2003 - ECLI:ES:TSJM:2003:14393) en materia de desviación de poder.

Además, junto a esas resoluciones, el candidato nombrado aporta una relación de proyectos de resoluciones y trabajos de asistencia técnica en el estricto ámbito jurisdiccional de la Sala Tercera, de gran relevancia jurídico.

Este conjunto, extenso pero selecto, de resoluciones judiciales y trabajos de asistencia técnica, permite al Pleno apreciar claras aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción pues es expresivo de la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la propia jurisdicción, según lo dispuesto en la base sexta. a) de la convocatoria.

Junto a este elenco, el candidato nombrado aporta cinco resoluciones (alguna de las cuales se incluyen en aquél) que también demuestran sus aptitudes jurisdiccionales y que son representativas de su trayectoria profesional:

La primera es una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 10.05.1999 (136/1997), en materia de montes comunales (confirmada por la STS, Civil sección 1ª del 20 de junio de 2006 (ROJ: STS 4050/2006 - ECLI:ES:TS:2006:4050), y cuya relevancia descansa en que afectaba a la legalidad del proceso de desamortización de los montes comunales de Los Yébenes de modo que, como aprecia el magistrado nombrado, un pronunciamiento estimatorio hubiera supuesto una cascada de procesos destinados a revertir la privatización de los montes comunales en muchos municipios de España. Además, tuvo un impacto doctrinal importante.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

En segundo término, se aporta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14/02/2008 (706/2005), en materia de medio ambiente (Confirmada por STS, Contencioso sección 3ª del 14/02/2011 (ROJ: STS 430/2011 - ECLI:ES:TS:2011:430). La sentencia recayó sobre un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que resolvió a favor del órgano sustantivo la discrepancia que mantenía con el órgano medioambiental sobre el proyecto de duplicación de la calzada de una carretera que afectaba a una Zona de Especial Protección para las Aves y un Lugar de Importancia Comunitaria incluido en la Red Natura 2000 de gran valor ecológico. La Sala estableció las condiciones para la validez de la Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con las normas nacionales y europeas.

Por su parte, también hay que subrayar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17/10/2006 (525/2005), en materia del derecho fundamental de defensa y libertad de expresión (Confirmada por la STS, Contencioso sección 7 del 20 de octubre de 2008 (ROJ: STS 6081/2008 - ECLI:ES:TS:2008:6081). Esta resolución, incluida en la relación de 43 resoluciones que presenta el magistrado Quesada Varea, y tiene gran importancia no solo por su calidad técnica al haber pasado el filtro del Alto Tribunal, sino porque aborda la posible vulneración de los derechos fundamentales mediante un acto de trámite del procedimiento administrativo sancionador, en particular mediante el acuerdo de incoación en el que se adoptaron determinadas medidas cautelares tendentes al cese de la emisión televisiva sin título.

En cuarto lugar, se resalta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22/10/2019 (438/2018), en materia del derecho fundamental a la igualdad en el ámbito tributario (STSJ, Contencioso del 27/12/2021 (ROJ: STSJ M15443/2021 - ECLI:ES:TSJM:2021:15443 ); STC del 21/03/2022 ( ROJ: STC 40/2022 - ECLI:ES:TC:2022:40).

Interpreta, en sentido favorable al contribuyente, los requisitos para la bonificación fiscal por parentesco a las parejas de hecho que no cumplan las condiciones exigidas para ello en la legislación de la Comunidad de Madrid, en especial la inscripción en el registro autonómico de parejas de hecho. La sentencia fue casada, pero luego el Tribunal Constitucional anuló la sentencia de casación por los mismos fundamentos de la primera instancia.

Finalmente destaca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21/01/2010 (282/2007) en materia



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

de urbanismo (STS, Contencioso sección 5 del 12 de diciembre de 2012 (ROJ: STS 8902/2012 - ECLI:ES:TS:2012:8902)).

Como señala el magistrado nombrado, la relevancia de la misma se explica en que la potestad de las Administraciones autonómicas de realizar obras en contra del planeamiento urbanístico vigente exige la concurrencia de razones de urgencia o excepcional interés público, para cuya apreciación es necesario que el acuerdo de la Comunidad Autónoma esté dotado de la oportuna motivación; así la Sala estudió si la práctica deportiva es causa suficiente para apreciar el excepcional interés público que faculta a las Comunidades autónomas a realizar proyectos urbanísticos contrarios al planeamiento y a exigir del ayuntamiento su modificación. La Sala consideró que la existencia del interés general que exige la Ley del Suelo no estaba debidamente motivada para el ejercicio de esa potestad excepcional.

La profundidad del conocimiento jurídico del candidato nombrado en el orden contencioso administrativo se evidencia igualmente en su exposición ante la Comisión de Calificación, en la que traslada a la misma con seguridad y precisión diversas consideraciones sobre algunas de las cerca de cincuenta resoluciones aportadas y otros aspectos relacionados.

.- El Pleno aprecia en el magistrado Quesada Varea las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se ven complementadas, por otra parte, y como criterios de ponderación adicional que marcan las bases de la convocatoria, por actividades gubernativas y extrajudiciales. Entre las primeras, en su modalidad de colaboración con el CGPJ y otras instituciones, hay que tener en cuenta que el candidato nombrado ha sido vocal de la Junta Electoral de Lleida (1991) y Toledo (1994 a 1996 y 1999) y presidente Junta Electoral de Zona (Caravaca y Torrijos, 1987 y 1989, respectivamente); presidente del Jurado de Expropiación Forzosa de Lleida (1989) y Toledo (1997); y ha sido director de un curso del CGPJ.

.- En relación con otras actividades jurídica relevantes, el candidato nombrado ha sido profesor asociado Derecho Procesal Universidad Castilla-La Mancha (1993 a 1999), profesor asociado de la UNED (2001 a 2005), y es autor de 2 colaboraciones en obras colectivas y 2 artículos doctrinales. Los primeros son "Casos prácticos de Derecho Procesal Civil" junto a Vicente Gimeno Sendra, Pablo Morenilla Allard y Manuel Díaz Martínez. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, SA, 2003 y sucesivas ediciones; y "Las sentencias fundamentales del Tribunal Supremo en materia contencioso-administrativa", dirección técnica, Iustel, (2016).





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos – muy especialmente los relacionados con la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, reforzados por los de la gestión judicial y las actividades docentes – efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en José Luis Quesada Varea la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno demérito o falta de consideración por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

**I-44º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de Rafael Fernández Valverde), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, se acuerda elevar a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Manuel Fernández-Lomana García, actualmente Magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en la que tomó posesión en fecha 03/10/2000.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, que posee una sobresaliente experiencia en el ejercicio de la jurisdicción en general y en el orden contencioso administrativo y sus órganos colegiados muy en particular.

.- En efecto, el magistrado Fernández-Lomana García ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 26/06/1986, ostentando el número 340 del escalafón oficial de la categoría de magistrado. A fecha fin de presentación de instancias a la convocatoria tenía computados más de 38 años, 4 meses de antigüedad en la Carrera Judicial; de ellos, unos 26 años en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, todos ellos en sus órganos colegiados. Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Adscrito a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (18/01/2000 a 03/10/2000), Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (art. 355 bis 2) (20/04/1998 a 31/12/1999), Juzgado de lo Social número 20 de Madrid (26/11/1991 a 14/04/1998), Juzgado de lo Social



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

número 16 de Madrid (02/11/1989 a 19/11/1991), Juzgado de Distrito número 2 de Badajoz (03/03/1989 a 13/10/1989) y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de la Olivenza (19/07/1986 a 16/02/1989).

También hay que tener en cuenta sus servicios como Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo por vacante (en comisión de servicio de 27/05/2004 a 21/03/2013).

Esta prolongada y extensa trayectoria profesional es el marco de una prolífica actividad jurisdiccional que destaca por su cantidad, calidad y rigor, de la que es un magnífico botón de muestra tanto las cinco resoluciones seleccionadas es especial relevancia técnica, como la relación de otras 16 resoluciones en materia tributaria, derecho de asilo, protección de datos, o notificación electrónica.

.- Las cinco sentencias destacadas alcanzan la máxima ponderación: En primer lugar destaca la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 10/10/2021 (1073/2017), en materia de impuesto sobre sociedades. Fue confirmada por la STS de 13 de noviembre de 2023 (Rec. 1876/2022).

Es la multa, hasta la fecha, más alta impuesta por la AEAT. Se analizan varias cuestiones, de forma y fondo, probablemente la más espinosa determinar si estamos ante un supuesto de simulación o de conflicto en la calificación de la norma (fraude). La Sala fija los criterios que permiten diferenciar entre una y otra figura. Se estimó en parte el recurso.

La relevancia de la sentencia se aprecia en calidad técnica (pasó el filtro del Alto Tribunal) y en la trascendencia de los hechos y su complejidad. A través de una compleja operativa la entidad trata de deducirse los gastos financieros y deterioros de diversas operaciones. Se realiza un extenso estudio sobre diversas cuestiones.

Además, la sentencia de la Sala ha sido objeto de comentario por la doctrina: E. SANZ GADEA, *"Gastos y deterioros financieros en el Impuesto sobre sociedades. Últimas Sentencias"*. Revista Actualidad Administrativa, nº 6/2024.

En segundo lugar, también es importante la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 30/11/2018



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

(643/2015), en materia del impuesto sobre la renta de no residentes. La sentencia analiza si la denominada cláusula del beneficiario efectivo - cláusula antiabuso- puede ser aplicada aunque no conste expresamente establecida en el Convenio para evitar la doble imposición. La sentencia entendió que la cláusula estaba implícita. Filosofía que comparte el TJUE.

Como indica el candidato nombrado, si bien fue casada por la STS de 23/09/2020 (Rec. 1996/2019), esta resolución no tuvo en cuenta las STJUE de 26/02/2019 (C.-115/16 y C.116/160) danesas. Como indica la doctrina el criterio de la AN coincide con el del TJUE. La STS de 8 de junio de 2023 (Rec. 6528/2021), afirma que opta por seguir la STJUE pese a lo declarado en la STS de 23 de septiembre de 2020.

La sentencia ha sido objeto de un intenso debate doctrinal. Así, Calderón Carrero, Néstor Carmona, Sanz Gadea, Aitor Navarro, Luis Miguel Mulerio, entre otros. Se analiza el concepto de beneficiario efectivo, así como, el problema de la interpretación dinámica de los convenios.

Por su parte, el magistrado Fernández-Lomana García también aporta la interesante Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 22/06/2016 (473/2013) en materia impuesto sobre la renta de no residentes. La sentencia fue recurrida en casación por la Abogacía del Estado, siendo declarado el recurso desierto por ATS de 10/11/2016 (2556/2016).

Se realiza un esfuerzo en orden a determinar con precisión el concepto de "establecimiento permanente". La sentencia fue objeto de comentario en varias revistas (N. Carmona; S. Moreno). Se tiene en cuenta la doctrina OCDE como *soft law* y se interpreta el Convenio con EEUU para evitar la doble imposición.

En cuarto lugar, es relevante la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 01/07/2021 (248/2018) en materia de impuesto sobre sociedades. La sentencia, que contiene votos particulares, fue por la STS de 11 de abril de 2023 (Rec. 7272/2021).

Tal y como asevera el candidato nombrado, la sentencia ha contribuido a cambiar el modo de calcular la cuantía de las sanciones en el IS. Tras la SAN y la STS la Administración ha cambiado el modo de aplicar el concepto de "perjuicio económico" al graduar la sanción.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Finalmente, también es importante la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 04/02/2022 (322/2019) en materia impuesto sobre sociedades, que fue confirmada por la STS de 23/04/2024 (Rec. 4382/2002). La sentencia analiza con detalle los criterios de imputación en el IS. En especial el art 19.1 TRLIS actual art 11 LIS.

Ha sido objeto de análisis por la doctrina. Así, E. SANZ GADEA, *"Imputación temporal de ingresos y gastos. Análisis de las SAN de 26 de enero de 2022, Rec. núm. 485/2019, y de 4 de febrero de 2022, Rec. núm. 322/2019"*, en Revista de Contabilidad y Tributación, nº 475/2022).

La profundidad del conocimiento jurídico del candidato nombrado en el orden contencioso administrativo se evidencia igualmente en su brillante exposición ante la Comisión de Calificación, en la que traslada a la misma con seguridad y precisión diversas consideraciones sobre las resoluciones aportadas y otros aspectos relacionados.

.- El Pleno aprecia en el magistrado Manuel Fernández-Lomana García las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se ven complementadas, por otra parte, y como criterio de ponderación adicional que marcan las bases de la convocatoria, por una notable experiencia gubernativa, al haber sido miembro electo de la Sala de Gobierno de la AN (2019 a 2024) y miembro electo Sala de Gobierno TSJ Extremadura (1989, por la categoría de juez, dejando la Sala como consecuencia de ascenso). El aspirante aporta un acta de sanción impuesta a un abogado como ejemplo de resolución gubernativas.

Es miembro del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (Consejo de Europa), desde 2020 a la actualidad y fue analista del CENDOJ (2005 a 2013).

.- Adicionalmente, al margen de sus méritos judiciales, el candidato nombrado ha sido profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid en los años académicos (2000/2001 a 2013/2014), profesor de prácticum en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (2013/2014) y profesor en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) (2017/2018, a 2024/2025).

El candidato nombrado es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (2004). Es autor de 92 artículos en materia de Derecho administrativo, entre ellos *"Sociedad de gananciales e impuesto sobre sucesiones"*, en Rev. Actualidad Administrativa 3/2024, *"La vertiente procesal*



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

*del principio non bis in ídem*”, en Rev. Actualidad Administrativa 3/2024, “*Sobre la necesidad de comparecer ante la Inspección de Hacienda de los representantes legales de las personas jurídicas*”, en Rev. Actualidad Administrativa 6/2024 y la “*Herencia en disputa e Impuesto de sucesiones*”, en Rev. Actualidad Administrativa 6/2024.

En otras materias es autor de dos monografías, coautor de 10 obras colectivas y autor de 34 artículos doctrinales. Los libros son *La reconvencción en el Proceso laboral*. Ed. Civitas. Madrid 2006; y *Ley General de Seguridad Social comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias*. Ed. El Derecho. Cuatro ediciones la primera de 2010 y la última de 2018.

Por lo demás, en virtud de lo establecido en el artículo 17 «in fine» del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero de 2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, se realiza una remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión de Calificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 16 de la misma Norma reglamentaria.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en Manuel Fernández-Lomana García la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno demérito o falta de consideración por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-45º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de Nicolás Antonio Maurandi Guillén), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, se acuerda elevar a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a María Concepción García Vicario, actualmente presidenta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Burgos, desde el 03/11/2003.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, que posee una muy notable experiencia en el ejercicio de la jurisdicción en general y en el orden contencioso administrativo y sus órganos colegiados muy en particular.

.- En efecto, la magistrada García Vicario ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 14/10/1988, ostentando el número 689 del escalafón oficial de la categoría de magistrada. A fecha fin de presentación de instancias tiene computados más de 36 años de antigüedad en la Carrera Judicial y más de 34 años en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, todos ellos en sus órganos colegiados.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos (18/10/1990 a 29/10/2003), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lerma (13/02/1990 a 01/10/1990), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Reinosa (28/12/1989 a 25/01/1990) y el Juzgado de Distrito de Reinosa (07/11/1988 a 28/12/1989).

Esta prolongada y extensa trayectoria profesional es el marco de una prolífica actividad jurisdiccional que destaca por su cantidad, calidad y rigor, de la que es un magnífico botón de muestra tanto las cinco resoluciones seleccionadas es especial relevancia técnica, como la relación de otras 9. Hay que señalar que la candidata nombrada ponente de más de 5.300 sentencias, de ellas, 3.929 figuran en el Fondo Documental del CENDOJ.

.- Las cinco sentencias destacadas alcanzan la máxima ponderación: La primera de ellas es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Burgos, de 18/12/2015 (Rollo Apelación 9/2015) en materia de obligación colegiación para inclusión en lista provincial de veterinarios interinos.

Se trata de una resolución firme dictada en vía de apelación y, en tal fecha, contra la misma no cabía interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Se relevancia se evidencia en que para su resolución, se planteó previamente cuestión de inconstitucionalidad y la materia que se aborda relativa a las competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma). La cuestión de inconstitucionalidad fue estimada por sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de noviembre de 2015 (Roj: STC 229/2015 - ECLI:ES:TC:2015:229) lo que, a su vez, determinó la estimación del recurso interpuesto.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Ante las dudas de constitucionalidad suscitadas, la Sala planteó mediante Auto de 25.05.2015 cuestión de inconstitucionalidad en relación con segundo inciso del art. 16.2 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León, por entender que el mismo traspasaba el límite de las normas básicas del Estado contenidas en el art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, habiendo declarado el TC que siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados.

Una vez declarada la inconstitucionalidad y nulidad de dicho inciso, la Sala consideró vigente el artículo 5.3.c) de la Orden de 7 de julio de 1988. Los veterinarios que quisieran ser incluidos en la Lista de interinos debían estar colegiados en el Colegio Profesional correspondiente de la respectiva provincia, pues tal precepto no era sino reproducción del principio de colegiación obligatoria contenido en el art. 3.2. Ley 2/1974.

En segundo término, destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Burgos, de 15/03/2002 (Rollo Apelación 65/2001) en materia de alta régimen general seguridad social jueces sustitutos durante menos de un mes. La relevancia de la resolución reside en su carácter innovador y en que tras la firmeza de la sentencia dictada en apelación, se procedió a plantear cuestión de ilegalidad ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con relación al artículo 1.2 del Real Decreto 960/1990; cuestión que fue estimada por sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2003 (ROJ: STS 6486/2003 - ECLI:ES:TS:2003:6486).

Se trata del reconocimiento del derecho de una jueza sustituta a ser dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social mientras estuvo ejerciendo funciones judiciales, condenando a la Administración a su integración en el RGSS, debiendo practicar al efecto las cotizaciones correspondientes por ese periodo de tiempo con arreglo a la normativa de la Seguridad Social, acordando proceder, una vez ganase firmeza dicha resolución, a plantear Cuestión de Ilegalidad del artículo 1.2 del Real Decreto 960/90, de 13 de julio, en que se fundamentaban las resoluciones impugnadas. El Tribunal Supremo estimó la cuestión de ilegalidad, declarando la nulidad de pleno derecho del apartado 2 del artículo del Real Decreto 960/1.990, de 13 de julio, exclusivamente en cuanto no comprendía en su ámbito a los Jueces sustitutos que no desempeñaban ininterrumpidamente sus funciones durante más de un mes.

A juicio de la Sala, los jueces y las juezas sustitutos/as que no desempeñaban ininterrumpidamente sus funciones durante más de un mes, reunían requisitos para que referido cargo se calificase como personal interino al servicio de la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Adm. Justicia. El art. 1.2 del RD 960/1990 que no los incluyó, excedió el ámbito de autorización contenido en la DF Sexta de la Ley 33/1987 que no permitía establecer diferenciaciones o categorías cerradas de interinos.

Por su parte, es también importante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Burgos, de 07/06/2019 (PO 236/2018) en materia de personal. La resolución es firme.

La relevancia de la sentencia reside en la variedad de cuestiones planteadas, así como la importancia de los trámites objeto de estudio: Tras examinar el régimen jurídico aplicable al proceso para la contratación del Director/a del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y concluir que se rige por los principios de capacidad, mérito, publicidad y concurrencia, siguiendo la normativa general de función pública, se entra a examinar diversas cuestiones capitales con relación al procedimiento seguido: cumplir el requisito de Científico Senior; falta de puntuación de CV y Memorias; improcedente valoración de la trayectoria profesional; falta de motivación y justificación cuantitativa de la puntuación de las Memorias; improcedente establecimiento de un "corte" para las entrevistas; falta de concreción del objeto de la entrevista y puntuación de la misma; actuación arbitraria haciendo una "segunda entrevista"; incoherente motivación de la propuesta y ausencia del levantamiento de Actas del proceso selectivo.

Se resuelve la nulidad resolución por vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ordenando la retroacción de actuaciones para que la Comisión, ajustando se actuación a lo dispuesto en las Bases y atendidos los principios antedichos, desglose y motive la puntuación atribuida a cada candidato en la fase de valoración de CV y de la Memoria, realizando una entrevista a "todos" previa fijación de los criterios que regirán la misma, valorando correctamente la experiencia requerida, y levantando Actas del proceso.

En cuarto lugar, destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Burgos, de 28/04/2020 (PO 111/2019) en materia de impuesto sucesiones y donaciones.

La relevancia de la misma no solo reside en que pasó el filtro del Alto Tribunal, al ser confirmada por STS de 03/05/2022, declarando no haber lugar al recurso casación 3685/2020 (Roj: STS 1682/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1682) sino por la trascendencia social y fiscal de la cuestión planteada.

Se trata de la determinación de la comunidad autónoma en la que se ha de liquidar el impuesto en atención a la residencia habitual del donatario y la





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

interpretación de los criterios jurídicos que constituyen el marco normativo y delimitación y alcance de las "ausencias temporales". La doctrina legal es que el criterio jurídico de conexión viene determinado por el lugar de producción del rendimiento del impuesto, que será la residencia habitual del donatario - art. 32.2 c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre - que habrá de establecerse a partir que los criterios del artículo 28 de la expresada Ley, de acuerdo con el orden de prelación que contiene dicho precepto. El concepto de "ausencia temporal" de la residencia habitual se computará para determinar el mayor número de días de permanencia en el territorio de una Comunidad Autónoma, como magnitudes temporales diferenciadas. El Alto Tribunal viene a señalar que la sentencia interpreta correctamente el marco jurídico que resulta de aplicación sin que, en ningún momento altere el orden de prelación de los criterios jurídicamente allí establecidos.

Acreditado que la residencia habitual durante los 5 años anteriores al devengo se mantuvo en B, y que el núcleo de sus intereses vitales nunca dejó de radicar en esa localidad - domicilio de sus padres - obedeciendo el traslado a la realización de estudios encaminados a su acceso al mercado laboral, estamos ante "ausencia temporal justificada" que debe computarse para determinar el periodo de permanencia (art. 28 Ley 22/2009).

Finalmente, también es relevante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Burgos, de 08/02/2024 (Rec. Casac. Autonómico 9/2022) en materia de retribuciones turnos rotatorios y complemento de atención continuada, modalidad A. Se trata de una sentencia dictada por la Sección Especial de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, prevista en el art. 86.3 de la LJCA, estimando un recurso de casación autonómico interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Junta, contra sentencia del JCA Nº 2 de León, exclusivamente en cuanto estimó el recurso interpuesto en reclamación del abono del importe íntegro del complemento de atención continuada, modalidad A "turnos rotatorios".

Se aborda la cuestión de si el disfrute de permisos retribuidos por el personal que presta servicios profesionales en turnos rotatorios en los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León (salvo que legal o convencionalmente se garantice la plenitud de derechos retributivos para el permiso solicitado) conlleva o no el abono del complemento de atención continuada, modalidad A, turnos rotatorios, y si ha de computarse el día de permiso como de siete horas y media de promedio diario, a la vista de la normativa aplicable.

La Sala responde que el disfrute de los permisos de dicho personal (salvo que legal o convencionalmente se garantice la plenitud de derechos retributivos



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

para el permiso solicitado) no conlleva el abono del complemento de atención continuada, modalidad A " turnos rotatorios", debiendo computarse el día de permiso que estaba previsto en el calendario la realización de turno de noche, como de siete horas y media de promedio diario.

La profundidad del conocimiento jurídico de la candidata nombrada en el orden contencioso administrativo se evidencia igualmente en su brillante exposición ante la Comisión de Calificación, en la que traslada a la misma con seguridad y precisión diversas consideraciones sobre las resoluciones aportadas y otros aspectos relacionados

.- El Pleno aprecia en la magistrada García Vicario las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se ven complementadas, por otra parte, y como criterio de ponderación adicional que marcan las bases de la convocatoria, por una sobresaliente experiencia gubernativa: Es la Presidenta de la Sala Contencioso- Administrativo del TSJCYL, sede en Burgos (2003 a 2024), miembro nato del Pleno por el mismo periodo y miembro nato de la CP (2004 a 2007, 2014, y 2014 a 2021). También ha sido presidenta del TSJCyL en funciones en diversas ocasiones. Presenta una memoria completa de resoluciones gubernativas tanto de la presidencia de la Sala como en su condición de miembro de la Sala de Gobierno (en la que fue ponente de unos 230 asuntos).

Además, ha sido directora o coordinadora de 6 cursos o seminarios organizados por el CGPJ, coordinadora de otros cursos organizados por otras instituciones como la Junta de Castilla y León, y presidenta del tribunal de oposiciones de Oficiales de la Administración de Justicia (1991).

Adicionalmente, al margen de sus méritos judiciales, la candidata nombrada ha sido profesora en la Universidad de Burgos (1991 a 1998, 2004 a 2006 y 2012 a 2015), en la UNED (2002 a 2008) y ponente o participante en una decena de cursos y mesas redondas organizadas por el CGPJ. Tiene el Diploma del VII Programa Liderazgo Gestión Pública 2011 por el IESE.

Por lo demás, en virtud de lo establecido en el artículo 17 «in fine» del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero de 2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, se realiza una remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión de Calificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 16 de la misma Norma reglamentaria.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente y discente - efectuada de forma



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres que es objeto de ponderación, hace que se observen en María Concepción García Vicario la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno demérito o falta de consideración por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-46º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de José Antonio Montero Fernández), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a María Consuelo Uris Lloret, actual presidenta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de María Consuelo Uris Lloret acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovida a la máxima categoría de magistrada del Tribunal Supremo.

.- En la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden contencioso-administrativo, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. Tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En primer lugar, presenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24/01/2000. (Número procedimiento 2631/1996), en materia de Derecho tributario. El



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

recurso de casación interpuesto por una de las partes (la demandante) fue inadmitido por auto de la Sección 1ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Rec. 2701/2000), de 14 de enero de 2002. Se considera, al igual que ha informado la Comisión de Calificación, una resolución relevante por la minuciosidad con la que se examinan todas las operaciones societarias conducentes a eludir frente a la Administración las responsabilidades derivadas de la extinción de contratos de trabajo, y, elusión del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.

En segundo término, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26/03/2010 (Número procedimiento 25/2005), en materia de urbanismo. Se trata de un asunto especialmente complejo con una gran calidad técnica como demuestra que pasó el filtro del Alto Tribunal. En efecto, la sentencia fue confirmada por la de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección 5ª, de 11 de octubre de 2013, Rec. 5161/2010.ECLI:ES:TS:2013:5257.

Además de lo anterior, la resolución condensa los criterios jurisprudenciales en materia de planificación urbanística, y realiza una valoración detallada de la prueba para concluir que lo proyectado no era compatible con las características del municipio ni con el respeto a un desarrollo sostenible.

Por su parte, ha sido citada en publicaciones y libros referentes al planeamiento urbanístico, entre ellos por Gómez Manresa, Mª. Fuensanta, *"Planeamiento Urbanístico y Desarrollo Sostenible"*, Dykinson, Madrid 2015, págs. 68 y 69. Es destacada en la Base de Datos de la Editorial La Ley.

También se destaca la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 16/09/2016. (Número procedimiento 40/2015) en materia de responsabilidad patrimonial por actos del legislador que aborda un tema de gran interés jurídico, como es la responsabilidad derivada de actos del legislador.

La candidata nombrada aporta completa en anexo a la instancia. Se examinan todos los antecedentes y circunstancias del supuesto y se llega a la conclusión de que el daño que alega la demandante no deriva de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, sino que es un riesgo de la actividad empresarial. Del mismo modo se estudia si concurren los presupuestos para indemnizar la privación de la facultad de participar en actividades de promoción urbanística. Sentencia destacada en Base de Datos de la Ley Digital.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

En cuarto lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10/03/2022. (Número procedimiento 85/2021), en materia de medio ambiente (Mar Menor) tiene una trascendencia muy evidente. La parte demandante en este procedimiento era el Ministerio Fiscal, que interponía recurso contencioso administrativo contra la resolución desestimatoria presunta de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la reclamación o requerimiento presentado en fecha 12 de mayo de 2020, al amparo del artículo 20.2 b) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Disposición adicional octava de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Ha sido comentada por autores especializados en medio ambiente, como D. Carlos Javier Durá Alemañ Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) en Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN 1989-5666. Aparece en CENDOJ destacada como innovadora.

Finalmente, en quinto lugar, se valora la Sentencia de la Tribunal Superior de Justicia de Región de Murcia. Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 08/07/2022 (Número procedimiento 524/2021), en materia de Hacienda municipal. Examina la posible compensación de deudas tributarias con créditos derivados de ejecución de convenio urbanístico. Las cuestiones planteadas son de complejidad, pues exigen el estudio del convenio y de las normas tributarias de aplicación al caso. Sentencia destacada como de actualidad en CENDOJ.

La extensa experiencia jurisdiccional de la magistrada nombrada ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas en los términos expuesto, sino también en la clara y fluida exposición analítica en su comparecencia que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia. En definitiva, el Pleno aprecia en la candidata nombrada aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se derivan del conjunto de las resoluciones aportadas, así como de su intervención ante la Comisión de Calificación.

.- Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la muy notable experiencia acumulada por la magistrada Uris Lloret en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden contencioso administrativo y en ellos órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que la candidata nombrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 14/10/1988, ostentando el número 645 del escalafón oficial de la categoría de magistradas, teniendo computados más de



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

36 años en la Carrera Judicial y más de 34 años en la categoría de magistrada. A fecha del fin del plazo de presentación de instancias la magistrada había servido en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo durante cerca de 29 años y en los órganos colegiados citado orden más de 22 años.

Entre sus anteriores destinos destacan la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (24/01/2005 a 28/10/2019), el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Murcia (15/12/1998 a 18/01/2005) y la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (06/06/1991 a 04/12/1993).

.- Desde una perspectiva gubernativa, la candidata nombrada es la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Región de Murcia desde 2019 a la actualidad, y por ende miembro nato de su Sala de Gobierno durante el mismo periodo.

El Pleno ha valorado el desempeño de sus actividades de carácter gubernativa que se derivan de su experiencia en el cargo y también en la relación de resoluciones de tal carácter que aporta, que destacan por su variedad y relevancia, en materias tales como la sustitución del presidente del Tribunal Superior de Justicia en distintos periodos y fechas, desde julio de 2020, desempeñando la presidencia en funciones, asumiendo todas las que le corresponden (Salas de Gobierno, acuerdos, ponencias, reuniones, asistencia a actos institucionales, entre otros); ponencias asignadas por Sala de Gobierno o por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; propuesta de modificación de normas de reparto a final de cada uno de los años, desde 2019 hasta la fecha; celebración de Plenos no jurisdiccionales sobre diversos asuntos; informes de permisos, vacaciones y licencias de los magistrados de la Sala; informes sobre actividad de magistrados suplentes; acuerdos de reparto de asuntos entre los magistrados de la Sala en casos de licencias prolongadas; planificación de vacaciones de los magistrados, a fin de que el servicio quede siempre debidamente cubierto; resolución de las distintas cuestiones o problemas que en el desarrollo ordinario de las tareas se suscitan en la Unidad Procesal de Apoyo Directo (en adelante UPAD), en el Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento o en el Servicio Procesal Común de Ejecuciones, cuya decisión no corresponda al Letrado de la Administración de Justicia; entre otras.

.- Al margen de su actividad judicial, la candidata nombrada es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia desde 1998 a la actualidad.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Además, es autora de 5 publicaciones de carácter jurídico; entre ellas "*La responsabilidad patrimonial por actos del legislador y su regulación en la nueva Ley sobre Régimen Jurídico del Sector Público*" (ISBN: 978-84-617-9271-9) y "*La doble instancia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativo*" (ISBN 978-84-09-55736-3).

Por lo demás, en virtud de lo establecido en el artículo 17 «in fine» del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero de 2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, se realiza una remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión de Calificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 16 de la misma Norma reglamentaria.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en María Consuelo Uris Lloret la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un tanto mayor que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-47º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante Celsa Pico Lorenzo), presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a María Alicia Millán Herrandis, actual Magistrada de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada. Tal y como exigen las bases de la convocatoria, deben ponderarse los méritos que ponen de manifiesto las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción expresadas en la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la propia



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

jurisdicción, valorados a partir de las resoluciones aportadas o trabajos de asistencia técnica referidas en la base tercera y en la comparecencia realizada por la persona que opte a la plaza; la experiencia acumulada en la Carrera Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes de excelencia jurisdiccional; el desarrollo de actividades jurídicas llevadas a cabo en desempeños gubernativos o gubernativo-jurisdiccionales; y finalmente también se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las aptitudes de excelencia que sean útiles en la actividad gubernativa y el ejercicio de la jurisdicción.

Pues bien, atendiendo a los criterios de ponderación expuestos, tanto en el orden de su prelación individual como recogen las bases, como en una ponderación en conjunto, el Pleno considera que la trayectoria profesional de María Alicia Millán Herrandis acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovida a la máxima categoría de magistrada del Tribunal Supremo.

.- Siguiendo el orden establecido, en la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden contencioso-administrativo, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. Tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En primer lugar, la magistrada Millán Herrandis aporta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20/11/2018 (36/2016), en materia de función pública y méritos según la LO 3/2007 de 22 de marzo, de igualdad.

La sentencia abordaba una cuestión novedosa acerca del alcance de la LO 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad, en cuanto al cómputo de los periodos en excedencia por cuidado de hijos a los efectos de su baremación en los concursos de provisión de puestos de funcionarios de habilitación nacional, en un caso en el que se aplicaba una norma estatal (OM de 10 agosto de 1994) que no respetaba las determinaciones de los artículos 56 y 57 de la LO 3/07. En aquel momento no existía doctrina al respecto, el criterio se confirmó por las STS 1768/2020 del 17 de diciembre ECLI:ES:TS:2020:4180 y 174/2021 de 10 de febrero ECLI:ES:TS: 2021:460. La sentencia resolvía el problema de una





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

regulación que no respetaba la LO 3/07 y hacía así efectivo el mandato de los artículos 14 CE y 2 y 3.3 del TUE. A raíz de esta doctrina la Orden TFP/153/2021 equiparó ambas situaciones.

La trascendencia de la resolución es triple. Por un lado, el carácter entonces novedoso de la cuestión, haber pasado el filtro del Alto Tribunal y, finalmente, haber propiciado una reforma normativa.

Por su parte, también es destacable la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 27/01/2009 (401/2006), sobre el decreto de nombramiento de Abogado General. Se aborda la legitimación activa de un sindicato para impugnar el nombramiento del Abogado General y también las diferencias entre el preámbulo de la Ley 10/05, de asistencia jurídica a la Generalitat Valenciana, que exige una experiencia profesional de al menos 15 años y su artículo 2. 2 que se limita a exigir que sea jurista de reconocido prestigio. Su calidad técnica se acredita al ser confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 09/05/2011 (rc. 1962/2009 ECLI:ES:TS:2011:3158), que posteriormente fue invocada como argumento en el recurso contra el RD de nombramiento de presidenta del Consejo de Estado (STS 1611/2023 ECLI:ES:TS:2023:5059).

En tercer lugar, la candidata aporta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21/12/2015 (66/2015), sobre el Decreto 186/14 de 7 de noviembre del Consell, que regula el sistema de carrera profesional. Esta resolución también pasó el filtro del Alto Tribunal pues la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 402/2017, del 08 de marzo, recurso 93/2016, ECLI:ES:TS:2017:921 desestimó el recurso de casación deducido por la Generalitat Valenciana.

La sentencia resuelve la nulidad de los preceptos impugnados que excluían a los funcionarios interinos con más de 5 años de antigüedad de la percepción de la carrera profesional y desestima la alegada inconstitucionalidad de la norma considerándola contraria a la directiva 1999/70/CE y aplicando la eficacia directa de ésta, sin necesidad de plantear cuestión prejudicial comunitaria sobre la base de las doctrinas del acto claro y acto aclarado. La sentencia se dictó en un momento en el que no existía jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el supuesto particular de los funcionarios sometidos al Estatuto Básico, ya que sus resoluciones anteriores venían referidas a trienios de interinos, complementos del profesorado o la carrera del personal estatutario. La STSJCV construyó una interpretación aplicable al personal del EBEP; una vez dictada la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

STS 402/2017 la administración autonómica dictó el Decreto 211/2018 que incluye el personal interino.

También se aprecia una especial relevancia jurídica en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24/07/2009 (1391/2008) respecto a la Orden 10/06/2008 sobre organización pedagógica. La sentencia, tras reconocer la legitimación del sindicato, analiza la legalidad de la orden dentro de los límites estrictos del control de la potestad reglamentaria, siguiendo los criterios de revisión establecidos por el Tribunal Supremo (STS 29-01-08). La imposición obligatoria del idioma inglés para la impartición de la asignatura vulnera la DA 3 del RD 1361/06, de las enseñanzas básicas de secundaria, e incumple los requisitos básicos normativos: la iniciativa por parte del centro, el carácter voluntario para el alumnado y la insuficiencia de profesorado especializado, resaltando la motivación confusa, contradictoria e incongruente de la norma. La existencia de un derecho de opción respecto de la organización de la asignatura vulnera el contenido mínimo establecido en la normativa estatal e impide la formación común dentro del sistema educativo español.

La sentencia ofrece una solución estrictamente jurídica a una decisión administrativa muy singular, distinta y paralela a la cuestión de la objeción de conciencia a la asignatura resuelta por distintas sentencias del TS. La especificidad de la decisión administrativa obligó a un abordaje jurisdiccional particular que se vio confirmado por la STS de 09/05/11 (ECLI:ES:TS:2011:8174), desestimatoria del recurso de casación interpuesto.

Finalmente, se destaca el Auto del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, de 06/11/2017 (1417/2005), en materia de ejecución de sentencia que comporta la demolición de lo construido.

El auto resuelve cuestiones de importancia jurídica y de una trascendencia social evidente al referirse abordar la demolición de dos edificaciones de un complejo de 184 apartamentos y sus plazas de garaje que habían sido vendidas a terceros de buena fe, cuya autorización en Benidorm había anulada por la STS de 23/07/12. El auto admite la legitimación del tercero que instó la ejecución, por la acción pública urbanística y de costas y desestima la suspensión del incidente por existir un nuevo deslinde de costas y un recurso de amparo contra la STS. Asimismo, admite y desestima el incidente de imposibilidad material ejecución, resuelve que la ejecución supone la demolición a pesar de su coste económico y deniega la suspensión de la ejecución por el artículo 108.3 de la LJCA, a la vista de la doctrina del Tribunal Supremo y para la garantía del precepto ordena a la Generalitat Valenciana el cumplimiento de determinadas obligaciones.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Se suscitan gran parte de los problemas del derribo de edificaciones, desde los que impedirían la decisión (emplazamientos, legitimación, suspensión, imposibilidad) como los propios del alcance de la ejecución según la doctrina del TS y TC y en particular de la afectación de intereses socioeconómicos, dando solución a las exigencias del art.108.3 LJCA, evitando que sea un impedimento para llevar a cabo lo fallado. El TS no admitió el recurso de casación al considerar que el auto no incurría en ninguno de los supuestos previstos en el art. 87.1.C LJCA.

El rigor jurídico y la calidad técnica también es predicable de la ilustrativa relación de 17 resoluciones judiciales que la candidata nombrada aporta y que son acreditativas de las diversas materias abordadas en el orden contencioso administrativo. Así, 5 de ellas resuelven materias de función pública, otras 5 de responsabilidad patrimonial, 5 son de apelación y otras 2 en materia de expropiación forzosa y vía de hecho, y de urbanismo, respectivamente.

La excelencia jurisdiccional de la magistrada nombrada ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta tanto relación general como en la más acotada selección de estas, sino también en su clara y convincente comparecencia ante la Comisión de Calificación que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

.- Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la notable experiencia acumulada por la magistrada Herrandis Millán en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden contencioso administrativo y en los órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que la candidata nombrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno juristas de reconocida competencia (4º turno) el día 15/12/2000 y a fecha fin de presentación de instancias a la convocatoria tenía computados cerca de 24 años de antigüedad en la Carrera Judicial, en la categoría de magistrada y en el orden contencioso administrativo, de ellos más de 16 años en órganos colegiados. Antes de ocupar plaza en la Sala, su anterior destino fue el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 7 de Valencia (10.01.2001-19.02.2007).

Además, es magistrada especialista en el orden jurisdiccional contencioso administrativo desde el 02/02/2007, con el número 73 de dicho escalafón.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

.- Al margen de su actividad jurisdiccional, la magistrada Millán Herrandis ha sido docente en curso formativo de especialización en el orden contencioso administrativo (2018); miembro del tribunal calificador de las pruebas de especialización en el orden jurisdiccional contencioso administrativo (2020); miembro del tribunal selección para el cuerpo de la Abogacía de la Generalitat (2016, 2018, 2022 y 2023); Vocal titular del Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso a la subescala de secretaria categoría de entrada de la escala de habilitación nacional (1998).

.- Por otro lado, la candidata nombrada fue abogada ejerciente (1982 a 1987) y es funcionaria de Carrera de la Administración de la Generalitat Valenciana, grupo A.1, en el que ejerció desde 05/03/1987 a 31/12/2000 (en la actualidad en situación de excedencia).

Fue profesora asociada en la Universidad de València (1995 hasta el 2000); profesora en el Curso avanzado en Litigación contencioso-administrativa, convocado por la Escuela de Práctica jurídica en sus ediciones 22/23, 23/24, 24/25, impartiendo el taller *"El contencioso de la Función Pública"*; ponente y conferenciante en 7 cursos y mesas redondas, uno de ellos del CGPJ: Ponencia *"Régimen jurídico del Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público"*, CU22065, organizado por el CGPJ. También destaca su participación en la mesa redonda *"Reclamaciones por responsabilidad en el ámbito sanitario"* en la jornada Consecuencias de la COVID19, en la Universidad Cardenal Herrera (2020).

La candidata nombrada es miembro del Consejo de Redacción de la Revista jurídica de la Comunidad Valenciana y de la Revista de Práctica Urbanística y superó los cursos de doctorado en los años 1994 y 1995 en la Universidad de Valencia; ha sido coordinadora de la obra colectiva *"Fundamentos de Derecho Administrativo"* (Adaptados al programa de las oposiciones de Magistrados Especialistas de lo Contencioso Administrativo) y autora de los temas 73, 74 y 79 del mismo libro, editado por Tirant lo Blanch en 2022.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia como en la experiencia jurisdiccional como los extrajudiciales - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que también es objeto de ponderación, hace que se observen en María Alicia Millán Herrandis la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrada de la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-48º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de César Tolosa Tribiño), presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a Sandra María González de Lara Mingo, Magistrada de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional desde el 19/02/2018.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada. Tal y como exigen las bases de la convocatoria, deben ponderarse los méritos que ponen de manifiesto las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción expresadas en la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la propia jurisdicción, valorados a partir de las resoluciones aportadas o trabajos de asistencia técnica referidas en la base tercera y en la comparecencia realizada por la persona que opte a la plaza; la experiencia acumulada en la Carrera Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes de excelencia jurisdiccional; el desarrollo de actividades jurídicas llevadas a cabo en desempeños gubernativos o gubernativo-jurisdiccionales; y finalmente también se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las aptitudes de excelencia que sean útiles en la actividad gubernativa y el ejercicio de la jurisdicción.

Pues bien, atendiendo a los criterios de ponderación expuestos, tanto en el orden de su prelación individual como recogen las bases, como en una ponderación en conjunto, el Pleno considera que la trayectoria profesional de Sandra María González de Lara Mingo acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovida a la máxima categoría de Magistrada del Tribunal Supremo.

.- Siguiendo el orden establecido, en la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden contencioso-administrativo, así



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. Tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En el primero de los casos, aporta 21 resoluciones judiciales referidas a una diversidad de materias del orden contencioso administrativo y de gran relevancia atendiendo bien a su calidad técnica, carácter novedoso y trascendencia. Además, también aporta los Cuadernos de Casación Tributaria que elaboró durante su estancia en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo están disponibles en la página web del CGPJ. El CGPJ otorgó el Premio Calidad de la Justicia X Edición "Justicia más transparente" en la categoría de Órgano Judicial a los Cuadernos de Casación Tributaria por la iniciativa innovadora, necesaria y oportuna que contribuye poderosamente a proporcionar transparencia y seguridad jurídica en el ámbito del Derecho Administrativo y Tributario.

Profundizando en el análisis de las cinco resoluciones seleccionadas como de especial relevancia o significativa calidad técnica, en primer lugar, la magistrada González de Lara Mingo aporta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17/02/2011 (701/ 2009) en materia de impugnación de ordenanza, licencias de actividades y prestaciones patrimoniales.

La relevancia de la misma deriva de la calidad técnica del análisis del sistema de colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control, y de la prestación patrimonial que se imponía. La sentencia pasó el filtro del Alto Tribunal (STS de 10 de diciembre de 2013, rc. 2564/2011, confirmó la misma). Además, se trataba en aquel momento de una cuestión de máxima actualidad. En efecto, tras los problemas derivados del "Caso Guateque" el Ayuntamiento de Madrid, estableció un nuevo sistema para la gestión del control de licencias que daba entrada a la colaboración privada en el ámbito de la preparación de la solicitud de licencia. El nuevo sistema establecido por la Ordenanza imponía al particular que deseara obtener una licencia el deber de contratar con una Entidad Colaboradora en la Gestión de Licencias Urbanísticas, a la que debería pagar un precio por la emisión de "un certificado de conformidad". La STS de 10 de diciembre de 2013 confirmó la sentencia recurrida calificando de ejemplar la sentencia al realizar un análisis del carácter coactivo de las prestaciones que imponían al particular en la Ordenanza Municipal en el nuevo sistema de obtención de licencias de obras (FD Cuarto).

En segundo término, es destacable la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 07/02/2019 (447/2015) en materia de impuesto sobre la renta de no residentes sin establecimiento permanente.

La relevancia de la misma es, por una parte, su carácter novedoso, ya que hasta la fecha no se había dictado ninguna resolución por ningún tribunal español que analizara si los artículos 4 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en relación con los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), son aplicables a las relaciones entre Estados, en este caso, el Estado Español y el Banco Central de Noruega.

Por otro en que fue confirmada por la STS 24 de febrero de 2021 (recurso de casación n.º 3829/2019). En la misma línea sentencia de 2 de marzo de 2021 (recurso de casación núm. 3834/2019), por lo que la SAN ha contribuido al establecimiento de jurisprudencia sobre la retención y tributación de los dividendos o beneficios percibidos por las inversiones en mercados financieros españoles de los Fondos soberanos de inversión.

Además, la importancia de estas Sentencias radica en que el Norges Bank Investment Management (NBIM) es el vehículo inversor del fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, y el encargado de gestionar el fondo de pensiones de ese país. Estas sentencias han sido comentadas en la prensa económica y científica.

Por su parte, también es de gran relevancia la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 26/06/2018. (457/2017) en materia asilo, firme al no haber sido recurrida ni por el solicitante de asilo ni por el Abogado del Estado. La candidata nombrada fue ponente de 3 sentencias dictas el mismo día que aportaron la solución jurídica a un problema humano de primer orden, y cuyo criterio siguió el Consejo de Ministros regularizando la situación de un amplio número de solicitantes de asilo.

El problema de los solicitantes de asilo venezolanos llegó a la Sección 2ª de la Audiencia Nacional a través de los recursos nº 456/2017, 457/2017 y 417/2017. Las tres sentencias referidas fijaron un nuevo criterio en relación con los solicitantes de asilo provenientes de Venezuela, estimando, tras el análisis individualizado de las solicitudes, que, si bien no era procedente conceder el asilo, sí debía conceder residencia por razones humanitarias. Para llegar a esta conclusión se efectúa un detallado y acertado análisis de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, regula el derecho de asilo y protección subsidiaria, y de las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La sentencia efectúa un detallado análisis de los tres niveles de protección establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, regula el derecho de asilo y protección subsidiaria, y de las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Como señala la candidata nombrada, la sentencia encontró una solución a un problema que tenía en ese momento España y fue seguida por el Gobierno y aplaudida por ACNUR.

En cuarto lugar, hay que reseñar la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 02/12/2010 (1038/2007) sobre patente de productos farmacéuticos.

La Sentencia efectúa un detallado análisis de la evolución de la legislación española en materia de Patentes, e interpreta que el artículo 70. 7º del ADPIC no establece ningún plazo preclusivo, ni de la literalidad del mismo puede deducirse que determine que el momento final en que puede ejercerse el derecho a obtener la mayor protección finalice con la concesión de la patente europea para España. Una interpretación conjunta del párrafo 1º y 7º del citado artículo lleva a la conclusión contraria, el párrafo 7º establece el momento inicial en el que puede solicitarse la mayor protección, esto es para solicitudes en curso, pues las solicitudes ya concedidas se entienden como "actos realizados", que por otra parte también pueden obtener la mayor protección.

La Sentencia efectúa un detallado análisis en relación con la denegación de la petición de adición de nuevas reivindicaciones de producto a la Patente Europea de la evolución de la legislación española en materia de Patentes, e interpreta que el artículo 70. 7º del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

Fue recurrida y la STS 26 de mayo 2015 (rec. 2844/2011) declaró la pérdida sobrevenida de objeto.

Finalmente, se selecciona la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 03/03/2011 (206/2010) en materia de urbanismo. El TSJ era la última instancia en materia de interpretación de la normativa autonómica de urbanismo.

Realiza un profundo análisis de los 3 hitos o momentos en los que el paso del tiempo tiene influencia decisiva en la tramitación de los expedientes para el restablecimiento de la legalidad urbanística, y efectúa un detallado análisis del plazo de caducidad para el restablecimiento de la legalidad urbanística de 4 años, un segundo plazo de 6 meses para la tramitación del expediente, y un último plazo de prescripción para la ejecución de la orden de demolición.





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La excelencia jurisdiccional de la magistrada nombrada ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta tanto relación general como en la más acotada selección de estas, sino también en su convincente y fluida comparecencia ante la Comisión de Calificación que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

.- Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la relevante experiencia acumulada por la magistrada González de Lara Mingo en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden contencioso administrativo y en los órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que la candidata nombrada cuenta con una antigüedad en la Carrera Judicial de cerca de 34 años y en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo más de 26 años, todos ellos en órganos colegiados del orden contencioso-administrativo.

Sus destinos anteriores en el orden contencioso-administrativo fueron la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (nombramiento en propiedad 19/02/2018), adscripción a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional desde 01/06/2017), Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (art, 355 bis. 2) (28/03/2017 a 31/05/2017) y la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (30/09/1998 a 22/03/2017). Además, ha prestado servicios en el Tribunal Supremo como magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en diversos periodos en comisión de servicio y como letrada coordinadora del área civil (01/01/2024 a 30/06/2024) y letrada coordinadora del área contencioso-administrativo (01/06/2024 a la actualidad).

.- En el ámbito de sus actividades de colaboración con el CGPJ y otras instituciones, la magistrada nombrada ha sido tutora de alumnos en prácticas que habían superado las pruebas de especialización en contencioso-administrativo en el año 1999; presidenta del tribunal calificador de las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (2000); vocal de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado (2002) y para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración Especial Grupo A de la Comunidad de Madrid (2001). También ha sido Analista del CENDOJ (2013 y 2014)

.- Al margen de su actividad judicial, la magistrada González de Lara Mingo ha sido profesora de prácticum Universidad Autónoma de Madrid en los cursos académicos 2000/2001 y 2001/2002, profesora preparadora de oposiciones F.U. San Pablo CEU, en los cursos académicos 2000/2001, 2001/2002,



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005, tutora de prácticum en la Universidad Autónoma de Madrid en los cursos académicos 2018/2019 y 2020/2021 y tutora de prácticum en la Universidad Carlos III de Madrid en el curso académico 2020/2021. Ha sido ponente en 9 cursos organizados por el CGPJ, entre ellos en el *"Encuentro Jurídico-Tributario CGPJ-AEAT"* (EN23018), 2023, y ponente en 28 cursos organizados por otras instituciones públicas y privadas, entre ellos en la Mesa Redonda *"La litigiosidad de los impuestos"* organizada para el lanzamiento de la nueva Sección de Tax de la Asociación Women in a Legal World (2024) y en el curso *"Técnica Jurídica Casacional en el orden contencioso-administrativo"*, organizada por el Colegio de Abogados de Madrid (2024)

En este ámbito, hay que resaltar que ostenta la condición de magistrada especialista en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo desde 28/08/1998 con el número 38 de dicho escalafón especial, y que es autora de 5 obras colectivas y 76 artículos doctrinales. Entre los últimos, *"Régimen de recurso frente al decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutorio de la controversia sobre honorarios del Abogado por indebidos y cuenta del Procurador"*, en Actualidad Administrativa, Editorial Wolters Kluwer, 2019, *"Silencio negativo en materia de asilo. ¿Es contrario a la Directiva 2013/32/UE?"*, en Actualidad Administrativa, 2019 y *"Solicitudes de asilo de nacionales de Venezuela. Nuevo criterio. Actualidad Administrativa"*, 2019.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres que también es objeto de ponderación, hace que se observen en Sandra María González de Lara Mingo la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-49º.-** Examinada y debatida la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de Segundo Menéndez Pérez), el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Francisco José Sospedra Navas,



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

actualmente Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El acuerdo plenario se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado y en base a los criterios de ponderación establecidos en la base séptima de la convocatoria de la plaza.

.- En el candidato designado concurren méritos que ponen claramente de manifiesto sus aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción. La amplitud y calidad de sus conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la propia jurisdicción derivan, en primer término, no solo de la selección de las resoluciones judiciales de relevancia jurídica y significativa calidad técnica que realiza, sino también de la completa y bien sistematizada relación de resoluciones representativas de su trayectoria profesional que también facilita. En efecto se trata de 15 sentencias, algunas más recientes y otras de diferentes etapas profesionales, que presentan una relevancia jurídica por ser novedosas, o significar un cambio de criterio interpretativo del tribunal, o tener proyección en otras resoluciones dictadas por el propio u otros tribunales; o por responder a casos de especial complejidad jurídica.

En definitiva, tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

Profundizando en las cinco seleccionadas, en primer lugar se aporta Sentencia de la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21/03/2022 (62/2020), en materia de ordenanzas locales, zona de bajas emisiones y medio ambiente. Su relevancia se evidencia no solo en que fue revisada en casación y se desestimó el recurso por la STS de 2 de noviembre de 2023 (ROJ: STS 4853/2023 -ECLI:ES:TS:2023:4853), sino en que es la primera de las que se dictó en los recursos contra la Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de 2019.

La relevancia innegable de la misma se refleja en su gran repercusión social, en los medios de comunicación y en el ámbito jurídico, siendo objeto diferentes comentarios doctrinales. Se destaca la calidad sistemática y argumental en la línea interpretativa seguida tendente al reforzamiento del control jurisdiccional sobre la potestad reglamentaria, avalada por el TS. Los fundamentos de la Sentencia fueron asumidos en determinados aspectos por el propio Ayuntamiento de Barcelona, al promulgar la nueva Ordenanza de fecha 27 de enero de 2023. Ha tenido incidencia en la vigente regulación de las Zonas de Bajas Emisiones del Real Decreto 1052/2022. Ha tenido transcendencia



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

aplicativa posterior en otras ZBE, donde se aplica la interpretación avalada por el TS.

La Sentencia analiza exhaustivamente la impugnación de la Ordenanza. Destaca dos elementos clave a la hora de establecer limitaciones en las ZBE: (i) necesidad de valorar si las medidas adoptadas por motivos ambientales y de protección de la salud cumplen los requisitos de proporcionalidad, el cual debe ser el criterio esencial. (ii) estrechamente conectado con anterior, la exigencia de una especial motivación que en el caso no se cumplió.

En segundo término, destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 01/02/2021, (121/2021). La sentencia seleccionada resuelve la impugnación del aplazamiento electoral de las elecciones que habían de celebrarse el 14 de febrero de 2021, por la pandemia de COVID. La sentencia fue recurrida por ninguna de las partes, alcanzando firmeza.

La sentencia, con una clara trascendencia jurídico política, resuelve una cuestión totalmente novedosa sobre el control jurisdiccional de decisión de aplazamiento de elecciones en tiempo de pandemia, teniendo en cuenta que, diferencia de las precedentes elecciones gallegas y vascas, el marco normativo del estado alarma no contemplaba esta situación.

Desde una perspectiva material, la resolución efecto un exhaustivo análisis de contraste de la legislación electoral y de excepción, a nivel internacional, comparado e interno, delimitando los supuestos excepcionales que podrían dar lugar a un aplazamiento electoral con arreglo al marco normativo vigente. El proceso y la sentencia fueron objeto de comentarios doctrinales y numerosos artículos de opinión que ponen en valor casi unánimemente que una respuesta judicial adecuada a la complejidad del problema. Diferentes autores destacan asimismo que la sentencia debía dar una rápida respuesta, pero no por ello dejó de estar solventemente argumentada.

Por su parte la Sentencia de la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 21/09/2020 (107/2018) resuelve la controversia sobre la gestión del servicio de abastecimiento de del Ayuntamiento de Collbató mediante encargo a la sociedad GIACSA. Esta sentencia recurrida en casación por la parte demandada, que no fue admitida a trámite por el TS providencia de fecha 7 de octubre de 2021.

Se trata de un caso de encargo a medios propios de la gestión del servicio municipal de que planteaba cuestiones complejas por la articulación del mecanismo de cooperación horizontal y vertical del medio propio, pues a partir de una fórmula consorcial (consorcio CONGIAC) que se integra el



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Ayuntamiento, se contrata con la sociedad medio propio del Consorcio. sentencia ha sido objeto de diferentes comentarios doctrinales que destacan la relevancia análisis que se realiza en la sentencia de la figura de la "gestión directa asociativa mediante contratación in house". La sentencia analiza las dos fases sucesivas del encargo directo sin licitación: (i) cooperación horizontal, a través de la incorporación del Ayuntamiento a un consorcio, y (ii) cooperación vertical, al gestionarse del servicio por un medio propio del consorcio (sociedad GIACSA). dos elementos esenciales que determinan la anulación son la falta de fines asociativos y control conjunto análogo.

Se trata de un proceso y una resolución que trascienden del caso concreto, puesto muchos Ayuntamientos catalanes pequeños pertenecen al consorcio CONGIAC, habiéndose sucedido diferentes procesos donde se sigue aplicando esta doctrina (STSJ Cat, Scc. 5, 1774/2021; núm. 259/2024; y núm. 1431/2024).

En cuarto lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 09/11/2017 (382/2014), en materia de prestaciones patrimoniales de carácter público y tarifa de agua en alta. Esta sentencia es la primera de las dictadas sobre tarifa en alta en proceso de tramitación preferente. Al margen de su carácter novedoso, la resolución tiene avalada su calidad técnica al ser confirmada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sentencia de 28 de enero de 2020, Recurso núm. 835/2018 (ROJ: STS 229/2020 - ECLI:ES:TS:2020:229).

La cuestión relativa a la naturaleza de la tarifa de abastecimiento de agua en alta presentaba gran relevancia y, por su carácter litigioso, había sido objeto de pronunciamientos encontrados que se han sucedido en el tiempo. En el momento de dictarse la sentencia subsistía dicha controversia, la cual quedó despejada posteriormente, en el sentido recogido en la sentencia seleccionada, por la STS de 25/06/2019 (RC 5108/2017), en la que se modificaba postura que hasta dicho momento había mantenido sobre la naturaleza jurídica de la contraprestación por los servicios por prestación de determinados servicios públicos, dando noticia en la misma de las razones del cambio de criterio, lo que resulta avalado por la STS 28/01/2020, que confirma la sentencia seleccionada. Esta sentencia ha sido reproducida por la Sala en la resolución de los ulteriores recursos.

Finalmente, la Sentencia de la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18/11/2019 (232/2016), en materia de autonomía local. La Sentencia fue revisada y confirmada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que había apreciado interés casacional objetivo respecto de la consideración o no de norma básica 85.2 del ROF, desestimó el recurso, en Sentencia de la Sala Tercera 925/2021, de 28 de (ROJ: STS 2611/2021 -



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

ECLI:ES:TS:2021:2611).

La relevancia de esta resolución radica en que, a diferencia de la mayoría de asuntos, las operaciones lógicas y conclusivas que se realizan en la sentencia no son de mera aplicación práctica, ni siquiera de actividad interpretativa, si no que se lleva a cabo una función de calificación y determinación del carácter de la norma dentro del sistema de fuentes, cuestión que generalmente viene resuelta e incontrovertida al proceso contencioso-administrativo, que en este caso resultó ser la cuestión esencial para la resolución del recurso contencioso administrativo.

La línea mayoritaria plasmada en la sentencia parte de los aspectos materiales de lo básico y de la tipología de las normas, contrastadas con el contexto histórico y las corrientes doctrinales plasmadas en la doctrina constitucional, que resultan avaladas por interpretación de la Sala Tercera en la sentencia desestimatoria del recurso.

La sentencia declara la incompatibilidad del precepto de la Ordenanza del Ayuntamiento Barcelona impugnado con el artículo 85.2 ROF, al ser preeminente el último por su carácter básico y su afectación al modelo organizativo común previsto por el Estado, derivando la de su directa infracción, al implicar la disposición reglamentaria del Ayuntamiento una regulación completa sobre la materia que desplazaba la norma estatal preferente.

La extensión y profundidad del conocimiento de la legislación material y adjetiva del orden contencioso administrativo se desprende de los elencos general y más específico de resoluciones aportadas, pero también de la forma de explicación y exposición de las mismas en su exposición ante la Comisión de Calificación, en una ilustrativa y brillante exposición analítica en su comparecencia que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

.- Estas aptitudes, además, también se denotan en la trayectoria profesional y experiencia acumulada por el magistrado Sospedra Navas en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden contencioso administrativo y en los órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que el candidato nombrado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 08/02/1990, ostentando el número 907 del escalafón oficial de la categoría de magistrados. A fecha fin del plazo de presentación de instancias tiene reconocidos cerca de 35 años de antigüedad en la Carrera Judicial.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Su actividad jurisdiccional en órganos colegiados se ha desarrollado en cuatro etapas: Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Tarragona (desde mayo de 1996 hasta julio de 1999); en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (julio de 1999 a diciembre de 2008); en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Comunitat Valenciana (enero 2009 hasta octubre de 2011); y nuevamente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (octubre de 2015 hasta la actualidad). En la primera etapa, las resoluciones dictadas corresponden al orden penal, en tanto que en las demás etapas se corresponden con resoluciones dictadas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Hay que añadir a todo lo anterior que fue letrado del Tribunal Constitucional (2012 a 2015).

Después de todos estos años de destino en órganos colegiados, en el ejercicio de su actividad en esos tribunales ha dictado como ponente un elevado número de sentencias; así, en la base de datos del CENDOJ se recogen 6024 sentencias de las que ha sido ponente, de las cuales 5775 corresponden al orden contencioso-administrativo.

El Pleno entiende que esta experiencia acumulada en la Carrera Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados es suficiente para aportar también aptitudes de excelencia jurisdiccional.

.- Tal y como se establece en el apartado c) de la base séptima, tras la prioridad de los méritos relativos al ámbito estrictamente jurisdiccional, también se ponderan el desarrollo de actividades jurídicas llevadas a cabo en desempeños gubernativos o gubernativo-jurisdiccionales. Desde esta perspectiva gubernativa, el candidato nombrado fue Decano electivo de los Juzgados de Tarragona (1995 a 1996) y letrado del Consejo General del Poder Judicial (jeje de sección de Régimen Disciplinario) entre 2011 y 2012. Ha colaborado como analista del Cendoj desde 2021 y participó como experto en el Phare Twining Project BG.

.- Al margen de su actividad judicial, el candidato nombrado ejerció la abogacía (1988/89) y es abogado fiscal (1990, excedencia voluntaria).

Ha sido profesor tutor de la UNED (1990 a 1992), profesor de la Universidad de Tarragona (1996 a 2000), de la Universidad de Barcelona (1997 a 2001). Ponente en 13 cursos del CGPJ, entre ellos en el curso de Formación del CGPJ "Legislación estatal sobre el derecho a la vivienda. Aspectos jurídico-administrativos" con la ponencia: *"La incidencia de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, en el régimen sancionador en materia de vivienda"* (2024); y ponente en diversos cursos, jornadas y seminarios organizados por otras instituciones.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El magistrado Sospedra Navas es autor o coautor de 158 publicaciones jurídicas. Las últimas son "*Administración electrónica. La subsanación de las solicitudes defectuosas presentadas por vía telemática*", en La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, Nº. 10. 2024; "*Empleo público. Las retribuciones por turnos en periodos de vacaciones, bajas y permisos*", en La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, Nº. 9. 2024; y "*Vivienda. El conflicto constitucional de competencias de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Conflicto competencial. Zonas de mercado tensionado*", en La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, Nº. 9. 2024.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que también es objeto de ponderación, hace que se observen en Francisco José Sospedra Navas la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad.

**I-50º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno de especialistas (vacante de Ángel Ramón Arozamena Laso), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, se acuerda elevar a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a José Luis Gil Ibáñez, actualmente Presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, que posee una sobresaliente experiencia en el ejercicio de la jurisdicción en general y en el orden contencioso administrativo y sus órganos colegiados muy en particular.

.- En efecto, el magistrado Gil Ibáñez ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 29/03/1985, ostentando el número 197 del escalafón oficial de la categoría de magistrado. A fecha fin de presentación de instancias a la convocatoria tenía computados más de 39 años de antigüedad en la Carrera





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Judicial; de ellos, más de 36 años en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, todos en órganos colegiados. Sus destinos anteriores en el orden contencioso administrativo fueron los siguientes: Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (24/09/1992 a 12/09/1998), Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (art. 355 bis. 2) (19/04/1991 a 24/09/1992), Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (10/07/1989 a 12/04/1991), Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (23/05/1989 a 23/06/1989) y Audiencia Territorial de Barcelona Sala Segunda Contencioso-administrativo (19/09/1988 a 23/05/1989).

También hay que tener en cuenta sus servicios como letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el 29/04/2004 a 15/09/2007; y magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Información y Documentación del Tribunal Supremo) por vacante (08/11/2002-28/04/2004) y por refuerzo (29/06/2009-04/10/2010), en ambos supuestos en comisión de servicios.

La antigüedad del magistrado se proyecta igualmente sobre el tiempo de servicio en la especialidad, en la ostenta el número 5 del escalafón de especialistas en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, cuyo nombramiento data del 09/06/1989.

Esta prolongada y extensa trayectoria profesional, enriquecida con la experiencia en órganos judiciales con diversos ámbitos competenciales desde las perspectivas territorial, objetiva y funcional del orden contencioso administrativo, es el marco de una prolífica actividad jurisdiccional que destaca por su cantidad, calidad y rigor. En el CENDOJ, a fecha de la publicación de la convocatoria, figuran más de cuatro mil doscientas resoluciones judiciales de la ponencia del candidato nombrado, aportando al expediente de la provisión de la plaza un elenco más de medio centenar de resoluciones diferenciando las cinco seleccionadas según las bases de la convocatoria, de otras sentencias especialmente indicadoras de relevancia jurídica y significativa calidad técnica, de las reseñadas en las Memorias de Actividades de la Audiencia Nacional y, finalmente en el Fondo documental del Centro de Documentación Judicial.

.- Las cinco sentencias destacadas alcanzan la máxima ponderación: En primer lugar, la Sentencia de 09/07/2014 (ROJ: SAN 3477/2014 - ECLI:ES:AN:2014:3477. Recurso 657/2008). Como consecuencia del planteamiento de la cuestión de constitucionalidad de la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 7, letra b), de la Ley 39/2007, en relación con el mecanismo utilizado por el legislador para la incorporación en la nueva Escala de Oficiales de los antiguos Cuerpos de nivel inferior, en el que se prevé un curso de adaptación, la Sentencia confirma la resolución impugnada, al no haberse



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

producido infracción de los principios constitucionales de igualdad y de capacidad al acceso a la función pública.”

Por su parte, en la Sentencia de 11/03/2015 (ROJ: SAN 1046/2015 - ECLI:ES:AN:2015:1046. Recurso 195/2013), tras recoger los criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo, y partiendo de los hechos expuestos en la resolución impugnada, declara que, la denuncia del encargado del Centro Nacional de Inteligencia reúne las condiciones impuestas para considerarla suficientemente motivada, puesto que recoge datos suficientes de las actividades desarrolladas por el recurrente, llegando a poner algún ejemplo concreto, que, además, se ven corroboradas y completadas por el informe de la Brigada Provincial y que el informe de la Brigada Provincial de Información, completa el anterior añadiendo una pluralidad de datos concretos, con indicación de fecha y lugares. En la Sentencia se interpreta el art. 54.1.a) de la Ley orgánica 4/2000, a la luz de las directivas sobre la materia, concluyendo que, no ofrece ninguna dificultad calificar las actividades de colaboración con un servicio de inteligencia extranjero, según se relaciona por la Administración y con los fines que consigna, como amenaza real y suficientemente grave para la seguridad pública, en términos de la norma comunitaria, o de actividades contrarias a la seguridad nacional y que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, en los de la norma interna. Por ello, confirma la sanción impuesta, que además de estar motivada, guarda la proporcionalidad en los límites de la norma aplicada.

En tercer lugar, por la novedad y trascendencia, la Sentencia de 23/09/2015 (ROJ: SAN 3320/2015 - ECLI:ES:AN:2015:3320. Recurso 66/2014), en la que se analizan las reclamaciones de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial formuladas por tres actores, para el resarcimiento de los perjuicios que dicen ocasionados por la actuación del Banco de España en la salida a bolsa de la entidad Bankia, que sustentan los recurrentes por las minusvalías derivadas de la transmisión posterior de sus acciones de una entidad bancaria. En la Sentencia se exponen, en primer lugar, los requisitos jurisprudenciales que hacen viable la acción de responsabilidad patrimonial. En segundo lugar, se centra en la actuación del Banco de España, conforme a las normas que regulan dicha institución, a la hora de autorizar la salida a Bolsa de las acciones de Bankia, llegando a la conclusión que dicha entidad se limitó a actuar conforme a dicha legalidad, declarando que, no concurren los requisitos legales para el nacimiento de la responsabilidad del Banco de España y la consiguiente obligación reparadora del daño por el que reclaman los demandantes, pues, analizadas las actuaciones del demandado en relación con la salida de Bankia a bolsa, no se advierte en el análisis individualizado de las mismas que se ha hecho ni en su apreciación conjunta que sean la causa del perjuicio patrimonial sufrido por los actores, pues la suscripción y posterior transmisión de las acciones obedece a su libre decisión. Añade que no se entra en la cuestión



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

sobre las condiciones financieras de Bankia, al escapar de la actuación del Banco de España.

En cuarto término, la Sentencia de 05/12/2012 (ROJ: SAN 5116/2012 - ECLI:ES:AN:2012:5116. Recurso 565/2007). Expone el CENDOJ que "Hay que rechazar, señala la Sala, la traslación de las reglas procedimentales y sustantivas de la Ley 30/1992 a lo sujetos privados, sin perjuicio de que la responsabilidad de los mismos se exija en un proceso contencioso-administrativo, debiendo igualmente negarse la comunicación automática a esos mismo sujetos privados de la responsabilidad en que haya podido incurrir la Administración y viceversa, pues tiene que individualizarse en función de la actuación que cada uno haya realizado y analizarse sobre la base de los preceptos aplicables en los distintos casos. Es perfectamente factible condenar al abono de una indemnización a la entidad que ha concertado con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ya que la acción se ha dirigido contra ella, pero siempre y cuando se acredite la actuación negligente de los facultativos o de los centros sanitarios pertenecientes a su cuadro médico, a los que acudió el mutualista recurrente, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiera corresponderle o de la obligación de resarcimiento que incumba a entidades aseguradoras de posibles responsabilidades profesionales. Se rechaza la existencia de una mala praxis."

Finalmente, destaca la Sentencia de 01/12/2010 (ROJ: SAN 5432/2010 - ECLI:ES:AN:2010:5432. Recurso 555/2009). La cuestión relevante en la sentencia es la aplicabilidad del artículo 9.4 de la LOPJ. Con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2010, la Sala indica que para efectuar ese análisis hay un presupuesto previo e inexcusable, consistente en que la acción se dirija, además de contra la Administración, contra los sujetos privados, pues, de lo contrario, es decir, de realizar el examen y llegarse a una condena para estos últimos sujetos, pese a que no se haya formulado una pretensión contra ellos, se incurriría en incongruencia por exceso, vulnerándose lo ordenado por el artículo 33.1 de la Ley Jurisdiccional, cuando dispone que el juicio ha de realizarse dentro del límite de las pretensiones formuladas en el proceso.

La profundidad del conocimiento jurídico del candidato nombrado en el orden contencioso administrativo se evidencia igualmente en su exposición ante la Comisión de Calificación, en la que traslada a la misma con seguridad y precisión diversas consideraciones sobre las resoluciones aportadas y otros aspectos relacionados

.- El Pleno aprecia en el magistrado Gil Ibáñez las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se ven complementadas, por otra parte, y como criterio de ponderación adicional que marcan las bases de la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

convocatoria, por una notable experiencia gubernativa, al haber sido miembro electo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional (2009 a 2013). A este respecto, el candidato nombrado refiere un elenco de resoluciones gubernativas entre las que destaca la redacción de la propuesta de Informe sobre modificación del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

También aporta actividades de gestión judicial en su condición de presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en la que tuvo que resolver una pluralidad de cuestiones gubernativas, desde la organización interna de la Sección, efectuando los señalamientos correspondientes a cada integrante de la Sección, hasta otras diversas cuestiones, entre las que destaca la redacción de informes sobre error judicial en virtud de lo dispuesto en el artículo 293.1.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el "recurso de revisión por error judicial", como, por ejemplo, el de 24 de julio de 2017, en el recurso 292/2014 -por STS de 31 de mayo de 2018 (ROJ: STS 2207/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2207) se desestimó la solicitud de declaración de error judicial-.

En el ámbito de la colaboración con el CGPJ y otras instituciones, el candidato nombrado ha sido vocal de los tribunales de oposición al Cuerpo de Abogados del Estado (2011) y al Cuerpo de Letrados del CGPJ (2022), y vocal del calificador de las pruebas selectivas de especialización de Magistrado especialista en el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo (2000 y 2001) Director o coordinador de 9 cursos del CGPJ y otras instituciones y tutor de las promociones de Magistrados especialistas de lo Contencioso-Administrativo de los años 1992 y 1993.

.- Adicionalmente, al margen de sus méritos judiciales – jurisdiccionales y gubernativos – el perfil profesional del candidato nombrado se encuentra adornado por una prolífica actividad docente, discente y científica: Ha sido profesor asociado de la Universidad CEU San Pablo (1989/1990, 1993 a 1998), profesor del Centro de Estudios Jurídicos (1992 a 1998) y de la Escuela Judicial (1995/1996); ponente y conferenciante en más de 50 cursos, jornadas y seminarios organizados por el CGPJ y por otras instituciones. Entre ellos, ponencia *"Los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas con especial referencia al contrato de obras, suministro y servicios"*, en el curso *"Novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector públicos"*, organizado por la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, celebrado en Madrid (2018), ponencia *"Responsabilidad por aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea"* en el curso *"El anormal funcionamiento de la administración de justicia"*, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, en Salamanca



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

en 2018; y la ponencia "*Procedimiento abreviado, procedimientos especiales y Tribunal Supremo*", en el seminario "*Proceso Administrativo: procedimiento abreviado y procedimientos especiales*", organizado por la Universidad Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela (2019).

El magistrado Gil Ibáñez es Diploma de la Escuela de Práctica Jurídica, especialidad de Práctica Fiscal por la Universidad de Valladolid (1982) y Máster en Derecho Comunitario por la Universidad Carlos III (1992); autor 11 monografías, 39 obras colectivas y 43 artículos. Entre las primeras *Ley de Propiedad Intelectual. Concordancias, jurisprudencia, normas complementarias e índice analítico*. 3ª edición, Editorial Colex, A Coruña, 2018; *Ley de Arrendamientos Rústicos. Concordancias, jurisprudencia, índice analítico y legislación complementaria*. 7ª edición 2021-2022, Editorial Colex, A Coruña, 2021; *Ley de Contratos del Sector Público. Concordancias, jurisprudencia, índice analítico y normativa complementaria*. 4ª edición, Editorial Colex, A Coruña, 2022.

Por lo demás, en virtud de lo establecido en el artículo 17 «in fine» del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero de 2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, se realiza una remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión de Calificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 16 de la misma Norma reglamentaria.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en José Luis Gil Ibáñez la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno demérito o falta de consideración por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad.

**I-51º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno de especialistas (vacante de Juan Octavio Herrero Pina), y presentada por



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a Berta María Santillán Pedrosa, actual presidenta de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

.- El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, que posee una muy amplia experiencia en el ejercicio de la jurisdicción en general y en el orden contencioso administrativo y sus órganos colegiados en concreto.

En esta línea, hay que señalar que la candidata nombrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 30/09/1987, ostentando el número 382 del escalafón oficial de la categoría de magistradas. A fecha fin de presentación de instancias a la convocatoria tiene computados más de 37 años de antigüedad en la Carrera Judicial y más de 35 años en la categoría de magistrada. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo más de 32 años, todos ellos en órganos colegiados del mismo.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (29/07/1991 a 13/04/2015), Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño (27/12/1989-11/07/1991), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca (6/03/1989-7/12/1989) y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín (23/10/1987-15/02/1989).

También posee una muy notable antigüedad en la especialidad en el orden contencioso-administrativo, concretamente desde el 02/07/1991 siendo la núm. 13 del escalafón de especialistas.

.- Esta vasta experiencia en órgano colegiado del orden contencioso-administrativo, prácticamente desde los inicios de su actividad jurisdiccional, tiene fiel correspondencia en la prolífica actividad jurisdiccional en el orden, de cuya calidad y rigor es buen botón de muestra las resoluciones seleccionadas por la magistrada y aporta en la candidatura.

En la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden contencioso-administrativo, así como las habilidades jurídicas



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción, plasmadas en las resoluciones seleccionadas:

En primer lugar, presenta la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta, de 19/12/2019 (617/2015), en materia de defensa de la competencia (CNMV). En ella se analiza de forma detallada las características de la información intercambiada entre empresas competidoras -fabricantes de automóviles- a los efectos de su calificación como práctica concertada colusoria prohibida en el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o como práctica de benchmarking que implica eficiencia en el mercado como refiere el artículo 1.3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia; y también se estudia con profundidad la aplicación de las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, aprobados por la Comisión Europea (Comunicación 2011/C 11/01, de 14 de enero de 2011). La resolución fue recurrida: Auto de inadmisión del recurso de casación nº 7297/2021 dictado por el Tribunal Supremo en fecha 02/06/2021.

En segundo término, destaca la Sentencia del Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 10/12/2019 (337/2016), en materia de procedimiento especial para la garantía de la unidad de mercado. La relevancia de la misma deriva de haber pasado el filtro del Alto Tribunal (fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia dictada en fecha 30/06/2022; recurso de casación nº 2757/2022) junto a la consideración de que se trata de una cuestión jurídica novedosa y, a la vez, compleja.

La Sala y Sección de la magistrada Santillán Pedrosa tiene atribuida la competencia para examinar los recursos contencioso-administrativos que se interponen por los trámites del procedimiento especial para la garantía de la unidad de mercado. La complejidad de materia analizada es clara, pues implica el estudio del engarce de la aplicación del Derecho Comunitario con el orden constitucional de distribución de competencias: Estado-Comunidades Autónomas-Administración Local, en el caso concreto, un análisis del equilibrio entre la calidad en el uso residencial en las ciudades y el ejercicio de las actividades económicas de hostelería.

Por su parte, la Sentencia de la Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 01/07/2008 (553/2005) en materia de licitación de obras públicas. Es de una trascendencia social evidente, y se



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

refiere a la duplicación de la carretera M-501. La resolución fue confirmada por el Tribunal Supremo mediante sentencia dictada en fecha 24/05/2012. Recurso de casación nº 3594/2012).

Se examina ampliamente la normativa de Evaluación Ambiental estatal y autonómica. Se trata de un supuesto de conciliación de los intereses generales afectados por la duplicación de la carretera M-501: necesidad de la duplicación por ser una zona con tráfico intenso y con muchos accidentes de tráfico; y la necesidad de protección de la zona en cuanto que se trata de una Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) con un alto valor ecológico que, en fecha 19 de julio de 2006, se declara por la Comisión Europea como Lugar de Importancia Comunitaria. Se plantea la necesidad de consulta previa a la Comisión Europea; existe un defecto esencial determinante de nulidad de pleno derecho.

La Sala estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Consejería de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid por la que se hizo pública la adjudicación del contrato de duplicación de calzada de la carretera M-501, y se acuerda su nulidad porque se ha omitido un trámite esencial durante su tramitación que dirigir una consulta previa a la Comisión Europea exigido en el artículo 64 del RD 1997/1995.

En cuarto lugar, es relevante la Sentencia del Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta de Madrid, de 27/11/2023 (411/2019), en materia de impuestos estatales: IVA. Ha quedado firme porque ninguna de las partes interpuso recurso de casación.

Se trata de una cuestión jurídica compleja: Estudio de la teoría del conocimiento a los efectos de analizar si el obligado tributario conocía o debía conocer que estaba participando en operaciones de fraude en relación con el IVA. Se analiza la jurisprudencia del TJUE sobre la teoría del conocimiento, así como sobre las consecuencias que a los efectos de la deducción del IVA supone la participación en actividades fraudulentas y, especialmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de enero de 2021, Asunto C-4/20.

Finalmente, se destaca la Sentencia de la Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21/07/2009. (672/2007), en materia de disposiciones generales: decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El asunto es de gran trascendencia pues se analiza la competencia exclusiva del Estado en materia de educación no universitaria y de





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

la competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid para el desarrollo legislativo y de ejecución en materia educativa no universitaria, en relación con la diversidad de materias impugnadas propias del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.); se estudian los contenidos normativos básicos fijados por el Estado en la Ley Orgánica 2/2006, de 29 de mayo, de Educación; se examina la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el concepto de legislación básica; y se efectúa un análisis de la naturaleza del Decreto impugnado como reglamento no ejecutivo.

La extensa experiencia jurisdiccional de la magistrada nombrada ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas, sino también en la completa y brillante exposición analítica en su comparecencia que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

.- Al margen de su actividad judicial, la candidata nombrada ha sido profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III (1992 a 1994); vocal del tribunal selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado (1997), del tribunal de especialización en el orden C-A (2022) y del tribunal del cuarto turno (orden C-A, 2023). También es autora de diversas publicaciones jurídicas, entre ellas *"Control de convencionalidad de la ley en materia de derechos fundamentales: asunto Saquetti contra España"*, en Ley ante el control de europeidad y convencionalidad / Ricardo Alonso García y Juan Ignacio Ugartemendía Eceizabarrena (directores), 2023.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos en ponderación tanto individual y prioritaria de los mismos, como efectuada en conjunto, con respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad y observando la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres en la ponderación, conlleva claramente predicar de Berta María Santillán Pedrosa la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en un mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio o desconsideración por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-52º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno de especialistas (vacante de Inés Huerta Garicano), y defendida por la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Juan Pedro Quintana Carretero, actualmente Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Juan Pedro Quintana Carretero acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.

.- En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden contencioso-administrativo, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. Tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En primer lugar, presenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16/04/2024 (722/2001) en materia de expropiación forzosa.

En la misma se abordan varias cuestiones jurídicas controvertidas y muy relevantes en el ámbito de la expropiación forzosa.

Por otro lado, destaca la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de 03/06/2014 (486/2012). En materia de medio ambiente y declaración de impacto ambiental.

Su relevancia deviene no solo de haber pasado el filtro del Alto Tribunal (pues fue confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 2 de febrero de 2016, rec. 3152/2014) sino que reside fundamentalmente en la doctrina que fija sobre el alcance del control jurisdiccional de las declaraciones de impacto ambiental y sus efectos.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

En tercer lugar, la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de 17/02/2015 (333/2013), en materia de impugnación de disposición general y procedimiento de elaboración.

La sentencia fue confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, nº 166/2017, de 06/02/2017 (rec. 1397/2015). Aborda aspectos muy relevantes y de considerable dificultad técnica en materia de impugnación de disposiciones generales, su procedimiento de elaboración, la naturaleza del reglamento de desarrollo y ejecución y, también, sobre el dictamen del Consejo de Estado.

En cuarto término, se resalta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10/02/2023 (461/2020), en materia de urbanismo. Resuelve la impugnación de Modificación Puntual del PGOU de Madrid sobre la ordenación urbanística "Madrid Nuevo Norte", resolviendo cuestiones complejas y de enorme trascendencia social y urbanística.

Finalmente, sobresale la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29/10/2024 (2255/2021) en materia tributaria, IRPF, operaciones vinculadas, efecto preclusivo de una regularización tributaria practicada con anterioridad y método de valoración.

La extensa experiencia jurisdiccional del magistrado nombrado ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta tanto relación general como en la más acotada selección de estas, sino también en la brillante exposición analítica en su comparecencia que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

.- En definitiva, el Pleno aprecia en el candidato nombrado aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se derivan del conjunto de las resoluciones aportadas, así como de su intervención ante la Comisión de Calificación. Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la muy notable experiencia acumulada por el magistrado Quintana Carretero en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden contencioso administrativo y en los órganos colegiados del mismo.

El candidato nombrado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 14/10/1988, ostentando el número 674 del escalafón oficial de la categoría de



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

magistrado. A fecha de fin de presentación de instancias a la convocatoria contaba con más de 36 años en la Carrera Judicial y más de 34 años en la categoría de magistrado. Además, tiene una experiencia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de más de 28 años, todos ellos en órganos colegiados del orden contencioso-administrativo. Es especialista en el orden contencioso-administrativo, número 30 de este escalafón.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (16/12/2005-04/11/2016), Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (25/10/2002-11/12/2005), Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 (10/06/1999- 18/10/2002), Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (19/12/1996-21/05/1999), Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma de Mallorca (28/09/1990- 25/11/1996), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Aranda de Duero (02/01/1990-03/09/1990) y el Juzgado de Distrito de Aranda de Duero (7/11/1988-26/12/1989).

Fue Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (2004 a 2013), y aporta una memoria con informes de asistencia técnica de relevancia jurídica.

El Pleno considera que este tiempo de servicio en la Carrera Judicial, de ejercicio en destinos correspondientes al orden jurisdiccional contencioso administrativo y de servicio en sus órganos judiciales colegiados conlleva una experiencia acumulada en todos estos ámbitos de una entidad tal que aporta aptitudes de excelencia jurisdiccional (artículo 5 a), b) y c) del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales y bases tercera 1.1 y sexta b) de la convocatoria).

.- Junto a los méritos de excelencia y experiencia jurisdiccional, en tercer lugar también se valora que el candidato nombrado posee una muy relevante aptitud gubernativa. No en vano Juan Pedro Quintana Carretero es el Presidente de la Sala de Contencioso administrativo del TSJ de Madrid (2016 a 2024) y miembro de la Sala de Gobierno (2012 a 2024).

Ha sido analista del CENDOJ (2006 a 2019), director de 14 cursos del CGPJ. También miembro de tribunales de oposiciones de acceso a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocida competencia (4T, orden contencioso-administrativo, 2008 y 2010), al Cuerpo de Abogados del Estado (2014) y al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid (2023),



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

.- Al margen de su actividad judicial, el candidato nombrado es profesor de CUNEF (2014 a la actualidad), ha sido profesor de la EPJ de la Universidad de Navarra (1997 a 1999); ponente en más de 130 cursos del CGPJ y otras instituciones públicas y privadas. Entre ellos en el curso "La solución extrajudicial de conflictos y el derecho de la UE", CGPJ, 2022, o la ponencia "*La inmigración en la jurisdicción contencioso-administrativa*", en "Jornadas sobre inmigración" (2024). Asimismo, es autor de 70 publicaciones de carácter jurídico.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en Juan Pedro Quintana Carretero la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-53º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno de especialistas (vacante de María Isabel Perelló Doménech), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Miguel de los Santos Gandarillas Martos, actualmente Magistrado de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Miguel de los Santos Gandarillas Martos acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden contencioso-administrativo, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. La selección de las resoluciones jurisdiccionales demuestra por sí sola la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional. El candidato nombrado acompaña relación de hipervínculos de artículos, blogs profesionales y páginas web en las que las mismas han sido objeto de análisis y comentario, evidenciando su impacto doctrinal y en la comunidad jurídica.

En primer lugar, presenta la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior Justicia de Madrid, Sección Quinta, de 21/05/2007 (2094/2003), en materia de IRPF, rendimientos irregulares, redacción del art. 10.3 del RD 214/1999. La STS de 09/07/2008 (ROJ: STS 4069/2008 - ECLI:ES:TS:2008:4069), recurso: 5/2007, dictada en resolución de la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala de instancia, confirmó el criterio de la sentencia por el que se inaplicó el art. 10.3 del RD 214/1999 y declaró su ilegalidad por exceso reglamentario. La irregularidad se produce cuando entre la concesión y su ejercicio han transcurrido más de dos años, independientemente de que el contrato establezca un límite temporal mínimo para su ejercicio. Está determinada por el tiempo transcurrido entre la formalización del acuerdo y el ejercicio del derecho de opción; no resulta exigible el establecimiento de un límite temporal mínimo, la Ley no lo estableció. Este criterio se siguió, más tarde, en la sentencia de 11 de junio de 2007, rec. 1766/03, que reiteró los argumentos. La Sala planteó cuestión de ilegalidad.

La relevancia de la resolución está en la determinación de que la redacción del art. 10.3 del RD 214/1999, en relación con el 17.2.a) de la Ley 18/1991, incurrió en un exceso reglamentario: Introdujo ex novo una limitación no contemplada por la Ley para los rendimientos irregulares por periodo de generación superior a dos años, en los derechos de stock options. Ello, a su vez, supuso un cambio en la política retributiva de las empresas en las stock options y la reducción del su rendimiento irregular.

Por otra parte, también es relevante la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior Justicia de Madrid, Sección Quinta, de 17/04/2019 (866/2016) sobre el IRPF y el alcance de las consultas vinculantes, artícul. 89 LGT. No fue recurrida por la AT, pero fue acogida expresamente por el TEAC en su resolución de 11 de junio de 2020 (01483/2017) provocando un cambio de criterio en el órgano revisor.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Concluye la sentencia que la AT no puede apartarse del criterio fijado en la consulta en una posterior regularización singular. Prima el principio de seguridad jurídica frente al cambio de interpretación de la AT, y no puede argumentarse, como hizo el TEAC, cuya resolución se anula, que la única consecuencia es que el contribuyente no puede ser sancionado. La sentencia no entra a analizar las bondades o no de la liquidación por razones de seguridad jurídica y confianza legítima. No hubo cambio jurisprudencia ni legal previo que justificara la regularización practicada, frente a lo dicho por la reciente jurisprudencia. Tuvo relevancia e impacto en diversas revistas especializadas, publicaciones y blogs profesionales, tales como Expansión, Cinco Días, Garrido, Lexology, WoltersKluwer, Garrigues, ecétera. En esta línea, cabe destacar el artículo *«Las consultas tributarias y la doctrina del TEAC: eficacia temporal del cese de los efectos del carácter vinculante de las consultas y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Análisis de la SAN de 17 de abril de 2019, rec. núm. 866/2016»*, Félix Alberto Vega Borrego, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 440, 2019, entre otros.

En tercer lugar, hay que subrayar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior Justicia de Madrid, Sección Sexta, de 31/10/2019 (84/2016), en materia de IVA Materia IVA. Art. 140 de la LGT, operación de construcción y arrendamiento entre vinculadas. El recurso de casación 5400/2020 fue inadmitido por providencia de 22 de abril de 2021. La sentencia dio lugar al «Tercer Conflicto en Aplicación del art. 15 de la LGT», AEAT, con el que se pretendía la regularización de los sucesivos periodos impositivos del IVA, descartando la simulación, pero constatando la nueva calificación del conflicto.

La calificación debe hacerse a la vista de los datos que resultan del expediente administrativo y de la interpretación que ha de hacerse conforme a la jurisprudencia europea. No puede darse por bueno que la Administración acuda a la simulación, en un supuesto donde no concurre ningún viso de ocultación, falacia, mentira o falsedad. El criterio fue seguido SAN de 19 de febrero de 2021 - ROJ: SAN 514/2021 ECLI:ES:AN:2021:514, recurso 774/2017 o a 13 de octubre de 2020 - ROJ: SAN 2888/2020 ECLI:ES:AN:2020:2888, recurso: 232/2017, todas ellas firmes. Provocó un cambio de criterio del TEAC, recogido en su resolución de 15 de diciembre de 2020, núm. 00/04029/2017. Ha sido comentada, entre otras, en Lefebvre y en El diario.

Por su parte, también es trascendente la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior Justicia de Madrid, Sección Sexta, de 22/04/2021 (184/2017), sobre la CNMC y fijación de precios de medicamentos y conducta prohibida por el art. 1 de la LDC. La calidad técnica de la resolución



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

viene avalada al haber pasado el filtro del Alto Tribunal, pues fue íntegramente confirmada por la STS 7 de marzo de 2023(ROJ: STS 889/2023 - ECLI:ES:TS:2023:889), recurso: 7575/2021. Y fue comentada en diversos blogs y tribunas profesionales, entre ellas Cefi; Uría Menéndez; Confilegal.

Al filtro del Tribunal Supremo y a la relevancia en la comunidad jurídica, se une la complejidad del propio recurso, que radicaba en cuestiones formales y sustantivas. En las primeras, se valoró la legitimación de la actora frente a decisiones de la CNMC de no sancionar una conducta, y hasta donde podía la Sala suplir o desplazar la decisión en el ejercicio de una potestad punitiva residenciada en la Administración. Se apreció la extralimitación de la pretensión de la actora de anular los contratos de suministro de medicamentos por contravenir el art. 101 TFUE. En cuanto al fondo, se analizó el régimen jurídico. de fijación del precio de los medicamentos en España y su evolución; especialmente en lo que se refería a la dualidad de precios en función de su financiación pública o no. Se descarta la contravención del sistema legal de precios de los medicamentos en España en el marco de la Unión Europea. Se constató que el debate no coincidía con el caso Glaxo abordado por el TJUE, y se rechazó plantear cuestión prejudicial.

Finalmente, se aporta la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior Justicia de Madrid, Sección Sexta, de 27/12/2021 (234/2017), en materia de IVA y sujeción al impuesto en la cesión de vehículos de empresa a los trabajadores. También fue confirmada por el Tribunal Supremo (STS de 29 de enero de 2024 (ROJ: STS 538/2024 - ECLI:ES:TS:2024:538) recurso 5226/2022). Supuso un cambio de criterio en TEAC, 22-2-22, 00/03161/2019/00/00, y la publicación de la nota de la AEAT «cuestiones relativas a los vehículos de uso mixto cedidos a empleados.» Ha sido comentada en: CCS Abogados; El economista; Lefebvre; Cuatro Casas; FEMZ.

Considera la sentencia que la cesión de los vehículos por parte de la empresa recurrente a sus empleados no constituye una prestación onerosa de servicios, por la falta de prueba de la contraprestación económica por la cesión a cargo de los trabajadores. Implica la parcial estimación del recurso interpuesto. La conclusión es que no procede que la Administración Tributaria le exija a la actora que hiciera imputación alguna por el uso privativo de los vehículos al tratarse de cesiones no sujetas, ni que la empresa repercutiera el Impuesto a sus trabajadores por esta cesión. En consecuencia, no forman parte ni se integran en el cálculo de la regla de la prorata. A la vista del criterio seguido por la STJUE de 20 de enero de 2021 C-288/19, no se plantea cuestión prejudicial por la doctrina Cilfit.





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

De los varios motivos de regularización, el novedoso se centraba en la sujeción o no de la cesión de los vehículos de empresa al IVA, la deducción de las cuotas y la discordancia que provoca en el IRPF como retribuciones en especie. El análisis, ante la inconcreción del régimen doméstico, se aborda desde el concepto de prestación onerosa de servicio de la Directiva.

La extensa experiencia jurisdiccional del magistrado nombrado ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta, sino también en la clara y fluida exposición analítica en su comparecencia que ha permitido confirmar el dominio de la materia y los intensos conocimientos de la misma.

Estas aptitudes de excelencia jurisdiccional se ven también evidenciadas por la importante experiencia acumulada por el magistrado Miguel de los Santos Gandarillas Martos en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden contencioso administrativo y en los órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que el candidato nombrado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 21/03/1989, ostentando el número 791 del escalafón oficial de la categoría de magistrado. A fecha fin de la presentación de instancias a la convocatoria cuenta con más de 35 años de antigüedad en la Carrera Judicial. Es Magistrado especialista en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo desde 28/08/1998, fecha de su nombramiento, ostentando el número 33 del escalafón oficial especial.

Sus destinos anteriores en el orden contenciosos fueron los siguientes: Adscrito a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 01/01/2017 hasta 29/12/2017, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (art. 355 bis 2 del 18/04/2015 a 31/12/2016) y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (pruebas de especialización contencioso-administrativo, 30/09/1998 a 13/04/2015).

Además, el magistrado nombrado ha desempeñado comisiones de servicio por refuerzo en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo por refuerzo (información y documentación) (14/03/2011 a 30/09/2011; 01/10/2011 a 26/03/2012; y 27/03/2012 a 31/12/2014).

.- Desde una perspectiva de la gestión judicial y colaboración con el CGPJ y otras instituciones, hay que señalar que el magistrado Gandarillas ha sido Vocal



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

judicial en la Junta de Gobierno de MUGEJU (2002 a 2006), director de 5 cursos del CGPJ y más de 100 cursos organizados por FIDE. Es miembro del Consejo Académico de la Fundación del Derecho de Empresa (FIDE) desde 2008 a la actualidad, y Director en FIDE, área de fiscalidad.

Al margen de su actividad judicial, el magistrado Gandarillas Martos es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid en los años académicos (desde 2004 a la actualidad), profesor asociado del Instituto de Estudios Bursátiles (2018 a 2024), profesor del Máster de Asesoría fiscal, EPJ de la UCM (2021 a 2024); ejerció la docencia como preparador de oposiciones (desde 2015 a la actualidad); ha sido ponente en 37 cursos organizados por el CGPJ, o con participación de AECID, y más de 60 cursos FIDE y organizados por otras instituciones: Así, ponencia *"La respuesta judicial en el ámbito del Dº de la competencia"*, AECID-CGPJ, Cartagena de Indias, Colombia (2017) ó *"La protección de los consumidores y usuarios. Respuesta administrativa y judicial."* AECID-CGPJ, Montevideo, Uruguay (2018).

.- El candidato nombrado es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (2021); autor de 3 monografías, 16 obras colectivas y 13 artículos doctrinales. Entre sus libros destacan *"La ejecución de sentencias y resoluciones en el D..."*, Tirant lo Blanch, 2022 , ISBN 978-84-1130-412-2, y *"La tributación indirecta de valores sobre activos ..."*, Tirant lo Blanch (2010), ISBN 978-84-9876-643-1

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como las actividades de colaboración y gestión judicial, así como su vasta labor docente, distinguida actividad discente y prolífica creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en Miguel de los Santos Gandarillas Martos la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-54º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para la provisión



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

de la plaza de magistrado o magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda), el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Francisco Javier Pueyo Calleja, actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Tal y como exigen las bases de la convocatoria, deben ponderarse los méritos que ponen de manifiesto las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción expresadas en la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la propia jurisdicción, valorados a partir de las resoluciones aportadas o trabajos de asistencia técnica referidas en la base tercera y en la comparecencia realizada por la persona que opte a la plaza; la experiencia acumulada en la Carrera Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes de excelencia jurisdiccional; el desarrollo de actividades jurídicas llevadas a cabo en desempeños gubernativos o gubernativo-jurisdiccionales; y finalmente también se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las aptitudes de excelencia que sean útiles en la actividad gubernativa y el ejercicio de la jurisdicción.

Pues bien, atendiendo a los criterios de ponderación expuestos, tanto en el orden de su prelación individual como recogen las bases, como en una ponderación en conjunto, el Pleno considera que la trayectoria profesional de Francisco Javier Pueyo Calleja acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo, sin que ello suponga desmerecer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta.

.- Siguiendo el orden establecido, en la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden contencioso-administrativo, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. Tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En primer lugar, presenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30/10/2023 (396/2022), en materia de responsabilidad patrimonial del estado legislador y de la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

administración en daños en pandemia COVID-19. No fue recurrida por ninguna de las partes y devino firme.

No obstante, la doctrina en ella contenida fue refrendada posteriormente por el Tribunal Supremo en Sentencias de 31-10-2023 Rc 453/2022 (ROJ: STS 4431/2023 - ECLI:ES:TS:2023:4431) y 13-11-2023 Rc473/2022 (ROJ: STS 5062/2023 ECLI:ES:TS:2023:5062), entre otras. Su relevancia también deviene del profundo y minucioso análisis que se realiza de las SSTC sobre el estado de alarma y su repercusión en la responsabilidad patrimonial debatida; en este ámbito, se desemboca en un análisis más extenso que abarca la delegación de competencias del Estado en las CCAA, las propias competencias de la CCAA en materia sanitaria y su título de imputación a efectos de su legitimación pasiva; la legislación de emergencia y sanitaria a la luz de la Constitución y partiendo de la Jurisprudencia del TS profundiza y avanza la línea jurisprudencial a seguir en la delimitación de cada uno de los requisitos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador y Estado- Administración y su adaptación a las excepcionales medidas restrictivas de Derechos que se adoptaron en los distintos periodos de la pandemia en distintos sectores (en el presente caso, de hostelería).

En segundo lugar, se destaca un Auto del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 04711/2024 (9/2024) sobre la presentación de una cuestión inconstitucionalidad en materia de personal interino; estabilización; concurso; méritos. El Auto del TSJ de Navarra de 04/11/2024 planteando la cuestión de inconstitucionalidad (de la LF 16/2022 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de Secretarios e Interventores de la Administración Local) está pendiente de admisión por el TC. Se plantea la inconstitucionalidad del proceso selectivo de estabilización del empleo temporal por concurso de méritos (Ley Foral 16/22) desgranando los requisitos de tal acceso: que debe tratarse de un medio excepcional, que no puede ser consecuencia de las propias decisiones organizativas de la Administración y que debe hallarse prevista en una Ley con el objetivo de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima. Nada de esto parece justificado en la Ley. También se plantea la inconstitucionalidad de la puntuación del baremo de méritos por la sobrevaloración de la prestación de unas mismas funciones propias de un idéntico puesto dependiendo de que se hayan prestado en distintas Administraciones. Todo ello por ser contrario al principio de igualdad en el acceso a la función pública del art 23.2CE en relación con al art 103.3 (principio de mérito y capacidad). El auto desgrana de forma rigurosa y clara el régimen del personal interino a la luz del TJUE y del TC.

Por su parte, también es relevante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30/03/2007.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

(Núm. procedimiento 430/2006), en materia de recurso de casación en interés de ley; falta de resolución de alzada; sanción y su prescripción. No se recurrió, pero la doctrina en ella contenida fue refrendada posteriormente por el TS al resolver un recurso en interés de ley sobre Ley Estatal en STS de 22/09/2008, rec. 69/2005 (ROJ: STS 5152/2008 - ECLI:ES:TS:2008:5152) al interpretar la norma estatal.

Se trata de una Sentencia del 2007 resolviendo un recurso de casación en interés de ley autonómica, lo que evidencia la relevante experiencia del candidato nombrado resolviendo recursos de casación pues es miembro de la sección de casación del TSJ Navarra desde 1999. La doctrina que sienta refleja el criterio de aplicación, mutatis mutandis, al derecho sancionador administrativo de los principios que rigen en el derecho penal, en general y en particular el principio de presunción de inocencia, que impone la no ejecutividad de las sanciones hasta su firmeza en vía administrativa. Resuelve una cuestión que dio lugar a muy distintas interpretaciones judiciales y frecuente en la práctica procesal. Se concluye que la interposición de una alzada contra una sanción suspende su ejecución hasta que se resuelva el recurso, comenzando el cómputo de la prescripción cuando se produzca dicha resolución. El TS acogió esta doctrina en STS 22-9-2008, rec. 69/2005 ECLI:ES:TS:2008:5152

Sienta la siguiente doctrina: La interposición de un recurso de alzada contra una sanción administrativa suspende su ejecución hasta que se resuelva el recurso comenzando el cómputo del plazo de prescripción de la misma cuando se produzca dicha resolución. Esto es el reflejo de aplicar al derecho sancionador administrativo los principios que rigen en el derecho penal que impone la no ejecutividad de las sanciones hasta su firmeza en vía administrativa.

En cuarto lugar, el candidato nombrado aporta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 23/11/2021. (Núm. procedimiento 97/2020), en materia de complemento retributivo. Fue recurrida y confirmada íntegramente en sus propios términos por STS de 1-7-2024 (Rcas 1964/2022; ROJ: STS 3659/2024 - ECLI:ES:TS:2024:3659).

Se delimita el alcance de los derechos adquiridos en su relación con el valor de cosa juzgada de una Sentencia que reconoce un derecho (complemento retributivo) y los límites de la modificación legal posterior que suprime dicho complemento reconocido previamente. Aborda si es necesario acudir a la revisión de oficio del artículo 107.1 LPC declarando lesivo el acto administrativo que la Administración dictó en ejecución de aquella Sentencia y en su caso si pudiera estarse a una responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la supresión del complemento. Su relevancia radica no solo en la superación del filtro del Alto Tribunal, lo que acredita su calidad técnica, sino también en el



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

completo estudio sobre la aplicabilidad de la normativa básica estatal del EBEP en su proyección en la normativa navarra y el alcance de esa aplicación de la normativa estatal. Se Concluye que el artículo 87.3 del EBEP no tiene carácter básico en el marco jurídico de Navarra y se rechaza la responsabilidad patrimonial pues no existe un derecho adquirido.

Finalmente, también se destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30/11/2019, (159/2019) en materia de IVA. No fue recurrida por ninguna de las partes y devino firme. La Sentencia fue del Pleno de la Sala por unanimidad, estimatoria del recurso de apelación con revocación íntegra de la Sentencia de Instancia y estimación de la demanda.

Delimita las competencias y coordinación de las distintas Haciendas (Foral y Estatal) que confluyen en la exacción de un impuesto (IVA: caso de inversión del sujeto pasivo) y sus efectos en el contribuyente. Se señala que en casos en que distintas Haciendas discrepan de la competencia en orden a la tributación de un impuesto no puede hacerse recaer sus efectos en el contribuyente que ha cumplido todas sus obligaciones tributarias formales y sustantivas. Tales discrepancias competenciales deben resolverse interadministrativamente no siendo posible que la falta de coordinación administrativa suponga perjuicio alguno al contribuyente que ha cumplido todas sus obligaciones sustantivas y formales, por exigencia del principio de regularización tributaria íntegra, el principio de neutralidad impositiva y el principio de coordinación entre distintas Administraciones con competencias tributarias.

El rigor jurídico y la calidad técnica también es predicable de la completa relación de 52 resoluciones judiciales que el candidato nombrado aporta con resúmenes y comentarios en materia de casación autonómica, cuestiones de inconstitucionalidad, derechos fundamentales, responsabilidad patrimonial, Sanidad y farmacias, lenguas (uso del vascuence, procedimiento Administrativo, contratación administrativa, urbanismo, tributario, expropiación, régimen local y proceso contencioso administrativo. En esta línea, hay que reseñar que el magistrado Pueyo Calleja acredita haber dictado 4975 en los períodos comprendidos entre el año 1996 y 2024, conforme a los datos obrantes en la Estadística Judicial del Consejo.

La extensa experiencia jurisdiccional del magistrado nombrado ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta tanto relación general como en la más acotada selección de estas, sino también en la clara y fluida exposición analítica en su comparecencia que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

.- Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la notable experiencia acumulada por el magistrado Pueyo Calleja en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden contencioso administrativo y en los órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que el candidato nombrado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 09/07/1996, teniendo computados más de 28 años en la Carrera Judicial y más de 25 años en la categoría de magistrado; y a fecha del fin del plazo de presentación de ha servido en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y en sus órganos colegiados más de 25 años.

Sus anteriores destinos anteriores fueron la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (de 28/09/1999 a 13/01/2015) y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Mollet del Vallés (de 31/07/1996 a 21/09/1999).

Es magistrado especialista en el orden jurisdiccional contencioso administrativo desde el 27/08/1999, ostentando el número 45 en el escalafón de magistrados/as especialistas del orden contencioso administrativo.

.- En tercer lugar, también son objeto de ponderación las aptitudes gubernativas del candidato nombrado, que es el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Navarra (desde 2015 a la actualidad), miembro nato de la Sala de Gobierno del TSJ. Fue decano (partido judicial de Mollet del Vallés) entre 1997 y 1999. Presenta una completa relación de resoluciones gubernativas y otros relativo a una propuesta de potenciación del escrito de preparación en el recurso de casación.

El candidato nombrado también es miembro del Consejo Navarro de Justicia (2021 a la actualidad) y del Consejo Rector de la Escuela Judicial (2021 a la actualidad). Asimismo, ha sido director de 8 cursos del CGPJ, entre ellos "El nuevo recurso de casación Contencioso-Administrativo. Problemas de implantación y perspectivas de futuro" (CGPJ, 2017); y el Congreso "Magistrados Especialistas de lo Contencioso Administrativo. Retos organizativos, orgánicos y Jurisdiccionales de la Especialidad en el momento actual", en el Colegio de Abogados de Zaragoza (2022).

Al margen de su actividad judicial, el candidato nombrado ha sido profesor del Practicum de Derecho Procesal Contencioso (2000 a 2016) y del Máster en Derecho Digital (2023), ambos en la Universidad Pública de Navarra; preparador a las oposiciones de la Carrera Judicial y Fiscal (1999 a 2019); profesor del Máster Digital Law Business Tech de la Universidad de Granada (desde 2022 a la actualidad). También Ha sido ponente en cerca de 80 cursos, seminarios y jornadas organizados por el CGPJ y otras instituciones, públicas y privados. Entre ellos, en el Seminario Webinar "*Estado de Alarma y Derecho*



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

*Sancionador"* (CGPJ, 2020); en el curso *"Derechos Fundamentales en el Estado de Alarma Covid-19"*, Gobierno de Navarra, 2020; y ponente en el Seminario *"Cuestiones Procesales y Agenda 2030"* (CGPJ, 2022).

El magistrado nombrado es autor de 12 publicaciones jurídicas; entre ellas destacan su colaboración en la obra colectiva *El Derecho contra el Ruido*, Thomson Reuters (2013) y *"Ejecución y costas. La aplicación supletoria de la LEC en la Jurisdicción Contenciosa. ¿Es posible?"*, artículo doctrinal de la editorial SEPIN (2023).

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que también es objeto de ponderación, hace que se observen en Francisco Javier Pueyo Calleja la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-55º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, turno general (vacante de María Luisa Segoviano Astaburuaga), y presentada por la ponencia del procedimiento de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Rafael Antonio López Parada, actualmente Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Rafael Antonio López Parada acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.

En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

propias del orden social, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. Tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En primer término, aporta la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de 14/10/2015 (30/2014), en materia de tiempo de trabajo/grupo de empresas a efectos laborales. Se trata de una resolución de una gran relevancia: Se dicta en procedimiento en el que se elevó cuestión prejudicial ante el TJUE, del que también fue ponente el candidato nombrado, dictándose la sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2015 en el asunto C-266/14, Tyco Integrated Security, que estableció un criterio novedoso sobre el cómputo de tiempo de trabajo. Por otra parte hace un análisis detallado de los criterios sobre la determinación de la existencia de grupo laboral de empresas, hasta el detalle contable del cómputo de transacciones con partes vinculadas por su valor razonable o de mercado.

Se aborda un conflicto colectivo en el que se pide que se compute como tiempo de trabajo el desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo, porque los/as trabajadores/as no tienen un centro de trabajo fijo. También se pretende que se declare que las dos demandadas a forman un grupo laboral de empresas. La primera dio lugar a cuestión prejudicial. Se estiman ambas.

En segundo lugar, se destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, de Valladolid, de 13 junio 2018 (455/2016), en materia de prestaciones de Seguridad Social. Nuevamente muy trascendente: Se dicta en procedimiento en el que se elevó cuestión prejudicial ante el TJUE, del que también fue ponente el magistrado López Parada (ECLI:ES:TSJCL:2016:10A), dictándose la sentencia del TJUE de 15 de marzo de 2018 en el asunto C-431/16, Blanco Marqués, que obligó a que el Tribunal Supremo modificase su doctrina anterior, modificación que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo llevó a cabo a partir de su sentencia de pleno de 29 de junio de 2018 (rcud. 4102/2016).

En la sentencia se estableció la compatibilidad del complemento del 20% de la IPT para mayores de 55 años con las pensiones de jubilación de otros Estados europeos. También se hace un análisis detallado de los reglamentos de coordinación y además de los acuerdos UE-Confederación Helvética, aplicables al caso.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, de Valladolid, de 09/09/2019 (1805/2018) en materia de prestaciones de Seguridad Social, hecho causante de jubilación y periodo de carencia. Confirmada por STS, Social sección 1ª del 13 de junio de 2022 (ROJ: STS 2373/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2373). La pensión de jubilación exige una carencia de 15 años y 2 tienen que estar dentro de los 15 anteriores al hecho causante. Reglamentariamente el hecho causante en caso de no alta es la solicitud. El beneficiario deja pasar años sin solicitar la pensión y cuando la pide ya no tiene carencia específica. La sentencia establece la naturaleza imprescriptible del derecho; el hecho causante hay que retrotraerlo al momento en que pudo pedirla.

El criterio contradice en apariencia el tenor literal de la norma reglamentaria sobre el hecho causante en caso de acceso a jubilación desde situación de no alta, pero permite dar efectivo cumplimiento a la previsión legal de la naturaleza imprescriptible del derecho. La relevancia pasa no solo por haber pasado el filtro del Alto Tribunal. A la postre, dio lugar a la modificación del RD 453/22.

En cuarto lugar, hay que destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, de 11/07/2019 (1857/2017) en materia prestaciones de Seguridad Social y discriminación indirecta por razón de sexo, cuya relevancia es patente. Se dicta tras cuestión prejudicial nuevamente del candidato nombrado (ECLI:ES:TSJCL:2018:37A) que da lugar a la sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2019, asunto C-161/18, Villar Láiz. Tras la sentencia del TJUE el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el precepto cuestionado de la LGSS (STC 91/2019). Posteriormente todo el sistema se revisa para suprimir la discriminación en la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial por el Real Decreto-ley 2/2023.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, de Valladolid, de 28/04/2023 (1436/2022), en materia de audiencia previa al despido disciplinario; y prevalencia de los tratados internacionales. Una sentencia previa del TSJ de Illes Balears declaró aplicable la audiencia previa al despido exigida por el art 7 convenio 158 OIT, declarando un despido improcedente. La sentencia aportada analiza la prevalencia de los tratados internacionales y su evolución pero considera que la consecuencia no es la improcedencia sino una indemnización. La STS de 18/11/2024 (rec 4735/23) ha considerado exigible la audiencia previa pero no ha fijado las consecuencias, que deberá establecer posteriormente.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Además de las cinco sentencias seleccionadas y analizadas previamente, el candidato nombrado presenta una extensa relación de 32 resoluciones judiciales dictadas en su condición de ponente de órganos colegiados; otras 10 resoluciones dictadas como ponente en la Sala de lo Social del TSJ de Madrid; y 10 autos planteando cuestiones prejudiciales ante el TJUE. La calidad técnica y el rigor jurídico son también predicables de todas ellas.

La extensa experiencia jurisdiccional del magistrado nombrado ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta tanto relación general como en la más acotada selección de estas, sino también en la clara y fluida exposición analítica en su comparecencia que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

En definitiva, el Pleno aprecia en el candidato nombrado aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se derivan del conjunto de las resoluciones aportadas, así como de su intervención ante la Comisión de Calificación. Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la experiencia acumulada por el magistrado López Parada en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden social y en los órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que el candidato nombrado ingresó en la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocida competencia (4T) el día 15/12/2000. A fin de presentación de instancias a la convocatoria casi 24 años de antigüedad en Carrera Judicial, todos ellos en órganos colegiados del orden jurisdiccional social.

Es magistrado especialista en el orden jurisdiccional social, ostentando el número 15 en el escalafón de magistrados/as especialistas del orden social.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (05/11/2004 a 21/11/2019; desde el 05/11/2004 hasta el 03/07/2006 en el régimen previsto en el artículo 355 bis.2 y, a partir de esa fecha y hasta el cese, como titular), Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (07/10/2002 a 27/10/2004) y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas (9/01/2001 a 11/09/2002; desde el 9/01/2001 hasta el 9/04/2002, en el régimen previsto en el artículo 355 bis.2 y, a partir de esa fecha y hasta el cese, como titular).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Al margen de su actividad judicial, hay que destacar que el candidato nombrado, con anterioridad a ingresar en la Carrera Judicial por el denominado cuarto turno, ejerció como Inspector de Trabajo y Seguridad Social desde 1988 a 2001 (cuerpo al que pertenece y en el que se encuentra actualmente en excedencia).

Ha sido coordinador de 2 cursos del CGPJ; ponente y docente en 35 cursos, seminarios y jornadas del CGPJ. Tiene el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Valladolid (2001) y es autor de cerca de 50 publicaciones de carácter jurídico, de un predominante contenido socio laboral. Entre ellas, *"La coordinación de las normas antiacumulación nacionales en los Reglamentos Europeos de Seguridad Social: la exigencia de norma nacional expresa de efectos transfronterizos"* en Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social nº 142 (2019); y *"Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula quinta del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999"*, Ciudad del Trabajo núm. 28 (2020), Revista online de Editorial Bomarzo. También ha colaborado activamente en la edición periódica de Mementos de la Editorial Francis Lefebvre-El Derecho.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en Rafael Antonio López Parada la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-56º.-** Examinada y debatida la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, turno de especialistas (vacante de Jesús Gullón Rodríguez), el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Juan Martínez Moya, actualmente Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, que presenta una extensa trayectoria en la Carrera Judicial en general, y en el orden social en concreto. En efecto, el candidato nombrado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 14/10/1988, ostentando el número 661 del escalafón oficial de la categoría de magistrados. A fecha fin de presentación de instancias a la convocatoria tiene computados más de 36 años en la Carrera Judicial y más de 34 años en la categoría de magistrado. En el orden jurisdiccional social cerca de 26 años, 10 de los cuales en órganos colegiados del mismo orden.

Sus destinos anteriores fueron: Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y presidente de la Sala de lo Civil y Penal del citado tribunal (24/09/2004-06/03/2015), Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (25/07/2001-11/09/2004), Juzgado de lo Social número 3 de Murcia (10/12/1991 a 10/07/2001), Juzgado de lo Social número 5 de A Coruña (09/07/1990 a 18/11/1991), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villena (08/01/1990 a 19/06/1990) y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Peñarroya- Pueblo Nuevo (07/11/1988 a 20/12/1989).

Acredita la condición de magistrado especialista en el orden social desde el 15/06/2001, ostentando el número 13 del escalafón especial.

En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden social, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. La selección de resoluciones judiciales demuestra por sí sola la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En primer término, presenta una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Social, de 13/10/2023 (112/2023) en materia de despido disciplinario y acoso sexual. Despido disciplinario, se le imputa al demandante tocamientos no consentidos ("parte interna del muslo") a una compañera de trabajo. Grandes Almacenes (protocolos). Concepto de acoso sexual. En la sentencia de instancia se alude a que no había constancia de la intencionalidad sexual de dicho tocamiento.

La Sala combate el alcance de esa apreciación y confirma el despido procedente. La LOIEMH a diferencia de la Directiva 2006/54/CE que en su



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

artículo 2.1 d) contempla el doble elemento objetivo ofensivo y el subjetivo "no deseado", precisamente elimina de la definición de acoso el "no deseado". En el caso la Sala confirma que se dan los elementos definidores del acoso sexual, y en todo caso, de una ofensa física claramente atentatoria a la dignidad de una persona incompatible en un entorno laboral en el que además quien tiene ese comportamiento ostenta una categoría en la empresa superior al de la trabajadora, aunque no sea su superior jerárquico directo. Se produjo una conducta que difícilmente puede desvincularse de un contexto sexual.

En segundo término, la relevante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Social, de 08/02/2024 (629/2022) en materia de acceso al empleo e informes de los servicios de prevención sobre aptitud. Oferta de empleo para cubrir ocho plazas de soldador. El demandante superó las pruebas teóricas y psicotécnicas, pero fue declarado no apto en el reconocimiento médico. Aplicación doctrina jurisprudencial, (Sentencia TS - Social- ECLI:ES:TS:2022:1015) en orden a detectar situaciones de ineptitud sobrevenida, los informes de los servicios de prevención no constituyen por sí solo medio de prueba suficiente. Contextualización doctrina TJUE STJUE de 18 de enero de 2024 J. M. A. R. Y Ca Na Negreta, S. A., ECLI:EU:C:2024:53, que ha declarado que el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 (EDL 2000/90175).

La empresa, a través de sus servicios médicos de prevención, habrá de incorporar al trabajo a su puesto de soldador junior, tratándose de un trabajador especialmente sensible a determinados riesgos, está obligada a llevar a cabo las correspondientes evaluaciones de riesgos periódicas y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias (artículo 25 LPRL).

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Civil y Penal, de 26/09/2011 (1/2011), en materia malversación de caudales públicos, uso de mano de obra como caudal público. (Tribunal Supremo, Sala Penal, sentencia 5 de octubre de 2020 ECLI:ES:TS:2012:6767. Confirma. El material probatorio de cargo es copioso, plural y rico en contenido incriminatorio (numerosa documentación, extensos informes periciales y un importante número de testigos).

Se trata de una causa compleja. Corrupción. Aplicación de normativa laboral (transversalidad). Con relación al juicio de tipicidad del delito de malversación de caudales públicos, entra en juego la aplicación de normativa laboral: uso de mano de obra de la empresa pública para ejecución de tareas privadas; subidas



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

retributivas en los presupuestos al margen del convenio colectivo; y alteraciones del convenio colectivo de empresa para "ayudas gastos universitarios" establecía el derecho de los trabajadores de la empresa a percibir el 100% del importe de matrícula o gastos de inscripción tanto si se realizan en colegios estatales o privados.

En cuarto lugar, resalta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Social, de 29/10/1996 (1469/1995), en materia de contratas y subcontratas: responsabilidad solidaria en cadena. Ganó firmeza. La STS (Social) de 9 de julio de 2002 ECLI:ES:TS:2002:5101 abordó por primera vez una cuestión sobre responsabilidad solidaria en cadena en contratas, entendiendo que alcanza también a los eslabones inferiores. Consideró correcta la doctrina sentada por la Sala de lo Social del TSJ Murcia en esta sentencia frente a la sentencia recurrida de la Sala Social del TSJ Cataluña 23 de febrero de 2001,

La cuestión consistía en determinar del alcance subjetivo de la responsabilidad empresarial establecida en el art. 42 del ET. El TS por primera vez antes de la reforma de 2001, reconocía que la solución a dicha cuestión todavía no había sido abordada frontalmente por esta Sala en unificación de doctrina y resultaba especialmente problemática. Sienta como doctrina correcta la de la Sala de lo Social del TSJ que consideró que la responsabilidad legal solidaria dimanante del art. 42.2 del ET, no alcanza única y exclusivamente al empresario principal y subcontratista, sino también a otros eslabones intermedios que pueden aparecer.

Finalmente, se aporta la Sentencia del Juzgado de lo Social de Murcia, de 20/03/2000 (48/2000), en materia de libertad sindical; huelga; instalación de cámaras de video; indemnización. Confirmada por sentencia TSJ (Social) 4 de septiembre de 2000, ECLI:ES:TSJMU:2000:2450.

Como sostiene el candidato nombrado, es un asunto de gran complejidad (empresa de gran relevancia en el sector): Estructura formal de la sentencia (tanto con relación a los hechos probados y fundamentación jurídica) y contenido (permanente actualidad; tiene todos los ingredientes del derecho colectivo actual).

Libertad sindical: legitimación activa y pasiva: sindicatos; lesión del derecho: prohibición de entrada de un miembro del comité de huelga al centro de trabajo y de acceder a colocar información al tablón de anuncios. Huelga, contenido: lo integra el derecho a difundirla y a hacer publicidad pacífica de la misma;



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

servicios mínimos: participación del comité de huelga en su designación: alcance; existencia de medidas de vigilancia y control: cámaras de vídeo instaladas con ocasión de la huelga: vulneración; lesión: efectos: (fijación de indemnización por daño).

Representantes de los trabajadores: utilización de las horas disponibles: presunción de legalidad.

Se valora si lesionan el derecho de libertad sindical comportamientos de la empresa previos a la convocatoria de la huelga y durante la huelga. Se plantea demanda de tutela y la sentencia analiza diferentes cuestiones procesales (legitimación activa y pasiva, litispendencia, etc.) y distintos escenarios y conductas empresariales (instalación de cámaras de video con ocasión de la huelga; derecho de reunión y con relación a la huelga).

La extensa experiencia jurisdiccional del magistrado nombrado ha sido puesta de manifiesto no solo a través de las resoluciones documentadas y argumentadas que aporta tanto relación general – aporta certificado acreditativo de cerca de 7500 sentencias dictadas, aproximadamente la mitad en el orden social – como en la más acotada selección de estas sino también en la brillante exposición analítica en su comparecencia que ha permitido comprobar sus intensos conocimientos en la materia.

En definitiva, el Pleno aprecia en el candidato nombrado aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se derivan del conjunto de las resoluciones aportadas, así como de su intervención ante la Comisión de Calificación. Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la muy notable experiencia acumulada por el magistrado Martínez Moya en el ejercicio de la jurisdicción y en el orden social, como ya se ha expuesto.

El candidato acredita una muy relevante aptitud gubernativa, gran parte de la misma a través a la gestión judicial en materias propias del orden social. Así, ha sido Vocal del CGPJ (2013 a 2024): Miembro de las Comisiones Permanente, Asuntos Económicos y Disciplinaria; presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial y coordinador de la Cumbre Judicial Iberoamericana. También ha sido presidente del TSJ de la Región de Murcia entre 2004 a 2015, y de su Sala de Gobierno. Presenta una extensa relación de resoluciones gubernativas.





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Ha sido letrado del CGPJ (en el servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ), miembro de RDUE-Civil y vocal del tribunal calificador en la especialización en mercantil en varias anualidades.

Al margen de su actividad judicial, el magistrado Martínez Moya ha sido profesor asociado de la Universidad de Murcia entre 1999 y 2004, profesor tutor de la UNED (1990/91); director y/o ponente de 129 cursos, seminarios y jornadas organizados por el CGPJ, la gran mayoría en asuntos relacionados con el orden jurisdiccional social.

El magistrado Martínez Moya presenta una prolífica actividad científica: Es autor de 24 publicaciones en Cuadernos Digitales de Formación del CENDOJ (2001 a 2021); de 107 publicaciones recogidas en Dialnet (1998-2024), concretamente 58 artículos en revistas, 44 colaboraciones obras colectivas y 7 monografías (y 1 coordinación), de un predominante contenido socio laboral; de 78 publicaciones en la Revista de Jurisprudencia El Derecho, Editorial Lefebvre Colaboraciones periódicas desde 2006 hasta la fecha 2024 en la Revista Jurisprudencia (Foro abierto Social); y autor de 9 colaboraciones en libros Aranzadi-La Ley.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en Juan Martínez Moya la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-57º.-** Examinada y debatida la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, turno general (vacante de Ricardo Bodas Martín), el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a Isabel Olmos Parés, actualmente Sala de lo



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde tomó posesión el 23/02/2007.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Isabel Olmos Parés acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrada del Tribunal Supremo.

.- En la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden social, así como las habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción. Tanto la selección general de 26 resoluciones jurisdiccionales resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional. En relación con las primeras, su relevancia se evidencia de los propios criterios elegidos para su selección tanto en la base de datos del Cendoj (esencialmente innovación), como en la de Aranzadi Instituciones con resoluciones de 3 a 5 estrellas.

En esta línea, la magistrada Olmos Parés acredita un total de 10.782 sentencias laborales a lo largo de su carrera profesional: 2.943 sentencias en el juzgado de lo social núm. 2 de Ferrol; 2.826 sentencias en el juzgado de lo social núm. 1 de A Coruña; y 5.013 sentencias en la Sala de lo Social del TSJ de Galicia (además de 170 autos en la referida Sala).

Respecto a las cinco resoluciones seleccionadas, la trascendencia de las mismas se explica en los siguientes términos:

En primer lugar, se aportan dos resoluciones judiciales de gran relevancia por su materia y el planteamiento de cuestiones prejudiciales: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, de 12/11/2010 (5429/20059), en materia de discriminación por razón de sexo; permiso de lactancia; trabajador por cuenta ajena. Es firme, no fue recurrida.

En la fecha de petición del permiso de lactancia, el ET solo lo reconocía a las madres trabajadoras, siendo el actor un trabajador varón. La Sala planteó cuestión prejudicial, por Auto de 13-2-2009, que fue resuelta por el TJUE,



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

previa las Conclusiones de la Abogada General, en STJUE 30-9-2010, C-104/2009, concluyendo que la normativa española era contraria a la entonces Directiva 76/207/CE, que proscribía la discriminación por razón de sexo, salvo por causa objetiva como podía ser un hecho biológico ligado a la mujer. La sentencia de Galicia reconoció así el derecho al demandante varón y obligó a un cambio legislativo. El ET fue reformado y, en la actualidad, reconoce el permiso de lactancia sin distinción por razón de sexo.

La cuestión prejudicial planteada por Auto de 13/02/2009 analizaba el hecho de que el permiso de lactancia se hallaba desvinculado del hecho biológico de la madre, dado que se concedía igualmente en caso de lactancia artificial, así como algunos convenios colectivos ya permitían entonces la acumulación de esas ausencias (media hora o una hora diaria) en jornadas completas.

Por otro lado, se destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, de 03/04/2018 (2225/2017) en materia de libertad de circulación de trabajadores migrantes y pensión de jubilación. Es firme, no fue recurrida.

La sentencia fue dictada previo el planteamiento de cuestión prejudicial mediante Auto de 30 de noviembre de 2017, que dio lugar al asunto C-7/18, preguntando al TJUE si no se vulneraba la libertad de circulación, ya que el INSS no tuvo en cuenta lo percibido en Alemania por jubilación, de modo que su pensión española (a prorrata) era inferior a la cuantía mínima española para mayores de 65 años, lo que según la LGSS impide anticipar la jubilación. Hacía de peor derecho al actor respecto de otro beneficiario que sin moverse de España percibiera por jubilación un importe total igual a las 2 pensiones percibidas por él, la de España y la alemana. Antes de que el TJUE dictase sentencia, el INSS, demandado se allanó a la demanda y, la Sala dictó sentencia estimando las pretensiones del actor por STSJ de Galicia de 3 de abril de 2018. El TJUE dictó Auto de 26-4-18, archivando la cuestión.

En tercer lugar, se aporta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, de 12/09/2024 (3075/2024), en materia tutela de derechos fundamentales y acoso moral. Es firme, no fue recurrida. La relevancia de la sentencia radica en que analiza el concepto de acoso moral en un caso en el que la conducta imputada a la empresa, a través de una encargada, y se trataba de *un acto aislado*, no acreditándose una situación de hostigamiento reiterado. Se revisa el concepto de acoso en base a la STC 56/2019 y la Ley 15/2022, para hacer una distinción entre el acoso por conductas reiteradas y el acoso por conductas esporádicas, pero graves.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

También se resalta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, de 10/07/2024 (2487/2024) en materia derechos fundamentales y discriminación por razón de discapacidad. Es firme, no fue recurrida.

La relevancia de la resolución se aprecia en el *análisis de los ajustes razonables*, concepto indeterminado de difícil concreción, sobre todo en relación a las necesidades organizativas de la empresa. En este caso, la sentencia considera que los ajustes razonables no pueden denegarse por razones o intereses organizativas causadas por la propia empresa que tuvo oportunidad de adaptar el puesto de trabajo antes de que resultara perjudicial para otros trabajadores, es decir, atiende al momento temporal en el que pudieron realizarse los ajustes, lo que incide en la ponderación.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, de 11/07/2019 (2146/2019) tiene trascendencia en el ámbito sensible de la intimidad y protección de datos. Es firme, no fue recurrida. La sentencia analiza la licitud de una prueba de grabación que la empresa utilizó para despedir, cuando la trabajadora no había recibido la información previa y precisa de que las cámaras podían ser utilizadas para ejercer esa facultad sancionatoria, sino solo para la vigilancia del local abierto al público.

.- En definitiva, el Pleno aprecia en la candidata nombrada evidentes aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se derivan del conjunto de las resoluciones aportadas, así como de su fluida y convincente intervención ante la Comisión de Calificación. Estas aptitudes, además, se ven reforzadas por la muy notable experiencia acumulada por la magistrada Olmos Parés en el ejercicio de la jurisdicción, en el orden social y en los órganos colegiados del mismo.

En esta línea, hay que señalar que la candidata nombrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 19/02/1991. A fecha de fin de presentación de instancias a la convocatoria tiene computados más de 33 años de antigüedad en la Carrera Judicial. De ellos, más de 29 años en el orden jurisdiccional social y más de 17 años en órganos colegiados del mismo.

Es especialista en el orden social desde el 02/02/2007, ostentando el número 20 del escalafón de magistradas especialistas del orden social.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Sant Boi de Llobregat (13/03/1991-17/09/1992), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Carballo (05/10/1992-07/10/1994), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Manresa (27/10/1994-27/12/1995), Juzgado de lo Social núm. 2 de Ferrol (09/01/1996-09/04/2002) y el Juzgado de lo Social núm. 1 de A Coruña (29/04/2002-19/02/2007).

En los periodos comprendidos entre el 01/09/2010 y el 28/02/2011, y 01/07/2011 y el 31/01/2012, así como por acuerdo de 27/10/2014, desempeñó comisiones de servicio sin relevación de funciones para reforzar la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Así mismo, en los periodos comprendidos entre el 04/09/2023 y el 30/06/2024 desempeñó comisión de servicio con relevación de funciones en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

.- Desde una perspectiva gubernativa, la candidata nombrada fue decana de los Juzgados de Carballo (1992 a 1994).

En su faceta de colaboración con el CGPJ y otras instituciones, ha sido presidenta de la Juntas Electoral de Carballo (1993 y 1994), vocal de la Junta Electoral de Galicia (2009 a 2013), vocal del tribunal calificador al Parlamento gallego (2013) y directora de 4 cursos del CGPJ.

.- Al margen de su actividad judicial, la magistrada Isabel Olmos Parés es doctora en Derecho (2015) y, como ya se ha recogido, especialista en el orden social desde el 02/02/2007. Ha sido docente en el Máster Práctico de la ERLAC-UDC desde 2017, ponente y conferenciante en más de 60 cursos, seminarios y jornadas organizadas por el CGPJ y varias institucionales; y es autora de una treintena de publicaciones de carácter jurídico.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que también es objeto de ponderación, hace que se observen en Isabel Olmos Parés la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en mayor medida que las personas propuestas pero no



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-58º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, turno general (vacante de María Lourdes Arastey Sahún), y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actualmente director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo desde 2018.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Juan Manuel San Cristóbal Villanueva acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.

.- En esta línea, comenzando por la experiencia acumulada en la Carrera Judicial, en el orden social y sus órganos colegiados, hay que señalar que el candidato nombrado ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 14/10/1988, ostentando el número 657 del escalafón oficial de la categoría de magistrados. A fecha de fin de presentación de instancias a la convocatoria tiene computados más de 36 años en la Carrera Judicial y más de 34 años en la categoría de magistrado. En el orden jurisdiccional social tiene una experiencia acumulada de más de 34 años de servicio y cerca de 7 años en órganos colegiados del mismo.

Sus destinos anteriores en el orden social fueron los siguientes: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla (02/05/2018-15/09/2022) y Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid (04/07/1990-18/04/2018).

Como ya se ha apuntado, ha sido Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (2004 a 2018) y es el actual director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo desde 2018.

El Pleno considera que este tiempo de servicio en la Carrera Judicial, de ejercicio en destinos correspondientes al orden jurisdiccional social y de servicio en sus órganos judiciales colegiados conlleva una experiencia acumulada en



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

todos estos ámbitos de una entidad tal que aporta aptitudes de excelencia jurisdiccional (artículo 5 a), b) y c) del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales y bases tercera 1.1 y sexta b) de la convocatoria, en relación con los artículos 61 quinquies.3 y 354.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

.- En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden social, así como el grado de excelencia jurisdiccional acreditado a partir de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica y los trabajos de especial relevancia jurídica elaborados en su actividad de asistencia técnica a la actividad jurisdiccional del Tribunal Supremo, en los términos señalados en las bases segunda, tercera y sexta de la convocatoria.

La selección de resoluciones jurisdiccionales y trabajos de asistencia técnica a la estricta actividad jurisdiccional del Tribunal Supremo, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que queda comprendido dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En primer término, presenta un informe/borrador de sentencia que se efectuó por el magistrado nombrado a petición expresa del ponente (Sr. Salinas) y de la Sala, con el fin de disponer esta antes de la deliberación, de una guía de razonamientos jurídicos y jurisprudencia europea aplicable que centrarse la cuestión debatida. La Sentencia que finalmente dictó la Sala, de fecha 30/12/2013, en lo tocante al fondo del asunto, es *esencialmente coincidente con el borrador propuesto y en muchos de sus pasajes, transcripción literal de éste* (FD cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la sentencia. Fecha resolución 30/12/2013. Número procedimiento 930/2013. Materia ECLI:ES:TS:2013:6664).

El informe/borrador de resolución aborda un complejo problema de competencia judicial internacional en el caso del despido de un trabajador español de una línea aérea irlandesa, haciendo repaso de la jurisprudencia de la Sala sobre la materia y de la normativa aplicable, en particular del Reglamento CE 44/2001, alcanzando la conclusión de que el recurso debe ser estimado, por no ser competentes los tribunales españoles de lo social.

En segundo lugar, aporta un relevante informe/borrador de sentencia. Informe/borrador del FD 7º para esa sentencia del Pleno que se efectuó por el magistrado del Gabinete Técnico a petición expresa del ponente y presidente de Sala (Sr. Gullón), con el fin de disponer de una guía de razonamientos jurídicos y jurisprudencia aplicable sobre la cuestión debatida, que en ese punto se centraba en el complejo problema de si era necesario consignar los salarios de tramitación en el caso de un despido colectivo declarado nulo. La Sentencia que



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

dictó la Sala, es, en ese FD, *esencialmente coincidente con el borrador propuesto y transcripción literal de éste*. Esa concreta cuestión procesal fue objeto de numerosos artículos doctrinales elogiando la gran calidad técnica de la decisión (puede verse por ejemplo: Eduardo Rojo Torrecilla en <http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/02/despidos-colectivos-ejecucion-de.html>, o Aurelio Desdentado en *"Reflexiones sobre el caso Coca Cola"*).

Como señala el magistrado San Cristóbal Villanueva, la sentencia del Pleno aborda uno de los despidos colectivos más complejos que ha tenido que afrontar la Sala, con un voto particular de cuatro magistrados. Una de las cuestiones procesales clave era la ya referida sobre los salarios de trámite. Tras un estudio detallado de la evolución normativa, en el informe elaborado se concluye la necesaria consignación de aquellos. Número procedimiento 354/2014, 20/04/2015. Materia DESPIDO COLECTIVO (COCA- COLA).

En tercer lugar, aporta un Informe/borrador de sentencia en materia de tratamiento en el Rcd de las infracciones procesales. La Sala Cuarta mantenía incólume una doctrina establecida en sentencias de Pleno de 2003 sobre el tratamiento procesal en el Rcd de los motivos basados en infracciones procesales. El ahora candidato nombrado, tras un estudio detallado de las posibles disfunciones de esa doctrina, elaboró el 31/01/2015 un informe al respecto (vid. Memoria) que elevó a la Sala y fue invitado a defenderlo ante el Pleno de la Sala Cuarta. El Pleno asumió el criterio propuesto y ello supuso un cambio radical en el tratamiento de esas infracciones a partir de ese momento, elaborando un Acuerdo No jurisdiccional al respecto, sujetándose las posteriores resoluciones de la Sala a ese nuevo criterio, siendo un ejemplo la STS reseñada en esta ficha.

04 mayo 2015. Número procedimiento 1384/2014

El informe hace un detallado repaso de la jurisprudencia de la sala y de las disfunciones detectadas, proponiendo una nueva dogmática en la estructura del Rcd cuando de infracciones procesales se trata, en particular terminando con la exigencia de identidad en la "acción sustantiva" y con el rechazo de la tesis de que exigía que las sentencias incongruentes contuviesen doctrina sobre esa irregularidad.

Por su parte, también se resalta el informe/borrador de sentencia, de fecha 02/04/2021 (número procedimiento 2740/2018), en materia despido e inmunidad de jurisdicción. Elaboración de un informe sobre la Inmunidad de Jurisdicción para el apoyo a esa sentencia, que acaba declarando la competencia de la jurisdicción española para conocer de una demanda por despido formulada por una trabajadora, que prestó servicios en la EUIPO, analizando la inmunidad de jurisdicción. La Presidenta de la Sala y ponente (Sra. Segoviano) solicitó al magistrado San Cristóbal Villanueva un estudio





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

sobre esta materia en la Jurisprudencia del TEDH, que luego fue asumido por toda la Sala y reproducido de forma prácticamente literal en el FD 7º de esa resolución.

La sentencia basa su decisión en lo dispuesto en el artículo 25 de la LOPJ en relación con LO 16/2015 art. 35, toda vez que dichos contratos se suscribieron por empresas domiciliadas en España, sin que dicha conclusión pueda enervarse por la inmunidad disfrutada por la EUIPO, toda vez que la misma solo opera respecto a sus actividades oficiales, lo que no concurre en este caso. Se hace un detallado repaso de la doctrina del TEDH al respecto.

Finalmente, se aporta una relevante Sentencia del Juzgado Social 19 de Madrid, de 30/09/1999 (379/1999), en materia de despido y resolución de contrato acumulada de los 250 trabajadores de la clínica NSL STSJ, Madrid. Social sección 2 del 05 de diciembre de 2000 (ROJ: STSJ M 14841/2000 - ECLI:ES:TSJM:2000:14841 ), confirmatoria.

Al margen de la evidente trascendencia social de la misma y de su calidad técnica – pasó el filtro del Alto Tribunal - se aborda en esta sentencia un complejo litigio (acumulación de acciones, empresa en quiebra que solicitó de la autoridad laboral la extinción de los contratos y le fue denegada, despido tácito, y responsabilidad de otra empresa en un proceso de ingeniería sucesoria), que afectó a todos los trabajadores de la Clínica Nuestra Señora de Loreto de Madrid (250 trabajadores) que accionaron por despido y acumuladamente por Resolución de contrato. Hubo de celebrarse en el Salón de actos de los juzgados de lo social de Madrid, dado el número de intervinientes y la expectación pública que causó.

En la citada sentencia se efectúa un cuidadoso análisis de las numerosas excepciones planteadas, los problemas de la acumulación de acciones y en cuanto al fondo se afronta el problema más complejo: la responsabilidad solidaria o no de la codemandada, procediendo al estudio de la figura del grupo de empresas, en un proceso -formalmente correcto, pero al fin y a la postre fraudulento- de descapitalización de la empresa.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprecia en el candidato nombrado innegables aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se derivan del conjunto de cuatro de informes/borradores de sentencias y de la sentencia aportados, todos ellos de especial relevancia jurídica. La resolución jurisdiccional, que es de especial relevancia jurídica y significativa calidad técnica es objeto de valoración según prescriben las bases segunda, tercera y sexta a) de la convocatoria, en relación con el artículo 5 d) del Reglamento 1/2010. Además, los informes borradores de sentencias también son valorados en atención a lo prescrito en las bases segunda y sexta a) pues



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

son trabajos de especial relevancia jurídica que el candidato nombrado ha elaborado en su concreta actividad de asistencia técnica a la actividad jurisdiccional del Tribunal Supremo. A este respecto, el candidato nombrado aporta certificados firmados por varios presidentes de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y del Vicepresidente del Alto Tribunal en los que se especifica que, dentro de elenco de funciones como director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, constan concretamente las de elaboración de proyectos de resoluciones y de borradores de fundamentos jurídicos de las Sentencias. Además, en los referidos certificados se añaden que ha ejercido y ejerce esas funciones a la máxima satisfacción de las presidencias de la Sala Cuarta y de la propia Sala.

Pero las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción no solo se aprecian de la resolución judicial dictada en el ejercicio estricto de la función jurisdiccional; de la actividad de asistencia técnica a la actividad estrictamente jurisdiccional del Tribunal Supremo; y de la experiencia acumulada en el servicio en la Carrera Judicial, en los servicios en el orden jurisdiccional social y en los órganos colegiados del mismo; sino que también deviene indudablemente de la brillantez de la exposición del candidato nombrado ante la Comisión de Calificación (bases cuarta y sexta a) de la convocatoria), en la que de forma clara, segura y fluida expone la que fue su labor en el Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid (1990 a 2004), con dictado de aproximadamente siete mil sentencias de un máximo nivel de excelencia (el candidato nombrado acredita documentalmente que los Abogados Laboralistas de la capital le evaluaron en las encuestas anuales que hacían como uno de los mejores magistrados, por calidad técnica, dirección del proceso, entre otros); también expone los análisis y trabajos de asistencia técnica a la actividad estrictamente jurisdiccional del Tribunal Supremo, bien en casos concretos bien con carácter general dando lugar, entre otros, a un acuerdo del Pleno no jurisdiccional tras la defensa de asunto ante la propia Sala.

.- Junto a los méritos reveladores de las aptitudes para el ejercicio de la jurisdicción, hay que señalar las actividades jurídicas como magistrado del Gabinete Técnico y director del mismo con una trascendencia clara en el ámbito gubernativo y de gestión judicial de la que es fiel reflejo la extensa memoria de resoluciones gubernativas presentadas a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en diversas materias. Entre estas funciones, y según los certificados anteriormente referidos, pueden destacarse la asistencia directa a la Presidenta del Tribunal Supremo y al Vicepresidente; la dirección y coordinación de todas las áreas del Gabinete Técnico, así como de los departamentos administrativos y auxiliares, la elaboración de dictámenes jurídicos a petición de la Presidencia, Vicepresidencia y de cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo, incluidas sus Salas Especiales; la supervisión de las Crónicas de Jurisprudencia y Memorias del Tribunal Supremo, la atención a personalidades, autoridades y delegaciones



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

extranjeras que visitan el Tribunal, impartiendo las Jornadas técnicas necesarias sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo y del recurso de casación; la coordinación con la Gerencia de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia para la gestión ordinaria de las necesidades del Tribunal, formar parte de la Comisión de selección de Letrados que vayan a incorporarse al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y la realización de las actuaciones precisas para la cobertura de los puestos de trabajo del Gabinete Técnico, la representación del Gabinete Técnico en el ámbito interno del Tribunal y fuera de este, incluso en ámbitos Internacionales, por delegación del Vicepresidente, entre otras.

También ha sido director de 6 cursos del CGPJ, entre ellos de las Estancias en la Tribunal Supremo en 2019 y desde 2022 a la actualidad; colaborador con el departamento de Informática y estadística Judicial del CGPJ para la elaboración de un índice de voces para la Jurisdicción Social (2005); y es colaborador con el CENDOJ como Supervisor Analista de la selección de las fichas de Jurisprudencia elaboradas por los letrados del GT del Tribunal Supremo para la Bases de Datos del CGPJ, desde marzo de 2005 hasta la actualidad.

Al margen de su actividad judicial, el magistrado San Cristóbal Villanueva fue profesor de la UCM desde 1994 a 2002 y de la UAX (2014 a 2016); ha impartido más de 60 conferencias y ponencias en cursos, jornadas y encuentros del CGPJ y de otras instituciones públicas y privadas. Por su parte, hay que subrayar su prolífica actividad científica; es autor de una monografía, doce colaboraciones en obras colectivas y dieciséis artículos doctrinales. Entre estos, como más recientes destacan *"La «extensión de efectos» en el proceso laboral. Una primera aproximación"*, publicado en Diario LA LEY, Nº 10471, Sección Tribuna, 21 de marzo de 2024; y el *"El control tecnológico del empleado: de facultad empresarial a obligación impuesta por el Estado. Perspectiva laboral"*, en la Revista Trabajo y Derecho, número 113, mayo de 2024, Editorial La Ley. Además, ha publicado numerosas sentencias en la Revista especializada "Revista Social de Instancia" de Editorial Francis Lefebvre, así como incorporadas a la base de Datos "Nautis Social", de la misma Editorial Jurídica.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos o de gestión judicial y los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, hace que se observen en Juan Manuel San Cristóbal Villanueva la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser Magistrado de la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-59º.-** Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de plaza de magistrado o magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, turno de especialistas (vacante de Rosa María Virolés Piñol), y presentada por la ponencia del procedimiento de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a Ana María Orellana Cano, actualmente Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, cuya trayectoria profesional acredita claramente su aptitud e idoneidad para ser promovida a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.

.- En la designación de la candidata nombrada el Pleno destaca su excelente trayectoria profesional y su importante experiencia en el orden jurisdiccional social. No en vano, es magistrada especialista en el orden social desde el 19/07/1990 y ostenta el número 1 en este escalafón de especialistas.

En esta línea, hay que señalar que la candidata nombrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 14/10/1988, ostentando el número 665 del escalafón oficial de la categoría de magistradas. A fecha fin de presentación de instancias a la convocatoria cuenta con más de 36 años de antigüedad en la Carrera Judicial y más de 34 años en la categoría de magistrada.

Sus destinos anteriores en el orden social fueron los siguientes: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla (15/02/2002-14/04/2019), Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en situación de adscrita (01/04/1995-15/02/2002), Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en virtud del artículo 355 bis 2 de la LOPJ (15/06/1994-01/04/1995) y Juzgado de lo Social núm. 2 de Jerez de la Frontera (21/09/1990-01/06/1994).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

.- El Pleno también ha valorado, de manera muy especial, la amplitud y calidad de sus conocimientos en las materias propias del orden social, que se evidencia del contenido y análisis de las cinco resoluciones seleccionadas, así como de la completa y brillante intervención ante la Comisión de Calificación.

En primer lugar, se aporta la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Madrid, de 04/12/2023 (542/2023), en materia de despido disciplinario, uso de nuevas tecnologías y derecho a la intimidad.

Como señala la magistrada Orellana Cano, la enorme transformación digital que se está produciendo en todos los ámbitos y, también en la relación laboral, implicará el uso cada vez más habitual de la utilización de dispositivos digitales, la comunicación a través de correos electrónicos y la propuesta de la prueba electrónica, por lo que es muy relevante la delimitación del alcance del control empresarial en las herramientas de trabajo facilitadas al trabajador y la posible vulneración del derecho a la protección de datos personales.

El análisis de estas cuestiones, junto a la garantía de indemnidad y la privacidad del trabajador se lleva a cabo en la presente sentencia que resuelve la impugnación de un despido disciplinario, coligiendo que al haber incumplido la empresa el deber de información previa de que podía controlar el dispositivo del trabajador con fines sancionadores, la prueba es ilícita, por haber sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales.

El actor es despedido disciplinariamente por haber utilizado el ordenador facilitado por la empresa como herramienta de trabajo para fines particulares. Se examina la posible vulneración del art.87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y, aunque el trabajador tiene una expectativa razonable de confidencialidad, la misma queda neutralizada por la información y, la prohibición expresa. Y en este caso no ha existido la información.

En segundo lugar, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11/05/2020 (35/2020), en materia de despido objetivo por causas organizativas y productivas; garantía de indemnidad. Se inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina.

En este litigio se impugna el despido objetivo acordado por la empresa fundado en causas organizativas y de producción. Se plantean algunas cuestiones procesales, como la indefensión en relación con la aportación de prueba documental con anterioridad al acto del juicio y, la incongruencia omisiva de la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

sentencia de instancia. A continuación, se examina la vulneración de la garantía de indemnidad, por considerar el actor que el despido era una la última fase del acoso laboral del que había sido víctima. Seguidamente, se analiza el error excusable en la falta de puesta a disposición de la indemnización y, la concurrencia de las causas organizativas y productivas. Son numerosas las cuestiones que se suscitan en el recurso de suplicación y, la doctrina jurisprudencial que se aplica.

El actor impugna el despido objetivo por causas organizativas y productivas, invocando que no concurría la causa y que el despido constituía la última fase del acoso laboral. La sentencia examina si se ha producido tal acoso, delimitando las distintas fases del acoso. Examina también los supuestos de error excusable e inexcusable en el abono de la indemnización y, concluye que concurre la causa.

En tercer término, se destaca la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Madrid, de 17/01/2003 (1967/2002), en materia de compromisos por pensiones; rescate de derechos consolidados y mejoras voluntarias. La sentencia realiza una delimitación entre la naturaleza jurídica de las mejoras voluntarias a la Seguridad Social y los compromisos por pensiones de los Planes de Pensiones del sistema de empleo y, examina si el trabajador que fue despedido antes del acaecimiento de la contingencia tiene derecho al rescate de los derechos consolidados en un fondo interno que había creado la empresa, al no tener la obligación de exteriorizar los compromisos por pensiones.

La trascendencia de la resolución está también en la problemática social que evidencia, su generalidad y la respuesta que se aporta: La sentencia declara que las diferencias entre las mejoras voluntarias y los compromisos por pensiones son esenciales, pues, mientras que en las mejoras voluntarias, el trabajador sólo tiene una expectativa de derecho si acaece la contingencia; sin embargo, en los planes de pensiones del sistema de empleo, el trabajador tiene unos derechos consolidados. Examina también la normativa aplicable y el deber de exteriorización empresarial.

Por su parte, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Madrid, de 17/10/2022 (177/2022), en materia de ampliación del permiso por nacimiento del menor en familias monoparentales, fue revocada por la STS de 12 de septiembre de 2024 (Recurso 5861/2022). Sin embargo, la STS Sala de lo Contencioso Administrativo de 18 de octubre de 2024 se pronunció en el mismo sentido que la primera sentencia, es decir, reconociendo el derecho a la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

ampliación de la duración del permiso. Y, en esta misma línea, la STC de 6 de noviembre de 2024 también declaró que era discriminatorio no reconocer el derecho a la ampliación.

La relevancia de esta sentencia radica en la argumentación jurídica utilizada para el reconocimiento del derecho de acrecimiento a la madre biológica de una familia monoparental del periodo de permiso que hubiese disfrutado, en su caso, el otro progenitor. Ha de partirse de la existencia de una laguna legal, pero la sentencia seleccionada considera que procede esta ampliación con base en el efecto directo de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE.

La madre biológica de una menor reclama a la SS el reconocimiento de la ampliación del permiso por nacimiento de la menor que le hubiera correspondido al otro progenitor si no hubiera nacido en una familia monoparental. La sentencia que se examina concluye que procede tal ampliación, analizando la aplicación directa de la Directiva 2010/2018, considerando que no cabe la aplicación analógica del derecho de acrecer.

Finalmente, se resalta la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal superior justicia de Madrid, de 19/05/2009 (2510/2008) en materia de prueba de interrogatorio de parte; auxilio judicial; discriminación por edad.

Esta sentencia realiza una interesante delimitación entre lo que constituye la solicitud de la parte para que se practique la prueba en el acto del juicio, que constituye una petición del auxilio judicial para la práctica de la prueba en el momento procesal oportuno y, la solicitud de la práctica de la prueba de interrogatorio de parte. La estimación de la solicitud de auxilio no significa admisión de la prueba. También examina la discriminación por edad, que constituye una cuestión de actualidad, concluyendo que la jubilación forzosa por edad no es discriminatoria.

Declara la sentencia que las partes pueden solicitar el auxilio judicial para que se cite a juicio al representante legal de la empresa, pero que el órgano judicial acceda a realizar esta citación, no significa que admita la prueba de interrogatorio de parte en la persona de este representante, sino que esta prueba deberá proponerse por la parte interesada en el acto del juicio.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

En definitiva, el Pleno aprecia en la candidata nombrada aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción que se derivan del conjunto de las resoluciones aportadas, así como de su intervención ante la Comisión de Calificación.

.- Desde una perspectiva gubernativa y de gestión judicial, hay que destacar que la magistrada Orellana Cano presenta una prolífica actividad de colaboración y actuación con otras instituciones que directa o indirectamente desembocan en su compromiso con el propio orden social. Así, es la presidenta del Consejo General de la MUGEJU (desde 2019), fue decana de los Juzgados de El Puerto de Santa María (1990) y de los Juzgados de Ubrique (1988 a 1989); vocal del tribunal calificador de la especialidad social (2010), tutora de siete magistrados en el acceso a lo social (2009 a 2013) y directora del Máster Relaciones Laborales de la UCM (2020 a 2022).

Ha sido Analista del CENDOJ (2009 a 2022), directora o coordinadora de 10 cursos del CGPJ. Ha participado en comisiones o grupos de trabajo en materia de propuesta protocolo acoso Carrera Judicial CGPJ 2014, retribuciones Carrera Judicial Ministerio de Justicia (2014), Informe DA 23ª LPGE para 2015, que se integró en la ley (2014), Informe retribuciones variables Carrera Judicial CGPJ 2015, propuesta de reglamento de retribuciones variables en la Carrera Judicial CGPJ 24-jul-2015; Informe carga de trabajo Carrera Judicial CGPJ.

.- Al margen de su actividad judicial, la magistrada Orellana Cano ha sido profesora universitaria Diplomatura Relaciones Laborales (1990 a 2005) y docente en diversas actividades de universidades e instituciones públicas y privadas. Ha impartido 457 conferencias en materia laboral.

Es doctora en Derecho por la UCM (2016), Máster en Gestión Documental, Bibliotecas y Archivos (2023) y autora 94 publicaciones jurídicas en materia laboral.

La valoración de todos y cada uno de los méritos expuestos - tanto en la excelencia y en la experiencia jurisdiccional, como los gubernativos y de gestión, así como los extrajudiciales en los ámbitos docente, discente y de creación científica - efectuada de forma individual según el orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria y también mediante una ponderación en conjunto, y teniendo presente los principios de mérito, capacidad, igualdad y representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que es objeto de ponderación, hace que se observen en Ana María Orellana Cano la erudición, la capacidad y la idoneidad para ser





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en mayor tanto que las personas propuestas pero no designadas, sin que ello implique en modo alguno falta de aprecio por la trayectoria profesional o por los méritos alegados por las mismas.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-60º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la presidencia de la Audiencia Nacional.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-61º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-62º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-63º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la Presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-64º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la Presidencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-65º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-66º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-67º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento para proveer la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-68º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Ávila, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Ávila al magistrado Javier García Encinar.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, actual presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y único solicitante de la plaza.

Javier García Encinar ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 17/03/1998, ostentando el número 1833 del escalafón oficial de la categoría de magistrado. Tiene computados más 26 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Ávila (15/11/2004-11/01/2016), Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barakaldo (13/07/2001-27/10/2004), Juzgado de Primera



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Instancia e Instrucción núm. 1 de Cuellar (15/05/2000-26/06/2001) y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Villablino (16/04/1998-26/04/2000).

Desde una perspectiva gubernativa, es presidente de la Audiencia Provincial de Ávila (2016 a la actualidad) y miembro nato de la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León por el mismo periodo (miembro de la Comisión Permanente (16/11/2016 a 16/11/2017 y 16/11/2022 a la actualidad).

Por la actividad referida y en atención a las necesidades detectadas en el órgano y las propuestas que realiza en su plan de actuación, debe afirmarse que el candidato nombrado conoce perfectamente la situación, carencias y línea de actuación que debe guiar la gestión del órgano en el que es reelegido como presidente. Todos los aspectos tratados en las cuatro vertientes en las que diferencia la línea de actuación en su programa de actuación - como presidente del tribunal, como órgano superior a nivel provincial, como miembro nato de la Sala de Gobierno, y finalmente representante del CGPJ en la provincia - están encaminados a lograr un mejor funcionamiento de la Audiencia Provincial de Ávila.

El magistrado García Encinar demuestra un buen conocimiento de la situación de la Audiencia Provincial de Ávila, extremo puesto de manifiesto sustancialmente en los datos recogidos al inicio de su programa de actuación y en su comparecencia.

Así, basándose en los informes del Servicio de Inspección, evidencia los buenos datos de la Audiencia (con especial referencia a la reducida tasa de pendencia). Por otra parte, merece una valoración muy positiva la proactividad del presidente en sus visitas a los distintos órganos judiciales de la provincia a fin de conocer in situ las necesidades de cada juzgado, apoyando aquellas peticiones que se estimen necesarias la Presidencia de la Audiencia Provincial, en atención a que de la misma dependen diversos servicios comunes a la provincia, como el llamamiento de jueces sustitutos a nivel provincial o servicios como perito, gabinete psicológico, u oficina de atención a las víctimas.

Igualmente, el candidato nombrado acredita su experiencia en la materia gubernativa, a través de la variedad de acuerdos gubernativos que aporta en su relación, relativos a materias tales como una prórroga de jurisdicción para cubrir servicio de guardia en Juzgado a cuya titular le había sido adaptado el puesto de trabajo; un informe sobre queja presentada al Defensor del Pueblo por los Alcaldes de diversos municipios, acerca de la demarcación y planta



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

judicial en relación con las demarcaciones electorales; la modificación normas de reparto y exención del mismo; recurso de alzada contra sanción por mala fe procesal; o un expediente inhabilidad de Jueza sustituta externa.

Por lo que se refiere a las aptitudes excelencia jurisdiccional, la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción queda demostrado en las resoluciones seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico, tanto por su variedad, abarcando los dos órdenes de la Audiencia, como por la complejidad y trascendencia de los asuntos planteados, en materias civiles de servidumbre de luces y vistas y de vertiente de tejado (con Auto de inadmisión TS 24 de febrero 2021. Auto 1.980/2021), y de contrato de franquicia (confirmada por la SAP ÁVILA 17-06-2015 ECLI:ES:APAV:2015:134 STS 11-06-2018 ECLI:ES:TS:2018:2678); y en materia penal con un delito de homicidio por imprudencia grave delito, sin que la sentencia fuese recurrida.

Estas consideraciones son extensibles a las resoluciones relacionadas y resumidas en la memoria aportada.

Al margen de estas consideraciones específicas, destacan como méritos comunes en el ámbito de la excelencia jurisdiccional, que al momento de la presentación de la instancia llevaba más de 26 años de servicio activo ininterrumpido en la Carrera Judicial y más de 23 en la categoría de magistrado; que todos esos años de servicio los ejerció en órganos mixtos (valorándose el tiempo servido en los mismos tanto en el orden civil como en el penal); y, además, más de 8 años de experiencia en órgano colegiado en la propia Audiencia Provincial.

Desde otra perspectiva, el Pleno también ha valorado que el candidato nombrado ha sido Vocal de procedencia judicial y/o Presidente, por este orden, de las Juntas Electorales de Zona de Ponferrada y Villablino (León), Bilbao, Baracaldo y Guecho, Ávila y, por último, de la Junta Electoral Provincial de Ávila (15 procesos electorales), desde el año 1998. Además, es profesor asociado de la Universidad Católica de Ávila (2011 a la actualidad) y fue tutor de jueces en prácticas (2008 a 2013).

Todo lo expuesto hace que el magistrado Javier García Encinar, único solicitante de la plaza convocada, sea considerado plenamente idóneo para el desempeño de la misma.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-69º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona al magistrado Antonio Ramón Recio Córdova.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, actual presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y único solicitante de la plaza.

Antonio Ramón Recio Córdova ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 08/02/1990, ostenta el número 913 del escalafón oficial de la categoría de magistrado y cuenta con más de 34 años de servicio en la Carrera Judicial. Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de La Bañeza (León) (05/03/1990-02/04/1992), Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Barcelona (21/04/1992-25/04/1994), Juzgado de Primera Instancia núm. 30 de Barcelona (30/04/1994-18/01/2005), y Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona (25/01/2005-02/05/2016).

El candidato designado demuestra un perfecto conocimiento de la situación de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que lleva destinado casi 20 años y de los órganos unipersonales del territorio, lo que pone de manifiesto en su programa de actuación y en su comparecencia. Ello se evidencia en su actividad en el cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona desde 2016 a la actualidad; como miembro nato de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña en el mismo periodo (miembro electo de la misma Sala desde 2009 hasta 2016 y de su Comisión Permanente); y como delegado del decano en orden jurisdiccional civil entre 1999 y 2004.

Se valora favorablemente el grado de cumplimiento de su anterior programa de actuación. En atención a las necesidades detectadas en el órgano y las propuestas que realiza en su plan de actuación, debe afirmarse que el candidato conoce la situación, carencias y línea de actuación que debe guiar su gestión en la Audiencia. Además, también se valoran favorablemente las diecisiete propuestas en que se resume su plan de actuación que, sin duda,



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

están encaminadas a lograr un mejor funcionamiento orgánico, jurisdiccional e institucional de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Entre ellas hay que destacar la previsión sobre la creación de una comisión integrada por el Presidente de la Audiencia de Barcelona y los Jueces/as Decanas/as que se reuniría de forma periódica –en el próximo año 2025, al menos cada dos meses- inicialmente para trabajar en la constitución de los Tribunales de Instancia y, posteriormente, en establecer “un mapa de necesidades” y trasladar propuestas a Sala de Gobierno: el desarrollo de los Tribunales de Instancia precisará de la aprobación en los distintos partidos judiciales de una serie de normas de funcionamiento que puede tomar como referencia el “Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona” que la Comisión Permanente del CGPJ aprobó en el Acuerdo 1.1.8 de su reunión celebrada en fecha 15 de julio de 2014.

El candidato nombrado también acredita su notable experiencia en la materia gubernativa, a través de la variedad de diez acuerdos gubernativos que aporta en su relación, relativos a materias tales como la adscripción a la Sección 7ª (Penal) a un magistrado que se encontraba en situación administrativa de servicios especiales; establecimiento de criterios de actuación en relación con las conformidades en el Tribunal de Jurado; sobre atribuciones del presidente de la Audiencia Provincial para convocar a los magistrados/as de las distintas Secciones para unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales; el reforzamiento de las Secciones civiles de la AP Barcelona mediante un sistema de comisiones de servicio sin relevación de funciones; propuesta de plan de refuerzo transversal; resoluciones de los conflictos de reparto entre secciones, entre otras.

Por lo que se refiere a las aptitudes excelencia jurisdiccional, la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción queda demostrado en las resoluciones seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico, destacando la complejidad y trascendencia de los asuntos planteados en materias civiles tales como la responsabilidad por productos farmacéuticos, en un caso en el que una asociación de hemofílicos, con más de cien miembros, interesó un indemnización a varios laboratorios por el contagio de hepatitis C (la Sentencia de la Sala 1ª del TS nº 244/2014, de 21 de mayo (ECLI:ES:TS:2014:1911) desestima el recurso de casación y expresamente destaca la sentencia de la Audiencia en los siguientes términos: *"La sentencia de la Audiencia provincial, encomiable en todos sus aspectos, formales y jurídicos ..."*); en materia de responsabilidad de un centro escolar, en el supuesto del fallecimiento de un alumno que tuvo gran repercusión social; y la responsabilidad por un incendio



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

(la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 124/2017, de 24 de febrero (ECLI:ES:TS:2017:717) destaca expresamente lo siguiente de la sentencia de apelación: *«El Tribunal de apelación sigue en la decisión del recurso una precisa y clara metodología»*).

Estas consideraciones son extensibles a las resoluciones relacionadas y resumidas en la memoria aportada.

Al margen de estas consideraciones específicas, destacan como méritos comunes en el ámbito de la excelencia jurisdiccional, que al momento de la presentación de la instancia llevaba más de 34 años de servicio activo ininterrumpido en la Carrera Judicial y más de 30 en la categoría de magistrado; que todos esos años de servicio los ejerció o en órgano mixto o en órganos civiles; y, además, los casi 20 años de experiencia en órgano colegiado.

Como mérito específico de la Audiencia Provincial de Barcelona, debe tenerse en cuenta que los cerca de 20 años en órgano colegiado lo son en una Audiencia Provincial, así como el profundo conocimiento de la situación de la Audiencia Provincial de Barcelona y de los órganos judiciales unipersonales de su circunscripción, puesto de manifiesto por su experiencia en la misma, los indicadores y datos aportados en el programa de actuación, y su concreta y precisa exposición ante la Comisión de Calificación sobre el particular. Además, tiene reconocidos los méritos del idioma y Derecho civil catalanes.

Desde otra perspectiva, el Pleno también ha valorado que el candidato nombrado ha sido coordinador y tutor en prácticas tuteladas (alumnos/as de las Promociones 51ª a 55ª), miembro del tribunal de oposiciones a Notarías (2015/2016).

El magistrado Recio Córdova es Vocal del Consejo Rector del CEJFE desde 2016 a la actualidad; autor de 12 publicaciones jurídicas de Derecho civil. Entre ellas, varios capítulos en la obra colectiva *"Una interpretación judicial de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Seminario de Jueces y Secretarios Judiciales de Primera Instancia"*, editorial Aranzadi, Barcelona, 2002; el artículo *"La validez de los contratos en los principios de derecho europeos"*, en *"Interpretación de los contratos a partir de los principios de Derecho europeo"*, Cuadernos Digitales de Formación, 2010; *"Derechos Reales"* Tema 1 del Mòdul IV. Drets Reals. Libro V CCCat. Curso de Dret Civil de Catalunya, CGPJ, Ediciones 2017 – 2024; ó *"Intervención en las Jornadas conmemorativas de los 20 años del Código Civil"*



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

*de Catalunya*”, en el Libro *“Vint anys del Codi civil de Catalunya”*, Generalitat de Catalunya”. Departament de Justícia, Drets i Memòria, Barcelona, 2024.

El candidato nombrado es Académico de Número de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; profesor del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universitat Oliva Ceu desde el curso 2010/2011 hasta la actualidad; ponente en 33 cursos y seminarios organizados por el CGPJ y en 13 organizados por otras instituciones públicas y privadas y, además, ha sido docente en la Escuela Judicial en la actividad de Derecho Orgánico Judicial (Promociones 61ª y 62ª).

Todo lo expuesto hace que el magistrado Antonio Ramón Recio Córdova, único solicitante de la plaza convocada, sea considerado plenamente idóneo para el desempeño de la misma.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-70º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Burgos.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-71º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Girona .

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-72º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-73º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Murcia.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-74º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Teruel, vacante por renuncia del anteriormente nombrado, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidenta de la Audiencia Provincial de Teruel a la magistrada María Teresa Rivera Blasco.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza.

La magistrada Rivera Blasco ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 27/06/1986, ostentando el número 537 del escalafón oficial de la categoría de magistrada y tiene computados más de 38 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Teruel (28/12/1989-04/09/1996), Juzgado de Distrito de Teruel (06/03/1989-28/12/1989) y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Calamocha (17/06/1986-15/02/1989).

Por su actividad como magistrada en funciones de presidenta de la Audiencia Provincial de Teruel desde el 22/11/2021 a la actualidad, y las líneas de actuación establecidas en su programa, debe afirmarse que la candidata nombrada conoce perfectamente la situación, carencias y actividades gubernativas que deben guiar la gestión del órgano al que aspira a la reelección como presidente. Todas las propuestas están encaminados a lograr un mejor funcionamiento de la Audiencia Provincial de Teruel, concretamente en las materias de: i) relación del presidente de la Audiencia Provincial con el resto de jueces y magistrados; ii) llamamiento de los jueces sustitutos; iii) edificio judicial; iv) partidos judiciales; v) implantación de los Tribunales de Instancia y la adecuación y reorganización de todos los funcionarios de Justicia en el nuevo modelo de oficina judicial; vi) expediente digital; vii) relaciones con otros operadores jurídicos, instituciones y medios de comunicación.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Destaca la propuesta de la creación la Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Género como grupo unitario de trabajo de los distintos organismos e instituciones implicados directamente en la lucha contra la violencia de género para puesta en común de las carencias y necesidades que se consideren relevantes en orden a la protección de las víctimas con el fin de elaborar propuestas y articular reivindicaciones conjuntas de forma coordinada.

La candidata demuestra un buen conocimiento de la situación de la Audiencia Provincial de Teruel, extremo puesto de manifiesto sustancialmente en los datos recogidos al inicio de su programa de actuación y en su comparecencia.

Por lo que se refiere a las aptitudes excelencia jurisdiccional, la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción queda demostrado en las resoluciones seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico penal, como por la complejidad, la trascendencia de los asuntos planteados y los bienes jurídicos en juego. Destacan también algunas por su carácter innovativo, como a Sentencia de la Audiencia Provincial Civil-Penal Única de Teruel, de 15/11/2011 (núm. procedimiento 12/2011), en materia de mutilación genital: ablación del clítoris. estado de necesidad, error de prohibición (confirmada por el Tribunal Supremo, Sentencia nº 835/2012, octubre 2012 ECLI:ES:TS:2012:7827). Estas consideraciones son extensibles a las 13 resoluciones relacionadas y resumidas en la memoria aportada.

Al margen de estas consideraciones específicas, destacan como méritos comunes en el ámbito de la excelencia jurisdiccional, que al momento de la presentación de la instancia la magistrada Rivera Blasco llevaba más de 38 años de servicio activo ininterrumpido en la Carrera Judicial y más de 34 en la categoría de magistrada; que todos esos años de servicio los ejerció en órganos mixtos (valorándose el tiempo servido en los mismos tanto en el orden civil como en el penal) y, además, más de 24 años de experiencia en órgano colegiado.

Como mérito específico de la Audiencia Provincial de Teruel, debe tenerse en cuenta que los más de 24 años en órgano colegiado lo son en una Audiencia Provincial, así como el profundo conocimiento de la situación de la Audiencia Provincial de Teruel y de los órganos judiciales unipersonales de su circunscripción, puesto de manifiesto por su experiencia en la misma, los indicadores y datos aportados en el programa de actuación, y su concreta y precisa exposición ante la Comisión de Calificación sobre el particular. Como mérito específico de plaza, también hay que señalar que tiene reconocido de



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Derecho Aragonés, mediante acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 15/01/2008 (BOE 09/02/2008).

En resumen, se ha comprobado que jurisdiccionalmente la candidata nombrada alcanza niveles de excelencia en cuanto a los criterios de mérito y capacidad.

Desde otra perspectiva, el Pleno también ha valorado que la aspirante nombrada ha sido presidenta del Jurado de Expropiación Forzosa (2005 a 2017), presidenta/vocal de la Junta Electoral de Zona (en procesos electorales de 1986 a 1996) y Provincial (en procesos electorales de 1996 a 2023).

Todo lo expuesto hace que la magistrada María Teresa Rivera Blasco, única solicitante de la plaza convocada, sea considerada plenamente idónea para el desempeño de la misma.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-75º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Granada, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Granada, a la magistrada Beatriz Pérez Heredia.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza. La magistrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 30/03/2004, ostentando el número 2934 del escalafón oficial de la categoría de magistradas, y cuenta con más de 20 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Juzgado de lo Social núm. 7 de Granada (desde 27/04/2012 a 13/11/2015), Juzgado de lo Social núm. 1 de Motril (de 08/03/2010 a 10/04/2012), Juzgado de Violencia sobre la mujer núm. 1 de Badalona (de 08/08/2008 a 03/09/2009), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Alcalá la Real (de 06/02/2006 a 02/04/2008), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Vélez Rubio (de 31/03/2005 a 18/01/2006) y adscrita al Tribunal Superior de Justicia



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

de Andalucía (de 22/04/2004 a 12/03/2005) como juez de adscripción territorial. Durante este periodo fue destinada al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Córdoba.

Desde una perspectiva gubernativa, la candidata fue decana de los Juzgados de Alcalá la Real (Jaén), entre 30/04/2007 y el 20/11/2007,

En el marco de las actividades de colaboración con el CGPJ y otras instituciones, hay que señalar que la candidata ha sido directora de los Encuentros de la Jurisdicción Social (organizados por el CGPJ, en los años 2022 a 2024; y presidenta de la Junta Electoral Provincial (elecciones municipales de 2007).

En atención a las necesidades detectadas en la Sala de lo Social y en los Juzgados de lo Social de su demarcación, y las propuestas que realiza en su plan de actuación, debe afirmarse que la candidata nombrada conoce perfectamente la situación, carencias y línea de actuación que debe guiar la gestión del órgano al que aspira a presidir. Todos los aspectos tratados en su programa de actuación están encaminados a lograr un mejor funcionamiento de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Granada.

La candidata nombrada demuestra un buen conocimiento de la situación de la Sala y Juzgados de su demarcación, extremo puesto de manifiesto también en minuciosidad los datos recogidos al inicio de su programa de actuación.

Por otra parte, merecen una valoración positiva las propuestas realizadas para mejorar los datos de pendencia de la Sala. Plantea la magistrada Pérez Heredia que para conseguir esta mejora es necesario no solo que se resuelvan los recursos de la forma más ágil posible, sino también disminuir la entrada de asuntos desde los Juzgados, por lo que conseguir una menor judicialización de los conflictos laborales es sumamente importante. Por ello, plantea hacer efectivos mecanismos de agilización de la Administración de Justicia en materia de fomento de la mediación; la implantación de la utilización del pleito testigo; la utilización efectiva del mecanismo procesal de acumulación de los recursos al amparo del art. 234 LRJS; señalamientos específicos dedicados a recursos en materia de despidos, conflictos colectivos y tutelas de derechos fundamentales, entre otras medidas.

La amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción queda demostrado en las resoluciones



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico, tanto por su variedad, como por la complejidad y trascendencia de los asuntos planteados, en materias de despido improcedente y sucesión de empresa; pensión de viudedad y orfandad; y conflicto colectivo y reconocimiento como tiempo de trabajo.

Estas consideraciones son extensibles a las 8 resoluciones relacionadas y resumidas en la memoria aportada.

Al margen de estas consideraciones específicas, destacan como méritos comunes en el ámbito de la excelencia jurisdiccional, que al momento de la presentación de la instancia llevaba más de 20 años de servicio activo ininterrumpido en la Carrera Judicial y más de 17 en la categoría de magistrada; que tiene más de 15 años de servicio en órganos de la jurisdicción social y más de nueve en la propia Sala que aspira a presidir.

En resumen, se ha comprobado que jurisdiccionalmente la candidata alcanza niveles de excelencia en cuanto a los criterios de mérito y capacidad.

El Pleno también ha valorado que la candidata nombrada es magistrada especialista en el orden jurisdiccional social desde el 11/02/2011, ostentando el número 32 en el escalafón de magistrados/as especialistas del orden social.

Además, la magistrada Pérez Heredia ha sido profesora permanente del Foro Aranzadi Granada (desde 2012 a 2023) y del Foro Aranzadi Almería (desde 2015 al 2023); profesora de los cursos de Prácticas Jurídico-Procesal del Colegio de Graduados Sociales de Granada celebrados en los años 2013, 2015 y 2017; profesora en la I Tribuna Laboral del Colegio de Graduados Sociales de Almería (2024). Ha sido ponente en más de 20 cursos y jornadas organizados por el CGPJ y otras instituciones públicas y privadas, entre ellas, ponencia *"La responsabilidad de la empresa en los accidentes de trabajo en la doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del TSJ de Granada"* en el seno de la II Jornada sobre Accidentes de Trabajo, organizada por los Colegios de Abogados y de Graduados Sociales de Almería (2024) y ponencia *"Análisis de las últimas resoluciones judiciales del TJUE y el TS en el orden social"* organizada por el Colegio de Abogados de Granada (19 de noviembre de 2024).

Es autora de 3 colaboraciones en obras colectivas y 1 artículo doctrinal: *"Principios Dispositivo y de Aportación de Parte"* en AA.VV, Abel Lluch, X. y Picó i Junoi, J. (coord.) Los poderes del juez civil en materia probatoria, J.M Boch



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Editor, Madrid, 2003; *"Falta de llamamiento colectivo de trabajadores fijos discontinuos: obligación de someterse al procedimiento del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores cuando subyacen causas económicas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 227/2018, de 28 de febrero"*, en Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, Nº 425-426, 2018;

*"Resoluciones judiciales de interés en la jurisdicción social relacionadas con la igualdad de género y la no discriminación"* en AA.VV, Monsalve Cuellar, M.E. (coord.) Género y No Discriminación, Análisis transversal e interdisciplinar, Alderabán, Cuenca; y *"Trabajadores Indefinidos no fijos"* en AA.VV, Fernández Avilés, J.A (dir.) Tratado Práctico de Modalidades de Contratación Laboral, Atelier, Madrid, 2023.

Todo lo expuesto hace que la magistrada Beatriz Pérez Heredia, única solicitante de la plaza convocada, sea considerada plenamente idónea para el desempeño de la misma.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-76º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Sevilla, vacante por expiración del mandato de la anteriormente nombrada, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Sevilla, a la magistrada María Begoña Rodríguez Álvarez.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza. La magistrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 04/09/1980, ostentando el número 98 del escalafón oficial de la categoría de magistradas, con cerca de 43 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (04/05/2000 a 19/02/2016), Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla (20/01/1989 a 28/04/2000), Magistratura de Trabajo número 8 de Sevilla (26/09/1987 a 20/01/1989), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de L'Hospitalet de Llobregat (03/02/1987 a 16/09/1987), Juzgado de Distrito



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

número 4 de Sevilla (18/08/1986 a 23/01/1987), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Coloma de Farners (15/03/1984 a 31/07/1986), Juzgado de Distrito de Arévalo (05/11/1982 a 15/02/1984), Juzgado de Distrito de Viladecans (03/06/1981 a 08/10/1982), Juzgado de Distrito de Guecho (22/10/1980 a 05/05/1981).

En atención a las necesidades detectadas en la Sala de lo Social y en los Juzgados de lo Social de su demarcación, y las propuestas que realiza en su plan de actuación, debe afirmarse que la candidata nombrada conoce perfectamente la situación, carencias y línea de actuación que debe guiar la gestión del órgano para el que es reelegida. Todos los aspectos tratados en su programa de actuación están encaminados a lograr un mejor funcionamiento de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Sevilla.

Por otra parte, merecen una valoración positiva las propuestas realizadas para la clasificación de los asuntos que ingresan, (o se encuentren pendientes) en urgentes, recursos de queja y tramitación normal u ordinaria. Asimismo, se valora como muy favorablemente las propuestas en materia de control por parte de la presidencia en el reparto de ponencias; la determinación de días de deliberación, votación y fallo; la programación reuniones de magistrados de la sala para establecer criterios comunes en aquellas materias que lo aconsejen; la verificación semanal de asuntos deliberados; el control mensual de pendencia de asuntos, tanto de los ya repartidos como, en su caso, de los pendientes de reparto; así como de la programación de días y horas días de audiencia de los magistrados para con los profesionales y examen de necesidades materiales y personales.

También hay que destacar el detallado elenco de medidas respecto a las relaciones de la Sala de Social con otros operadores jurídicos y con las instituciones.

Junto al programa de actuación, es relevante la experiencia de la candidata nombrada en el ámbito gubernativo: Es la presidenta de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Sevilla, desde 2016 a la actualidad (y miembro de la Sala de Gobierno el mismo periodo de tiempo).

La amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción queda demostrado en las resoluciones seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico, tanto por su variedad, como por la complejidad y trascendencia de los asuntos planteados. Destaca la Sentencia 07/06/2002 (Rec. 1247/2002), cuya



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

calidad queda avalada al haber pasado el filtro del Tribunal Supremo, pues fue confirmada mediante su Sentencia de 15 de Marzo de 2004. (RCUD 332/2003). Su doctrina fue seguida por otros TSJ y ratificada más recientemente por la Sentencia del Tribunal Supremo nº 940/2018 de 30/10/2018, Rec. 3877/2016 (ECLI: ES:TS:2018:3965).

Al margen de estas consideraciones específicas, destacan como méritos comunes en el ámbito de la excelencia jurisdiccional, que al momento de la presentación de la instancia llevaba más de 43 años de servicio activo ininterrumpido en la Carrera Judicial y más de 37 en la categoría de magistrada; que tiene más de 35 años de servicio en órganos de la jurisdicción social y más de 24 en la propia Sala que en la que aspira a renovar su mandato.

En resumen, se ha comprobado que jurisdiccionalmente la candidata alcanza sobradamente niveles de excelencia en cuanto a los criterios de mérito y capacidad.

Desde otra perspectiva, la candidata nombrada ha colaborado con el CGPJ en la impartición de dos actividades; concretamente las Jornadas de colaboración con la CEOE (2018) y el Encuentro de la Sala Cuarta con presidentes/as de las Salas de lo Social de los TSJ (2022). También en otros dos cursos con el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Todo lo expuesto hace que la magistrada María Begoña Rodríguez Álvarez, única solicitante de la plaza convocada, sea considerada plenamente idónea para el desempeño de la misma.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-77º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Extremadura, a la magistrada Alicia Cano Murillo.





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza. La magistrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 14/10/1988, ostentando el número 644 del escalafón oficial de la categoría de magistradas, contando con una antigüedad de más de 36 años en la Carrera Judicial.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Juzgado de lo Social núm. 2 de Badajoz (16/11/1991 a 21/03/2000), Juzgado Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria (11/05/1990 a 16/10/1991) y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Valencia de Alcántara (07/11/1988 a 12/04/1990).

Si bien la candidata no tiene experiencia gubernativa, presenta un plan de actuación en el que aborda extensamente los indicadores de la Sala y plantea la necesidad de volver a la tónica de la Sala en cuanto a los tiempos medios de duración de los procedimientos. En este sentido considera imprescindible volver a la normalidad en la composición de la Sala; continuar con el debido uso de las aplicaciones informáticas, aplicando las nuevas mejoras que vayan implementándose; implantar reuniones con sus titulares de los Juzgados de lo Social de forma habitual para poder comentar tanto los criterios que sigue esta Sala en las materias que les incumbe, como las necesidades o proposiciones que puedan formular; y plantear la necesidad de incrementar los Juzgados de Badajoz, ya que la creación del nº5 en funcionamiento, desde junio de 2.021, no ha impedido que el número de entrada siga superando los módulos recomendados por el CGPJ.

Por ello, la exposición detallada de los datos y carga de trabajo de la Sala y de los órganos de su demarcación, así como su defensa en comparecencia ante la Comisión de Calificación permiten apreciar en la candidata nombrada las aptitudes de carácter gubernativo para ocupar la presidencia de la Sala Social.

La amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción quedan demostradas en las resoluciones seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico, tanto por su variedad, como por la complejidad y trascendencia de los asuntos planteados, en materias tales como la Seguridad Social; la sucesión empresarial, los derechos laborales en una universidad; suspensión de contratos de trabajo; impugnación de convenio colectivo por ilegalidad; partes negociadoras; estudio de la legitimación inicial para negociar el convenio, representatividad y carga de la prueba, etcétera. En varias de ellas se explicita que pasaron el filtro del Alto Tribunal, evidenciando su calidad técnica.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Ello es aplicable no solo a las tres resoluciones seleccionadas, sino también a las relacionadas en las fichas de la instancia y el resto de las resoluciones que aporta la magistrada.

Al margen de estas consideraciones específicas, destacan como méritos comunes en el ámbito de la excelencia jurisdiccional, que al momento de la presentación de la instancia llevaba más de 36 años de servicio activo ininterrumpido en la Carrera Judicial y más de 34 en la categoría de magistrada; que tiene más de 28 años de servicio en órganos de la jurisdicción social y más de 33 años en el orden jurisdiccional social (de ellas más de 24 en órganos colegiados del mismo orden).

El Pleno también ha valorado que la candidata nombrada ha sido presidenta de la Junta Electoral de Extremadura entre los años 2003 a 2007 y vocal entre los años 2007 a 2016 y 2019 a 2024; es autora de 7 publicaciones jurídicas; y ha impartido 2 ponencias en cursos del CGPJ y de la Diputación de Cáceres. Ponencia sobre "*El recurso de suplicación*", dentro del Plan de Formación para Letrados de la Diputación Provincial de Cáceres, celebrado en Cáceres en noviembre de 2022, organizado por el Servicio de Formación de la Diputación Provincial de Cáceres. Entre diversas colaboraciones, Ponente en el Curso 1996-1997 de la Escuela de Práctica Profesional "García Tenorio" del Colegio de Graduados Sociales de Badajoz: "*El proceso laboral*".

Todo lo expuesto hace que la magistrada Alicia Cano Murillo, única solicitante de la plaza convocada, sea considerada idónea para el desempeño de la misma.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-78º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de La Rioja, a la magistrada María José Muñoz Hurtado.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza. La magistrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 19/02/1991, ostentando el número



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

1202 del escalafón oficial de la categoría de magistradas y una antigüedad de más de 33 años en la Carrera Judicial.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gernika-Lumo (18/03/1991 a 20/05/1996), Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (06/06/1996 a 03/04/2009), Juzgado de lo Social número 2 de Logroño (23/04/2009 a 10/04/2012), Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria (10/05/2012 a 11/01/2016).

Desde una perspectiva gubernativa, la candidata nombrada es la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia La Rioja, desde 2016 a la actualidad (y miembro de la Sala de Gobierno el mismo periodo de tiempo) y aporta una completa relación de resoluciones gubernativas.

La candidata tiene experiencia gubernativa y colabora de forma notable en actividades del CGPJ y otras instituciones. En efecto, como ya se ha apuntado, la candidata es la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia La Rioja, desde 2016 a la actualidad (y miembro de la Sala de Gobierno el mismo periodo de tiempo). También es Delegada del Foro Justicia y Discapacidad en el Tribunal Superior de Justicia (desde 2016), Delegada de la Mutualidad Judicial de La Rioja (desde 2019) y analista del Cendoj (desde 2022). Por su parte, la candidata ha sido miembro de la Comisión Evaluación Jueces y Magistrados sustitutos (2021, 2022 y 2024); Vocal Judicial Junta Electoral de la Rioja (2016 a 2024), vocal de la Junta Electoral de Zona de Gernika Lumo (entre los años 1991 y 1996). También ha sido miembro de la diversas Juntas Electorales a elecciones para la Sala de Gobierno. Ha sido coordinadora de 5 cursos del CGPJ, entre ellos "Unificación de criterios", RI1802 (2018); RI1902 (2019).

En atención a las necesidades detectadas en la Sala de lo Social y en los Juzgados de lo Social de su demarcación, la cuenta que da del grado de cumplimiento de su programa de actuación presentado en su anterior nombramiento y, en base también, a las propuestas de mejora que realiza en su plan de actuación, debe afirmarse que la candidata conoce perfectamente la situación, carencias y línea de actuación que debe guiar la continuación de la gestión del órgano en el que aspira a renovar mandato. Todos los aspectos tratados en su programa de actuación están encaminados a lograr un mejor funcionamiento de la Sala de lo Social del TSJ de La Rioja.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Por otra parte, merecen una valoración positiva las propuestas realizadas para mejorar los medios digitales que facilitan la gestión y tratamiento de las actuaciones y datos de los procesos judiciales, tales como la dotación, a través de la Comisión de Informática, de una herramienta de anonimización de datos personales similar a la empleada en el territorio Ministerio (ADIA) y en la Base de datos del CENDOJ (KENDOJ), tanto para la adecuada atención de solicitudes de sentencias de la Sala para ser aportadas como de contraste en recursos para unificación de doctrina, como para atender las demandas del Gabinete de Prensa; la integración de las grabaciones en el expediente judicial electrónico, la habilitación de la aplicación del Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), para la celebración de actos procesales mediante presencia telemática.

Debe concluirse, en definitiva, que la candidata a renovar el mandato presenta una clara aptitud de carácter gubernativo para continuar ejerciéndolo y alcanzar a cumplir lo que ahora son propuestas de mejora que plantea.

La amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción quedan demostradas en las resoluciones seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico, tanto por su variedad, como por la complejidad y trascendencia de los asuntos planteados.

Ello es aplicable no solo a las tres resoluciones seleccionadas, sino también a las 14 resoluciones que aporta en su relación de resoluciones que incardina en tres grandes bloques de materias sobre los que se ha pronunciado la Sala: En materia de derecho del trabajo, derecho de seguridad social y derecho procesal laboral.

Al margen de estas consideraciones específicas, destacan como méritos comunes en el ámbito de la excelencia jurisdiccional, que al momento de la presentación de la instancia llevaba más de 33 años de servicio activo ininterrumpido en la Carrera Judicial y más de 37 en la categoría de magistrada; que tiene más de 28 años de servicio en órganos de la jurisdicción social y más de 28 años en el orden jurisdiccional social (de ellas más de 12 en órganos colegiados del mismo orden).

La magistrada también ha sido coordinadora de 5 cursos del CGPJ, entre ellos *"Unificación de criterios"*, RI1802 (2018); RI1902 (2019); autora de 3 publicaciones jurídicas ponente en una veintena de cursos, seminarios y mesas redondas organizados por el CGPJ y otras instituciones.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Todo lo expuesto hace que la magistrada María José Muñoz Hurtado, única solicitante de la plaza convocada, sea considerada idónea para el desempeño de la misma.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-79º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, vacante por expiración del mandato del anteriormente nombrado, y presentada por la ponencia del expediente de provisión de la plaza, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a la magistrada María Esther Castanedo García.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, única solicitante de la plaza. La magistrada ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre el día 11/10/2005, ostentando el número 3217 del escalafón oficial de la categoría de magistradas y tiene computados más de 19 años en la Carrera Judicial.

Sus destinos anteriores fueron los siguientes: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (07/11/2005 a 15/02/2006), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laredo (27/02/2006 a 03/07/2010), Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (30/07/2010 a 02/02/2011).

En atención a las necesidades detectadas en la Sala de lo Contencioso administrativo y en los Juzgados de lo Contencioso administrativo de su demarcación, y las propuestas que realiza en su plan de actuación, debe afirmarse que la candidata conoce perfectamente la situación, carencias y línea de actuación que debe guiar la gestión del órgano al que aspira a presidir. Todos los aspectos tratados en su programa de actuación están encaminados a lograr un mejor funcionamiento de la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJ de Cantabria.

Por otra parte, merecen una valoración positiva las propuestas realizadas:

i) para reforzar el trabajo del Presidente como presidente de Sala, de tal manera, que ayude en el estudio de los asuntos complejos, de los asuntos



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

repetitivos y de los pleitos testigo para conseguir una respuesta unitaria a estos asuntos. Para ello se compromete a hacer un seguimiento de todos ellos, estudiando las resoluciones que la Sala haya adoptado en este tipo de asuntos o similares con anterioridad, también la respuesta que otros Tribunales Superiores de Justicia estén dando a este tipo de asuntos y la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al respecto. Todo con el propósito de conseguir una sentencia de la Sala de Cantabria que unifique el criterio de todos los compañeros, que sea asumida por todos y que pueda ser reutilizada en el futuro en asuntos similares;

ii) implantar el seguimiento de los asuntos recurridos en casación ante el Tribunal Supremo, mediante el señalamiento de las sentencias devueltas para que, tras una exposición del ponente, los criterios del Tribunal Supremo en la casación sean conocidos y tomados en consideración por todos los magistrados y sean utilizados en el futuro;

iii) señalamiento para deliberación de las principales y más importantes sentencias del Tribunal Supremo, que, aunque no se refieran a asuntos de la Sala de Cantabria, supongan una novedad o un cambio de criterio respecto de la jurisprudencia anterior;

iv) aprovechar la pendencia actual de nuestra Sala para trabajar en resoluciones comunes que eviten futuras contradicciones, unifiquen respuestas, mejoren la calidad expositiva de la normativa y jurisprudencia aplicadas al caso. Junto al programa de actuación, es relevante la experiencia de la candidata en el ámbito gubernativo.

Además, destaca su experiencia gubernativa: Ha sido decana de los Juzgados de Laredo (2005 a 2009), miembro de la Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria (2007 a 2009), por la categoría de jueza. Miembro de la Junta Electora de Cantabria (2015 a 2020) y presidenta de la Junta Electoral de Zona de Laredo (2005 a 2009). Ha sido directora o coordinadora de 6 cursos del CGPJ.

La amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción queda demostrado en las resoluciones seleccionadas como destacadas, todas ellas relevantes desde el punto de vista jurídico, tanto por su variedad, como por la complejidad y trascendencia de los asuntos planteados.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El Pleno también ha valorado que la magistrada Castanedo García es profesora de la Universidad de Cantabria (2018 a la actualidad); ha sido ponente y conferenciante en 25 cursos, seminarios y mesas redondas del CGPJ; es autora de 20 publicaciones de carácter jurídico y ha sido miembro de la Junta Electora de Cantabria (2015 a 2020) y presidenta de la Junta Electoral de Zona de Laredo (2005 a 2009). Además, es magistrada especialista en el orden jurisdiccional contencioso administrativo desde el 30/12/2010, ostentando el número 87 en el escalafón de magistrados/as especialistas de dicho orden jurisdiccional.

Todo lo expuesto hace que la magistrada María Esther Castanedo García, única solicitante de la plaza convocada, sea considerada idónea para el desempeño de la misma.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-80º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento a la Presidencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-81º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de una plaza de Magistrado o Magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por la vía del artículo 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a Fernando Castillo Rigabert.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato, sin desmerecer la trayectoria profesional y los méritos de las otras dos candidaturas de la terna.

.- Desde una perspectiva discente, Fernando Castillo Rigabert es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (Premio extraordinario de licenciatura) y doctor en Derecho por la misma Universidad (Premio extraordinario de doctorado).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

.- Por su parte, desde una perspectiva docente, el candidato nombrado es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia, impartiendo asignaturas de esta materia en la licenciatura y grado en Derecho, en el grado de Criminología, en el itinerario conjunto de Derecho y ADE. También en el nivel de postgrado; concretamente como profesor de la Escuela de Práctica Jurídica y del Máster de acceso a la Abogacía (hasta 2015); profesor de la asignatura "Complementos formativos de Derecho Procesal" en el Máster en Criminología y Delincuencia; impartición de seminarios sobre la prueba pericial en el Máster en Criminología y Delincuencia; profesor del Máster oficial de la Universidad de Almería "Protección de los créditos empresariales internos y transfronterizos" en el módulo "Solución extrajudicial de conflictos"; profesor del Master de Derecho Deportivo (modalidad on line) impartiendo las materias "Justicia deportiva" e "Inglés para el deporte", entre otros.

Ha sido ponente en numerosos cursos y jornadas abordando temas de todas las ramas jurisdiccionales. A título de ejemplo, las dos últimas activades han sido la participación en la mesa redonda organizada por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia sobre la Ley de Amnistía (junio 2024) analizando los aspectos procesales de la misma y la ponencia *"El régimen jurídico de la prueba digital"*, en el Seminario "Prueba digital e Inteligencia Artificial, desafíos y problemas de la Justicia en el S. XXI.

Junta al ámbito estrictamente docente, el candidato nombrado ha ocupado diversos cargos gubernativos en el ámbito universitario: Secretario General de la Universidad de Murcia (1990-94); Director del Departamento de Derecho Financiero, Internacional y Procesal (2022-24); Secretario del Departamento de Derecho Financiero, Internacional y Procesal (2018-20 y 2020-22) y Secretario de la Escuela de Práctica Jurídica (1983-2015).

.- El Pleno ha valorado especialmente que junto a la profesión jurídica en el ámbito universitario, el candidato nombrado posee una importante experiencia jurisdiccional, pues ha sido Magistrado suplente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (1998-2013) y ponente en más de 1.000 sentencias en esos años.

.- El candidato nombrado cuenta con una importante actividad científica, con una cuarentena de publicaciones de carácter jurídico en revistas y obras especializadas. Entre ellas destacan: *"Civil procedure. Spain"*. Separata impresa de International Encyclopaedia of Laws, Edit. Kluwer Law International, editor prof. Blanpain, Suplemento 24, (2002); coedición del libro "Ley de Enjuiciamiento Civil: respuesta a 100 cuestiones polémicas" (AAVV), Sepín,





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Madrid, 2002; *"Concursos y oposiciones en el ámbito de la Administración de Justicia"*, y *"Administración de Justicia y cláusula subrogatoria. Demarcaciones judiciales."*, en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia", obra colectiva dirigida por los profesores García Canales y Garrorena Morales Imprenta Regional, Murcia, 2005; *"Sistema judicial español"*, con Sigüenza López, Guiones de Estudio y materiales para clases prácticas, varias ediciones entre 2012 y 2022; *"Protección de los Derechos Fundamentales"*, con Díaz Pita y Hermosilla Sierra, en "Acceso a la Abogacía. Materias Comunes" (AAVV), coordinado por Díaz Pita, ed. Tecnos. Varias ediciones; *"Tribunales: Jurisdicción y Competencia; régimen general de actuaciones procesales en el Anteproyecto de Lecrim de 2020"*, en Reflexiones en torno al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, AAVV, dirigida por Jiménez Conde y Fuentes Soriano, Tirant lo Blanch, Valencia 2022; *"La Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los Municipios"* en Horizonte Justicia 2030, reflexiones críticas sobre los proyectos de eficiencia del Servicio Público de Justicia, AAVV, directora Díaz Pita, edit. Tecnos, Madrid 2022; y *"Oficinas de justicia en los municipios vs. Juzgados de Paz"*, en "La eficiencia de la justicia a debate" AA VV, dirección de Jiménez Conde, López Simó y Alba Cladera, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

Además de lo anterior, hay que resaltar que el Sr. Castillo Rigabert es Árbitro en la Junta Arbitral de Consumo (2019-actualidad) y presidente de la Comisión de Garantías de Derechos y Deberes del Voluntariado de Cruz Roja de la Región de Murcia (2023-actualidad).

La ponderación de todos estos méritos, considerados individualmente y en su conjunto, más otros que constan en su currículum, hace que el profesor titular de la Universidad de Murcia Fernando Castillo Rigabert sea considerado el aspirante más idóneo para el desempeño de plaza.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-82º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de una plaza de Magistrado o Magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la vía del artículo 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar Magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a María Pilar Arciniega Cano.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata, sin desmerecer la trayectoria profesional y los méritos de las otras dos candidaturas de la terna.

La candidata nombrada es Fiscal por oposición libre desde el año 2000. Accedió por turno libre a la Carrera Fiscal, con el núm. 6 de la XL promoción, y por turno libre a la Carrera Judicial, con el núm. 73 de la LII promoción (en la que se encuentra en excedencia).

Entre 1990 y 1995 cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Zaragoza.

Entre 1995 y 1997 prestó servicios como pasante en el despacho de Abogados Laguna & Fanlo, de Zaragoza, dedicado al derecho civil y mercantil.

Tras aprobar las oposiciones en el año 2000, entre septiembre de ese año y junio de 2001 realizó el curso teórico-práctico de formación inicial para acceso a la carrera fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Entre abril de 2001 y junio 2001 ejerció como Fiscal en prácticas en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Entre sep. 2001 y jun. 2002 obtención de licencia por estudios judiciales en la carrera fiscal e ingreso en la Escuela Judicial de Barcelona (quedando en situación de servicios especiales en la carrera fiscal) y realizando el curso teórico práctico de acceso a carrera judicial. Fue Juez en prácticas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta 2002, en el que pasó a prestar servicios en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Solicitó la excedencia voluntaria en la carrera judicial, que le fue concedida con efectos 27 de mayo de 2003. Una vez reincorporada a la carrera fiscal, entre 2003 – 2005 fue destinada a Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lérida, adscrita a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Balaguer (Lérida) hasta 2004. Desde 2004 al Juzgado de Instrucción nº 2 de Lérida. Fiscal especialista en incapacidades.

Entre 2005 a 2022 fue destinada en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca y ascendió a Fiscal de 2ª categoría en abril 2006:



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

- Adscrita a los Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbastro, posteriormente al Juzgado nº 2 de Huesca, de Violencia sobre la Mujer y Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca.
- Fiscal del servicio de menores, área de reforma, de 2005 a 2009.
- Fiscal delegada de Extranjería 2008 a 2010.
- Fiscal delegada de incapacidades 2009 a 2017.
- Fiscal delegada de Cooperación Jurídica Internacional desde 2018 a 2021.
- En diciembre de 2022 obtuvo plaza en comisión de servicio en la fiscalía provincial de Zaragoza y en mayo de 2023 obtuvo plaza de fiscal provincial de Zaragoza.

Acredita conocimiento de inglés (5º Curso en el Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza) y francés (4º Curso en el Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza).

La ponderación de todos estos méritos, considerados individualmente y en su conjunto, más otros que constan en su currículum, hace que la fiscal María Pilar Arciniega Cano, sea considerada la aspirante más idónea para el desempeño de plaza, sin desmerecer la trayectoria profesional y los méritos de las otras dos candidaturas de la terna.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-83º.-** Retirar, del orden del día, para su inclusión en un próximo Pleno, la propuesta de nombramiento a la Presidencia del Tribunal Militar Central.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-84º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la plaza de Juez/a Togado del Juzgado Togado Militar Central núm. 2 de Madrid, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar a la Coronel Auditor María del Valle López Alfranca.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata, única aspirante a la vacante ofertada.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Se significa que la candidata, con empleo de Coronel Auditor, ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar por oposición, el 1 de septiembre de 1995. Cuenta con más de 29 años de servicio en el mismo, tanto en destinos de asesoría jurídica como de jurisdicción.

En relación con estos últimos, estuvo destinada en el Juzgado Togado Militar Territorial núm. 21 de Sevilla (20/02/1998 al 14/04/2001) y en el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, (desde el 22/04/2021, hasta su ascenso a Coronel Auditor). Por lo tanto cuenta con una experiencia de cerca de 7 años en órganos de la jurisdicción militar. Aporta una extensa y completa relación de resoluciones judiciales.

Al margen de esta experiencia en órganos de la jurisdicción militar, la oficial auditor también se desempeñó en funciones de asesoría jurídica en la Delegación de Defensa de Tenerife (1996 a 1998), en la Subdirección General de Personal Militar del MINISDEF (2001 a 2007); en la Vicesecretaría General Técnica del MINISDEF (2007 a 2011); en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos (2011 a 2014), en el Gabinete de la Subsecretaría del MINISDEF (2014 a 2018) y en la Dirección General de Armamento (2018 a 2021). Desde noviembre de 2024 está en comisión de servicios en la Subdirección General de Patrimonio del MINISDEF.

Desde una perspectiva docente ha ejercido la docencia como profesora de la Escuela de Estudios Jurídicos y de la Academia Central de la Defensa (2011 a 2021). Desde el año 2000 la candidata nombrada es profesora del Máster del Máster de Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional de la Universidad de Nebrija.

Desde una perspectiva discente es diplomada en Derecho Penal Militar por el Ministerio de Defensa (2008) y ha realizado diversos cursos en el ámbito de la formación del citado Ministerio.

Además, es autora de 4 publicaciones de carácter jurídica y acredita un nivel excelente de francés.

La ponderación de todos estos méritos, considerados individualmente y en su conjunto, más otros que constan en su currículum, hace que la Coronel Auditor María del Valle López Alfranca, sea considerada plenamente idónea para el desempeño de plaza.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-85º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la presidencia del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar al Coronel Auditor Esteban José Hernando Zamanillo como auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato, sin desmerecer en absoluto los méritos y la trayectoria profesional de la otra candidatura.

El candidato designado, con empleo de Coronel Auditor, ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar por oposición, el 1 de septiembre de 1994. Tiene más de 30 años de servicio, tanto en destinos de asesoría jurídica como de jurisdicción.

En relación con estos últimos, fue Secretario Relator en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 43 de León, del 13/03/1996 al 16/03/1999; Secretario Relator en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 26 de Melilla, del 03/08/1999 al 09/04/2001; Secretario Relator en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 42 de Valladolid, del 10/04/2001 al 19/06/2006; Juez Togado en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 43 de Burgos, ejerciendo de Juez por sustitución en varios periodos en los Juzgados Togados Militares Territoriales nº 41 de A Coruña y nº 42 de Valladolid, del 20/06/2006 al 13/12/2018 y Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, del 10/05/2024 hasta la actualidad.

El Pleno ha valorado la mayor antigüedad en el escalafón oficial del Cuerpo Jurídico Militar, así como la mayor experiencia en destinos propios de la jurisdicción militar, respecto de las personas solicitantes de la vacante.

Al margen de esta experiencia en órganos de la jurisdicción militar, el oficial auditor también se desempeñó en funciones de asesoría jurídica en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos (1994 a 1995), en la Asesoría Jurídica de la Región Militar Noroeste (1995 a 1996), en la Dirección General de Personal del MINISDEF (2019 a 2021), así como en el Gabinete de la Secretaría General de Política de Defensa (2021 a 2024).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

De mayo a octubre de 2005 estuvo destinado en el contingente militar terrestre ASPFOR XI (OTAN), Qala-e-now (Afganistán).

Ha sido docente en la EPJ de Gijón (UNED, Asturias), entre 2005 y 2007; también ha sido profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Burgos (2016 y 2017), y preparador de las oposiciones al Cuerpo Jurídico Militar. Ha impartido una veintena de conferencias y ponencias en cursos y jornadas del ámbito del Ministerio de Defensa.

Desde una perspectiva discente es Máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" (UNED, 2017) y superó los cursos de posgrado en la Universidad de Burgos (1999 y 2000). Ha realizado diversos cursos y jornadas en el campo de la formación del Ministerio de Defensa.

Además, es autor de varias publicaciones de carácter jurídico y acredita un buen nivel de inglés y francés.

La ponderación de todos estos méritos, considerados individualmente y en su conjunto, más otros que constan en su currículum, hace que el Coronel Auditor Esteban José Hernando Zamanillo, sea considerado el candidato más idóneo para el desempeño de plaza.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-86º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la presidencia del Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar al Coronel Auditor Fausto Manuel Blanco Álvarez como auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato, único aspirante a la plaza convocada.

El candidato designado, con empleo de Coronel Auditor, ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar por oposición, el 1 de septiembre de 1993. Tiene más de 31 años de servicio, tanto en destinos de asesoría jurídica como de jurisdicción (y más de 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas).



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

En relación con estos últimos, tiene una amplísima experiencia: Fue Secretario Relator en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 41 de A Coruña, del 17/11/1995 al 21/10/1999; Secretario Relator en Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña, del 22/10/1999 al 07/05/2003; Fiscal Togado en la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña, del 08/05/2003 al 14/08/2013; Vocal Togado (vacante de Comandante Auditor) en el Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña, del 15/08/2013 al 26/02/2018; Vocal Togado (vacante de Teniente Coronel Auditor) en el Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña, del 23/01/2019 al 14/06/2021; Fiscal Jefe en la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña, del 15/06/2021 al 04/03/2024. Estuvo en comisión de servicio en los siguientes destinos de la Jurisdicción Militar: Juez Togado en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 41 de A Coruña, del 14/07/2015 al 13/07/2016; Oficial Auditor en el Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña, del 05/04/2018 al 04/10/2018; Juez Togado en el Juzgado Togado Militar Central nº 1 y nº 2 (Madrid), del 14/03/2024 hasta la actualidad.

Al margen de esta experiencia en órganos de la jurisdicción militar, sirvió como Teniente Auditor de la Asesoría Jurídica del Teniente Auditor del Mando Regional Noroeste.

Ha impartido diversas ponencias y conferencias en cursos de ámbito del Ministerio de Defensa.

Es diplomado en Derecho Penal Militar por el Ministerio de Defensa (2005) y ha realizado diversos cursos y jornadas en el campo de la formación del Ministerio de Defensa.

El candidato nombrado acredita un nivel excelente (C1) de inglés, excelente (C2) de francés, excelente (C1) de italiano, excelente (C2) de portugués y nivel excelente de gallego.

La ponderación de todos estos méritos, considerados individualmente y en su conjunto, más otros que constan en su currículum, hacen que el Coronel Auditor Fausto Manuel Blanco Álvarez, sea considerado plenamente idóneo para el desempeño de plaza.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-87º.-** Examinada la propuesta de la Comisión Calificación relativa a la provisión de la presidencia del Tribunal Militar Territorial Quinto de Santa Cruz de Tenerife, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 29/01/2025, acuerda nombrar al Coronel Auditor José Antonio López Arauzo como auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Quinto de Santa Cruz de Tenerife.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato, único aspirante a la plaza convocada.

El candidato designado, con empleo de Coronel Auditor, ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar por oposición, el 1 de septiembre de 1993. Tiene más de 31 años de servicio, tanto en destinos de asesoría jurídica como de jurisdicción (y más de 34 años de servicio en las Fuerzas Armadas).

En relación con estos últimos, tiene una amplia experiencia: Fue Secretario Relator en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 51 de Santa Cruz de Tenerife, del 13/11/1997 al 30/07/1998; Secretario Relator en Tribunal Militar Territorial V de Santa Cruz de Tenerife, del 31/07/1998 al 11/07/2000; Vocal Togado (vacante de Teniente Coronel Auditor) en el Tribunal Militar Territorial V de Santa Cruz de Tenerife, del 03/09/2019 al 06/02/2023; Fiscal Jefe en la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial V de Santa Cruz de Tenerife, del 07/02/2023 al 21/09/2023. Aporta una completa y sistemática relación de 59 sentencias.

Al margen de esta experiencia en órganos de la jurisdicción militar, sirvió en la Zona Marítima de Canarias (1994 a 1995), en el Mando Aéreo de Transporte en Zaragoza (1995 a 1996), en la Asesoría Jurídica de la 8ª Zona de la Guardia Civil en Zaragoza (2000 a 2019) y Asesoría Jurídica de la Guardia Civil (desde 2023 a la actualidad).

Ha estado destinado en varias misiones internacionales: Ha sido asesor jurídico de los contingentes españoles en Kabul (septiembre de 2002 a enero de 2003), en Iraq (abril de 2004 a junio de 2004), en Kosovo (agosto de 2006 a febrero de 2007) y en Sarajevo (agosto a diciembre de 2009).

El candidato nombrado ha sido Abogado del Estado habilitado en Zaragoza (2012 a 2018).





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La ponderación de todos estos méritos, considerados individualmente y en su conjunto, más otros que constan en su currículum, hacen que el Coronel Auditor José Antonio López Arauzo, sea considerado plenamente idóneo para el desempeño de plaza.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-88º.-** Nombrar para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial a:

Javier de las Heras Dargel y a Daniel Codoñer Collado para el cargo de magistrados suplentes de la Audiencia Provincial de Valencia.

Comunicar el acuerdo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y notificarlo a los interesados a través de este último.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo (o a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el "Boletín Oficial del Estado").

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-89º.-** Nombrar para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial a:

Javier Zaballós Zurilla para el cargo de juez sustituto de los juzgados de Albacete, Alcaraz, Almansa, Casas-Ibáñez, Hellín, Roda (La), Villarrobledo (Albacete).

Comunicar el acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y notificarlo al interesado a través de este último.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo (o a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el "Boletín Oficial del Estado").

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-90º.-** Nombrar para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial a:

Marta Pérez Arroyo, a Carlos Llombart Centeno y a Yolanda Mosteiro Velasco, para el cargo de jueces/zas sustitutos/as de los juzgados de Valladolid, Medina de Rioseco, Medina del Campo (Valladolid).

Comunicar el acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y notificarlo a los/as interesados/as a través de este último.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo (o a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el "Boletín Oficial del Estado").

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-91º.-** Nombrar para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial a:

Montserrat Rodríguez Cabrera y a Isis Calafell Vegas para el cargo de juezas sustitutas de los juzgados de Girona, Bisbal d'Empordà (La), Blanes, Figueres,



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Olot, Puigcerdà, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners (Girona).

Guillem Bernat Pérez-Tormo y a Alfonso Martín Palomino para el cargo de jueces sustitutos de los juzgados de Barcelona, Arenys de Mar, Badalona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Hospitalet de Llobregat (L'), Igualada, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Prat de Llobregat (El), Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Girona, Bisbal d'Empordà (La), Blanes, Figueres, Olot, Puigcerdà, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners (Girona), Lleida, Balaguer, Cervera, Seu d'Urgell (La), Solsona, Tremp, Vielha e Mijaran (Lleida) y Tarragona, Amposta, Falset, Gandesa, Reus, Tortosa, Valls, Vendrell (El) (Tarragona).

Comunicar el acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y notificarlo a los/as interesados/as a través de este último.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo (o a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el "Boletín Oficial del Estado").

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-92º.-** Al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, disponer la rectificación del Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del día 18 de diciembre de 2024, en el que literalmente se dispone:

*"Ampliar en tres las plazas de jueces y juezas sustitutos/as de los juzgados de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Javier, Totana y Yecla.*



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

*Nombrar a Belén Sánchez Martínez y Pedro José López Más para el cargo de jueza sustituta y juez sustituto de los juzgados de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Javier, Totana y Yecla, para el año judicial 2023/2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial. No procede el nombramiento de María de la Luz Sánchez Martínez por estar nombrada jueza sustituta de los juzgados de Melilla por acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 24 de julio de 2024, y no constar su renuncia.", en el sentido de modificar el texto del acuerdo de la siguiente forma:*

*"Ampliar en tres las plazas de jueces y juezas sustitutos/as de los juzgados de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Javier, Totana y Yecla.*

Nombrar a Belén Sánchez Martínez y Pedro José López Más para el cargo de jueza sustituta y juez sustituto de los juzgados de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Javier, Totana y Yecla, para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial. No procede el nombramiento de María de la Luz González Sánchez por estar nombrada jueza sustituta de los juzgados de Melilla por acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 24 de julio de 2024, y no constar su renuncia."

Comunicar el acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y notificarlo a los/as interesados/as a través de este último.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-93º.-** Nombrar para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial a:



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Pedro Rebollo Díaz para el cargo de juez sustituto de los juzgados de Barcelona, orden civil, previa renuncia a su cargo de magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Comunicar el acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y notificarlo al interesado a través de este último.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo. (o a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»).

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-94º.-** Nombrar para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial a:

María Ángeles Llinares Maza, para el cargo de jueza sustituta de los juzgados de Ciutadella de Menorca y Maó.

Comunicar el acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y notificarlo a la interesada a través de este último.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo (o a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el "Boletín Oficial del Estado").

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-95º.-** 1.- Tener por renunciada para el año judicial 2024/2025, para la que fue nombrada por acuerdo de la Comisión Permanente de 24 de julio de 2024, de conformidad con lo establecido en los artículos 201.5 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103.1 b) del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, a Loreto Arroyo Abad a su cargo de jueza sustituta de los juzgados de Palencia, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga (Palencia).

2.-Nombrar para el año judicial 2024/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial a:

Lidia Portela Mosquera, para el cargo de magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Palencia y a Javier Alfonso Martínez Robles para el cargo de juez sustituto de los juzgados de Palencia, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga (Palencia).

Comunicar el acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y notificarlo a los/as interesados/as a través de este último.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo (o a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el "Boletín Oficial del Estado").

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-96º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe al proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

**I-97º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe al proyecto de real decreto por el que se regularizan los anexos II.2, V.2 y VI de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**I-98º.-** Tomar conocimiento de la propuesta que realiza la Comisión de Estudios e Informes, en cumplimiento de la encomienda del Pleno efectuada por acuerdo de 18 de diciembre de 2024, para la actualización, revisión y/o reforma de las normas reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial.

Designar a los Vocales coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo que se constituyan para la actualización, revisión y/o reforma de los siguientes Reglamentos:

Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial:

- Ricardo Bodas Martín
- Gema Espinosa Conde
- Alejandro Abascal Junquera
- Lucía Avilés Palacios

Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los tribunales:

- José María Fernández Seijo
- José Páez Martínez-Virel

Reglamento 1/2005, 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales:

- Luis Martín Contreras
- José Carlos Orga Larrés

Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial:

- Bernardo Fernández Pérez
- Isabel Revuelta de Rojas

Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales

- José Antonio Montero Fernández
- Argelia Queralt Jiménez

**I-99º.-** 1.- Aprobar un presupuesto máximo para la ejecución de las actividades del Plan Estatal 2025, "Formación jurídica especializada presencial (primer cuatrimestre)" de cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro euros (452.474 €), "Formación jurídica especializada no



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

presencial (virtual y formación a distancia)" de ciento cuatro mil cien euros (104.100 €), "Formación Jurídico-Económica" de treinta y tres mil ciento noventa y nueve euros con sesenta céntimos (33.199,60 €), "Formación en Derecho Europeo" de trescientos dos mil euros cuatrocientos noventa y dos euros con ochenta y dos céntimos (302.492,82), "Formación en materia de justicia y discapacidad" de sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres euros con cuarenta céntimos (68.943,40 €), "Formación sobre Igualdad" de ciento veinticinco mil ochocientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (125.882,20 €), "Formación medioambiental" de nueve mil seiscientos euros (9.600 €), Formación en materia de inmigración de treinta mil veintitrés euros con sesenta céntimos (30.023,60 €), "Formación en materia de protección de los Derechos Humanos" de cuarenta y ocho mil cincuenta y siete euros con sesenta céntimos (48.057,60 €), "Formación en competencias digitales" de ochenta y ocho mil cincuenta y siete euros con veinte céntimos (88.057,20 €), "Formación en ética" de treinta y ocho mil setecientos ocho euros con veinte céntimos (38.708,20 €), "Formación en habilidades personales" de ciento treinta y dos mil setecientos noventa y nueve euros con cuarenta céntimos (132.799,40 €), "Actividades en colaboración con otras instituciones" (primer cuatrimestre) de ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un euros con ochenta céntimos (165.481,80 €), todo ello, en los términos que se detallan en la memoria presupuestaria que se acompaña, que contiene los presupuestos máximos para cada actividad y bloque, imputables al CGPJ. El presente gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del Consejo.

2.- Delegar en la Comisión de Escuela Judicial, la designación de los colaboradores docentes que participarán en las acciones formativas, y la aprobación de los programas concretos de las actividades del Plan Estatal de Formación para el ejercicio 2025.

3.- Aprobar la retribución del personal que atenderá las acciones formativas previstas en el Plan Estatal 2025 que se celebrarán fuera de Madrid, con cargo al presupuesto de Formación de Jueces y Magistrados del ejercicio 2025, programa 111.O cuyo detalle se contiene en el anexo III.

4.- Delegar expresamente en el Secretario General del Consejo, la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de las actividades formativas que se contiene en la presente propuesta, impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas, siempre que no supere el importe total de lo presupuestado.





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-100º.-** 1.-Designar las direcciones académicas del Encuentro de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con órganos de la jurisdicción social, del Encuentro de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con presidencias de salas de lo social de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional, y del Curso "El derecho a entender" actividades del Plan Estatal de Formación Continua de los integrantes de la Carrera Judicial del año 2025, conforme a lo especificado en el presente acuerdo.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-101º.-** Nombrar a Alberto Varona Jiménez, magistrado en comisión de servicios con relevación de funciones en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid, como Vocal de la Comisión de Selección a la que se refiere el art. 305 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, concediéndole comisión de servicio, con derecho a los gastos que reglamentariamente le correspondan, para su asistencia a las reuniones convocadas por el Presidente de la citada Comisión de Selección.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-102º.-** 1º.- Autorizar la convocatoria de la XII Edición de los Premios Calidad de la Justicia, 2024-2025, que se regirán por las siguientes bases:

a) El objeto de los Premios es reconocer y distinguir a órganos y oficinas judiciales y otras entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia, que hayan destacado por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión, en el período comprendido entre el 31 de enero de 2024 a 1 de febrero de 2025.

Se establecen tres modalidades con dos categorías en cada una de ellas:

- Experiencia para conseguir una Justicia más eficaz.
  - Categoría de órgano/oficina judicial.
  - Categoría de Administración o entidad, pública o privada, relacionada con la Administración de Justicia.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

- Experiencia para conseguir una Justicia más transparente.
  - Categoría de órgano/oficial judicial.
  - Categoría de Administración o entidad, pública o privada, relacionada con la Administración de Justicia.
- Experiencia para conseguir una Justicia más accesible.
  - Categoría de órgano/oficina judicial.
  - Categoría de Administración o entidad, pública o privada, relacionada con la Administración de Justicia.

b) Podrán tomar parte todos los órganos y oficinas judiciales españoles, así como las administraciones públicas y entidades, públicas o privadas, relacionadas con la Administración de Justicia.

c) Los participantes deberán presentar en formato digital una "Memoria justificativa de los méritos contraídos", que deberá contener los siguientes extremos:

- Identificación del órgano, oficina o entidad aspirante al Premio y breve descripción de su actividad.
- Identificación de los/as representantes de la candidatura que no podrá ser superior a tres personas.
- Modalidad y categoría del premio al que se opta.
- Sumario del contenido de la memoria.
- Descripción del proyecto.
- Resultados.
- Innovación.

Esta memoria se referirá a los proyectos puestos en marcha durante el período comprendido entre el 31 de enero de 2024 y el 1 de febrero de 2025, podrá tener una extensión máxima de hasta cinco páginas, escritas en fuente verdana, tamaño 11 y espacio interlineado de 1,5. Se podrá aportar documentación complementaria si bien la decisión del jurado se tomará sobre la base de la memoria.

Todo ello deberá remitirse al Consejo General del Poder Judicial, Sección de Oficina Judicial ("Premios Calidad Justicia"), por correo ordinario a la calle Marqués de la Ensenada nº 8, Madrid 28071, o bien por correo electrónico a la dirección [premioscalidadjusticia@cgpj.es](mailto:premioscalidadjusticia@cgpj.es), para su tramitación ante la Comisión de Asuntos Institucionales del CGPJ, que tiene atribuida la competencia de los presentes Premios.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

La fecha límite de presentación de candidaturas será el 31 de marzo de 2025, no admitiéndose solicitudes recibidas con posterioridad a esta fecha.

2º.- Acordar el nombramiento del Jurado de los Premios Calidad de la Justicia XII Edición, en los siguientes términos:

- Tres Vocales del Consejo General del Poder Judicial: don Luis Martín Contreras, que asume la presidencia, don José Carlos Orgaz Larres y doña Inés María Herreros Hernández.
- Un/a abogado/a, un/a procurador/a de los tribunales, un/a fiscal, un/a letrado/a de la administración de justicia, un/a graduado/a social, y un/a catedrático/a de una disciplina jurídica.

Diríjase comunicación al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores de España, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y a la Crue Universidades Españolas, para que designen la persona que formará parte del Jurado de los Premios en representación de esos colectivos profesionales.

En virtud de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, deberán proponer un hombre y una mujer como posibles miembros de cada uno de los indicados órganos representados, siendo elegido posteriormente por parte de este Consejo General del Poder Judicial uno/a, con el fin de formar un Jurado acorde a lo preceptuado por la referida Ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

El Jurado estará asistido por la letrada de la sección de Planta y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial, que actuará como secretaria de las reuniones con voz, pero sin voto. En caso de empate en las votaciones el voto del Presidente será dirimente.

El Jurado se reunirá una vez agotado el plazo de presentación de candidaturas, para valorar y decidir la concesión de los Premios Calidad de la Justicia en sus distintas modalidades y categorías. Se otorgará un premio por cada modalidad y categoría sin que pueda ampliarse este número. A cada candidatura ganadora se entregará una placa o figura conmemorativa, así como un diploma para cada persona que represente a la candidatura.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

3º.- A la convocatoria de los Premios se le dará la oportuna difusión a través de la página web del Consejo General del Poder Judicial, la oficina de Comunicación del Consejo, Tribunales y organismos judiciales europeos con vinculación con el Estado español y demás canales que se consideren oportunos, en orden a que puedan tener conocimiento de la convocatoria las facultades de derecho, asociaciones y sindicatos; y, en general, instituciones o corporaciones relacionadas con la justicia.

4º.- Comuníquese a los Tribunales Superiores de Justicia, a las presidencias de Audiencias Provinciales, a los decanatos de jueces, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas.

5º.- Publíquese este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

6º.- Encomendar a la sección de Planta y Oficina Judicial del Servicio de Personal Judicial la ejecución del presente acuerdo, para su tramitación ante la Comisión de Asuntos Institucionales del CGPJ, que tiene la competencia de los presentes Premios.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-103º.-** Tomar conocimiento del decimocuarto Informe anual de Francisco Javier Forcada Miranda sobre la actividad desarrollada en el cargo de juez español de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de la Haya durante el año 2024, en español y en su versión inglesa, aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales, en su reunión de 15 de enero de 2025.

Dar difusión del precitado informe, en español y en su versión inglesa, a los integrantes de la Carrera Judicial, a través de los/as presidentes/as de los tribunales superiores de justicia.

Delegar la ejecución del presente acuerdo en el Servicio de Relaciones Internacionales.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación del mismo.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**I-104º.-** *"PRIMERO.- Dividir la Sección de Igualdad y Violencia de Género en dos Secciones diferenciadas, correspondientes a cada uno de los ámbitos de actuación. Dichas secciones tomarán la denominación de sección de Violencia de Género y Sección de Igualdad. Las jefaturas de sección tomarán esta misma denominación, cuando así lo apruebe en su caso, el Pleno, en la primera modificación de la relación de puestos de trabajo que se lleve a cabo.*

*SEGUNDO.- Solicitar de la Comisión de Asuntos Económicos que, en los trabajos preparatorios del siguiente anteproyecto de presupuesto de este Consejo, analice la dotación de personal necesaria para las secciones de Igualdad y de Violencia de Género."*

**I-105º.-** 1º).- Comunicar a la Dirección General de las Personas con Discapacidad que la Vocal Titular representante del Consejo General del Poder Judicial en la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad será la Vocal de este Consejo General del Poder Judicial y Presidenta del Foro Justicia y Discapacidad, Excm. Sra. D<sup>a</sup> Isabel Revuelta de Rojas. Y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.4.b) del Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

2º).- Proponer la designación del Vocal de este Consejo General del Poder Judicial y Vocal del Foro Justicia y Discapacidad, Excmo. Sr. D. José María Fernández Seijo, como suplente de la vocalía titular en la indicada Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, para los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada.

Comunicar el presente acuerdo a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**II-1º.-** Desestimar el recurso de alzada núm. 425/2024, interpuesto por XXX XXX, contra el acuerdo de 12 de junio de 2024, adoptado por el magistrado-juez Decano de los Juzgados XXX XXX, por el que se archiva el expediente de queja núm. 223/2024, instruido contra el Juzgado XXX núm. XX de XXX.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al magistrado-juez Decano de los Juzgados de XXX XXX.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-2º.-** Desestimar el recurso de alzada núm. 462/2024, interpuesto por XXX XXX, jueza sustituta del Tribunal Superior de Justicia XXX XXX, contra el acuerdo de 14 de agosto de 2024, del presidente del citado Tribunal Superior de Justicia, por el que se comunica a la recurrente que no procede la notificación a ésta del acuerdo adoptado el 25 de julio anterior en el expediente gubernativo núm. 164/2024, relativo a la fase de sustitución y refuerzo de los jueces/zas en prácticas de la 73ª promoción, al no constar la XXX XXX como interesada.

Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente.

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y comuníquese a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia XXX XXX.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-3º.-** Inadmitir el recurso de reposición núm. 571/2024, interpuesto por XXX XXX, presidenta de la Sección XXX de la Audiencia Provincial de XXX, contra el acuerdo de este Pleno, adoptado en su reunión de 23 de octubre de 2024, por el que se desestima el recurso de alzada núm. 388/2024, formulado por la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

recurrente frente al acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de XXX XXX, de fecha 20 de mayo de 2022, relativo a determinadas decisiones en el reparto de asuntos y señalamientos de deliberaciones adoptadas por la recurrente.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de XXX XXX.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-4º.-** Inadmitir por falta de legitimación el recurso de alzada núm. 417/2024, interpuesto por XXX XXX, contra el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia XXX XXX, el 19 de junio de 2024, por el que se aprueba el informe, emitido en igual fecha por la Comisión designada al efecto, relativo al crédito asignado al referido Tribunal para sustituciones de jueces y magistrados en 2024; y frente al acuerdo de la citada Sala de Gobierno de 3 de julio de 2024, por el que se dispone remitir a este Consejo informe en relación con el recurso de alzada interpuesto por la misma recurrente contra el anterior acuerdo de 19 de junio de 2024.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia XXX XXX.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-5º.-** Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada núm. 449/2024, interpuesto por XXX XXX, contra el acuerdo de la magistrada-juez XXX XXX, de fecha 31 de mayo de 2024, por el que se desestima su solicitud de justicia gratuita para la impugnación de un acta de comunidad de propietarios en juicio



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

ordinario por el artículo 17.2 de la ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la magistrada-juez XXX XXX.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-6º.-** Denegar la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 16/2025, interpuesto por XXX XXX, titular del Juzgado XXX núm. XX de XXX, contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 9 de enero de 2025, por el que se establece una medida de apoyo para reforzar el Juzgado XXX núm. XX de XXX XXX; consistente en una comisión de servicio con relevación de funciones, a favor de XXX XXX, titular del Juzgado XXX XXX núm. XX de XXX XXX.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y a la interesada y comuníquese a la Sección de Oficina y Planta Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-7º.-** Estimar en parte el recurso de alzada núm. 439/2024, interpuesto por XXX XXX, jueza sustituta, contra el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en sesión celebrada el 16 de julio de 2024, relativo a la ampliación del llamamiento de la recurrente en el Juzgado XXX núm. XX de XXX y, en consecuencia y en base a la argumentación plasmada en los fundamentos de derecho del presente Acuerdo, recabar de los órganos competentes el alta de la recurrente en el





## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Régimen General de la Seguridad Social desde el 04.07.2024, (según petición plasmada en el suplico del recurso), hasta el día 22 de julio de 2024, (fecha del alta médica y también según petición plasmada en el suplico del recurso), ambos días incluidos, con la consiguiente cotización por dicho período y con la percepción por la recurrente de las prestaciones derivadas de la incapacidad temporal, derivada de enfermedad común, durante ese tiempo, (desde el 4º día de I.T. hasta el 20º día de I.T. a razón del 60% de la base reguladora por contingencias comunes; y a partir del 21º día de I.T. en adelante y hasta el alta médica el 75% de tal base reguladora), debiendo devengarse en su caso las vacaciones no disfrutadas a partir del día siguiente a la fecha de alta médica.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-8º.-** Estimar parcialmente el recurso de alzada nº 422/2024 interpuesto por XXX XXX, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de sendos recursos de revisión formulados por la recurrente ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la Ejecutoria XX/2020, únicamente en lo que refiere a la petición de acceso documental arriba expuesta y en los términos expuestos, según lo cual, se declara nula de pleno derecho y sin efecto la desestimación presunta de la solicitud recurrente de entrega de testimonios y se acuerda, a través de la presente, acceder a ella con el alcance que determine el responsable del tratamiento de datos del órgano judicial en atención al interés legítimo apreciado (y sin perjuicio de que la recurrente pueda ser requerida a delimitarlo nuevamente), e,

Inadmitir el recurso en lo que refiere al resto de peticiones, así como el recurso acumulado nº 423/024, por referir a actos no susceptibles de recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente.

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y comuníquese a la Presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-9º.-** Estimar el recurso de alzada núm. 519/2024, interpuesto por XXX XXX magistrada titular del Juzgado XXX XXX núm. XX de XXX, contra el acuerdo de 25 de septiembre de 2024, adoptado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de XXX, relativo a su solicitud de concesión de licencia por cuidado de hijo, y, en consecuencia reconocer que la competencia para la concesión de la licencia por cuidado de hijo le corresponde al presidente de los Tribunal Superior de Justicia XXX.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia XXX.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-10º.-** Desestimar el recurso de alzada núm. 521/2024, interpuesto por , magistrada titular del Juzgado XXX núm. XX de XXX, contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de este órgano constitucional, en su reunión del día 25 de septiembre de 2024, por el que se dispone una medida de refuerzo para el Juzgado XXX núm. XX de XXX, con competencia provincial en asuntos relativos a demandas sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea persona física; consistente en la renovación de la comisión de servicio sin relevación de funciones, a favor de la magistrada recurrente, exclusivamente para el mes de julio de 2024.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente e interesada y a la Sección de Planta y Oficina Judicial del Servicio de Personal y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**II-11º.-** Inadmitir el recurso de alzada núm. 32/2025, interpuesto por XXX XXX, contra los acuerdos de la Comisión de Calificación de este Órgano Constitucional, adoptados en su reunión del día 16 de enero de 2025, por los que se eleva al Pleno, para la provisión de las plazas de magistrado/a de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (turno de juristas), en vacantes generadas por las jubilaciones de los magistrados de la misma Sala y turno, don Francisco Javier Borrego Borrego y don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, sendas propuestas de nombramiento a favor de los/as aspirantes relacionados en los citados acuerdos.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por unanimidad.

**III-1º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 280/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**III-2º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe de responsabilidad patrimonial núm. 072/2024 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de Justicia por XXX XXX y XXX XXX.

**III-3º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 271/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-4º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 289/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-5º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 203/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-6º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 204/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-7º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 275/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX en su propio nombre y en representación de XXX XXX.

**III-8º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 048/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-9º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 270/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de Justicia por XXX XXX.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**III-10º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 299/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-11º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 261/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-12º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 279/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-13º.-** Rectificar, por asentimiento, el error material de la errata detectada en el Acuerdo 58 del Anexo 1 del Pleno con fecha 13/11/2024, en el sentido de donde dice Donde dice "Informe núm. 19/24 sobre responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se emite en el expediente núm. 581/21 del Ministerio de Justicia.

Vocal ponente: José María Páez Martínez-Virel", debe decir "Informe núm. 19/24 sobre responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se emite en el expediente núm. 585/21 del Ministerio de Justicia. Vocal ponente: José María Páez Martínez-Virel."

**III-14º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 125/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-15º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 287/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-16º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 293/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-17º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 266.24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-18º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 213.24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de Justicia por la Comunidad de Vecinos de XXX XXX de XXX XXX.

**III-19º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 246.24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.

**III-20º.-** Aprobar, por asentimiento, el informe núm. 296/24 emitido en el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por XXX XXX.